



**UNIVERSIDAD NACIONAL  
“PEDRO RUIZ GALLO”  
ESCUELA DE POSTGRADO**



**MAESTRIA EN DERECHO**

---

**“ANÁLISIS DE LA POLÍTICA CRIMINAL DEL ENDURECIMIENTO  
PUNITIVO PARA ENFRENTAR LA INCIDENCIA DELICTIVA EN  
EL DELITO DE ROBO DURANTE LOS AÑOS 2014-2016 EN EL  
DISTRITO DE CHICLAYO ”**

**TESIS**

**PRESENTADA PARA OPTAR EL GRADO DE MAESTRA EN  
DERECHO CON MENCIÓN EN  
CIENCIAS PENALES**

**AUTOR:**

**ABOG. DANIA NOEMÍ PEÑA CHAQUILA**

**ASESOR:**

**Dr. RICARDO PONTE DURANGO**

**LAMBAYEQUE-PERÚ**

**2018**

La presente Tesis, denominada “Análisis de la Política Criminal del endurecimiento punitivo para enfrentar la incidencia delictiva en el delito de robo durante los años 2014-2016 en el Distrito de Chiclayo”, es presentada por la Abog. Dania Noemí Peña Chaquila a la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo, para optar el Grado de Maestra en Derecho con Mención en Ciencias Penales.

**TESIS PRESENTADA AL JURADO:**

---

Presidente: DR. JOSE MARIA BALCAZAR ZELADA

---

Secretario: DR. FREDDY WIDMAR HERNANDEZ RENGIFO

---

Vocal : RAFAEL HERNÁNDEZ CANELO

**Presentada por:**

---

ABOG. DANIA NOEMÍ PEÑA CHAQUILA  
MAESTRANTE

---

DR. RICARDO PONTE DURANGO  
ASESOR

## **DEDICATORIA**

A Dios por haberme permitido llegar hasta este punto y haberme dado salud para lograr mis objetivos, además de su infinita bondad y amor.

A mis padres Pedro y Florencia por su motivación constante que me ha permitido ser una persona de bien, por su gran ejemplo de superación y valioso apoyo en mis estudios y por compartir conmigo buenos y malos momentos.

A todos mis familiares y amigos que de una u otra manera estuvieron pendientes a lo largo de este proceso, brindando su apoyo incondicional.

## **AGRADECIMIENTO**

A Dios por ser el motor de mi vida, por no haber dejado que me rinda en ningún momento e iluminarme para salir adelante, porque todo lo que tengo, lo que puedo y lo que recibo es regalo que él me ha dado.

A toda mi familia ya que estuvieron apoyándome a lo largo de mis estudios de Maestría y dándome fuerzas para seguir adelante.

Quiero agradecer sinceramente a aquellas personas que compartieron sus conocimientos conmigo, para hacer posible la conclusión de esta tesis. Especialmente agradezco a mi asesor Dr. Ricardo Ponte Durango, por su asesoría siempre dispuesto aún en la distancia.

## INDICE TEMÁTICO

<b>RESUMEN</b> .....	8
<b>ABSTRACT</b> .....	9
<b>INTRODUCCIÓN</b> .....	10
<b>CAPITULO I: MARCO METODOLÓGICO</b> .....	13
1. FORMULACIÓN DEL CONTEXTO DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN...	13
2. FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA PROBLEMATIZADORA .....	16
3. OBJETIVOS DE ESTUDIO EN LA INVESTIGACIÓN .....	16
4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO .....	17
5. TIPO DE INVESTIGACIÓN.....	19
6. HIPÓTESIS Y VARIABLES: .....	21
<b>CAPITULO II: CONSIDERACIONES SOBRE POLÍTICA CRIMINAL</b> .....	23
1. Concepto de Política Criminal.....	24
2. Objeto y Área de Investigación de la Política Criminal. ....	25
3. Evolución histórica de la Política Criminal. ....	27
3.1. Escuela Clásica .....	28
3.2. Escuela Positivista.....	29
3.3. Tercera Escuela Italiana (Terza Scuola). ....	30
4. Escuelas Modernas .....	31
4.1. Escuela Político Criminal .....	31
4.2. Escuela de la Nueva Defensa Social.....	32
4.3. Escuela Técnico Jurídica.....	33
4.4. Escuela Finalista o Teoría de la Acción Final.....	34
5. Funciones de la Política criminal .....	36
6. Finalidad de la política criminal.....	38
7. Decisiones de política criminal.....	40
8. Modelos de política criminal .....	44
9. Política Criminal y Control Social.....	50
10. Política Criminal y Derecho Penal.....	52
11. Política Criminal y Criminología.....	55
12. La Política Criminal y su relación con la Criminología y el Derecho Penal .....	56

<b>CAPITULO III: LAS TEORIAS DE LA PENA Y SU APLICACIÓN EN EL CÓDIGO PENAL</b>	60
1. Teorías retributivas o absolutas.....	60
2. Teorías relativas (teorías preventivas puras).....	62
2.1. Teoría preventivo-general. ....	63
2.1.1. Teoría preventivo-general intimidatoria.....	63
2.1.2. Teoría preventivo-general positiva o integradora. ....	64
2.2. Teoría preventivo-especial. ....	65
3. Teorías de la unión. ....	66
4. Fines de la pena en el ordenamiento jurídico peruano.....	68
4.1. Fin resocializador de la pena. ....	68
4.2. Fin protector de la pena.....	70
4.3. Fin preventivo de la pena. ....	71
<b>CAPITULO IV: LA CRIMINALIDAD PATRIMONIAL (DELITO DE ROBO AGRAVADO) EN EL PERÚ</b>	73
1. Consideraciones generales sobre las estadísticas y la medición del crimen.....	73
2. Los sistemas de registro de la criminalidad en el Perú .....	78
3. La criminalidad patrimonial y sus principales manifestaciones .....	82
4. Los costos de la criminalidad patrimonial.....	85
<b>CAPÍTULO V: LA POLÍTICA CRIMINAL PERUANA FRENTE AL DELITO DE ROBO AGRAVADO EN EL CÓDIGO PENAL, CONCEPTO, DESCRIPCIÓN TÍPICA Y SUS DISTINTAS MODIFICACIONES</b>	91
1. Consideraciones dogmáticas sobre el delito de robo .....	91
2. Delito de robo (ARTICULO 188°), según Código Penal peruano 1991.....	93
3. Circunstancias agravantes del robo, según Código Penal peruano de 1991 Robo con agravantes (art. 189). ....	95
4. Modificaciones legislativas del tipo de robo. ....	96
5. Tendencia de la política criminal aplicada al delito de robo.....	100
6. Estado actual de la política criminal: diagnostico expansión del Derecho Penal. ...	109
7. Los fenómenos expansivos .....	110
7.1. El Derecho penal simbólico .....	111
7.2. El resurgir del punitivismo.....	113
8. Punitivismo y Derecho penal simbólico.....	114
<b>CAPITULO VI: PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	116
1. Formas de Participación Ciudadana. ....	118

2. Objetivos de la Participación Ciudadana .....	119
3. La Participación Ciudadana en la Prevención del Delito.....	120
3.1. Enfoque situacional. ....	120
3.2. Enfoque Social.....	123
3.3. Prevención Comunitaria. ....	125
4. El Factor Criminológico sobre la incidencia delictiva en el delito de robo.....	126
5. La Realidad Criminológica: Evaluado en el Análisis de Tesis. ....	127
6. Evaluación de la Política Criminal en el País.....	130
7. Diseño de una política criminal para los delincuentes .....	135
8. Desarrollo de Nuestra Hipótesis. ....	137
9. Descripción de la hipótesis. ....	138
<b>CAPITULO VII: EVALUACIÓN METODOLÓGICA DE LA TESIS.....</b>	<b>140</b>
1. Diseño de Contrastación de la Hipótesis.....	140
2. Universo de Estudio: Población y Muestra.....	140
3. Análisis de las Variables e Indicadores Utilizados en la Investigación.....	141
4. Nivel de Valoración del Maestrante en la Acreditación de la Información Administrada .....	141
5. Localidad e Institución Donde se Desarrolla el Proyecto. ....	142
6. Materiales, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos.....	142
7. Métodos y Procedimientos para la Interpretación de datos. ....	144
Métodos Jurídicos: .....	144
8. Análisis e Interpretación de Datos.....	145
<b>CONCLUSIONES .....</b>	<b>156</b>
<b>RECOMENDACIONES .....</b>	<b>160</b>
<b>BIBLIOGRAFÍA.....</b>	<b>163</b>

## **RESUMEN**

El tema de encontrar mecanismos que apoyen la disminución de índices delincuenciales ha sido ampliamente debatido en distintas esferas de las sociedades contemporáneas. A lo largo de la historia de la humanidad este tipo de conductas fueron frecuentes si tomamos en consideración que cada individuo busca su supervivencia a costa de la vulneración de normas preestablecidas. Uno de esos mecanismos tendientes a erradicar fenómenos de criminalidad es el rigor y endurecimiento de penas, que se encuentra formando parte de un sector dentro del Derecho Penal denominado políticas criminales. En nuestro país este fenómeno se ha dado como mecanismo tendiente a disminuir la criminalidad pero se distingue que no ha surtido el efecto deseado. Por ello en este trabajo investigativo está destinado a realizar un análisis del aumento de penas, para vislumbrar si esta posición ha funcionado como mecanismo de disminución delincencial, o por el contrario solo obedece a posiciones y coyunturas políticas fuera de un estudio técnico previo y plantear una solución alternativa viable a la disminución de la delincuencia.

El control social es el conjunto de medios a través de los cuales una sociedad garantiza que la conducta de cada uno de sus miembros sea congruente con los parámetros de conducta previamente establecidos por ellos; de igual forma se refiere a la capacidad de respuesta de la sociedad ante el incumplimiento de dicho parámetros.

Derecho penal constituye el conjunto de normas jurídicas penales establecidas por el Estado con fines preventivos y represivos, que comprenden los hechos punibles y las respectivas sanciones a quienes los cometen.

La Política Criminal, como el conjunto de objetivos, estrategias, planes y acciones orientadas a prevenir y reducir la criminalidad.

A la criminología le interesa el estudio en la conducta delictiva, la víctima y el control social, asimismo busca los factores que conducen a la criminalidad, en consecuencia conociendo las causas que originan la criminalidad.



## **ABSTRACT**

The issue of finding mechanisms that support the reduction of criminal indices has been widely debated in several spheres of contemporary societies. Throughout the history of humanity, this type of behavior was frequent if we take into account that each individual seeks survival at the expense of the violation of pre-established norms. One of those mechanisms tending to eradicate the phenomena of criminality is rigor and hardening of penalties, which is part of a sector within Criminal Law called criminal policies.

In our country this phenomenon has been given as a mechanism to reduce crime but is distinguished by not having the desired effect. Therefore, this research work is intended to perform an analysis of the increase in penalties, for example, if it has functioned as a crime reduction mechanism, or on the other hand, only, it obeys, positions and conjunctures, policies, without a previous technical study the, and, pose, a viable alternative solution to the reduction of crime.

Social control is the set of means through which a society guarantees that the behavior of each of its members is congruent with the parameters of conduct previously established by them; It also refers to the society response capacity in case of non-compliance of those parameters.

The criminal law is the group of criminal norms established by the State for preventive and repressive purposes, which include punishable acts and the respective sanctions against those who commit them.

Criminal policy, as the group of objectives, strategies, plans and actions aimed at preventing and reducing crime.

Criminology is interested in the study of criminal behavior, the victim and social control, and also it looks for the factors that lead to the crime, consequently knowing the causes that originate the crime.

## **INTRODUCCIÓN**

Actualmente el Perú vive un periodo de intensas transformaciones en cada uno de los sectores que conforman la sociedad. Estos sectores abarcan: el económico, social, político, cultural, etc. La seguridad pública no es la excepción a la regla, ya que continuamente se pone en duda la capacidad del Estado para mantenerla. De tal forma ante la creciente ola de violencia e ineficacia de las autoridades encargadas de velar por la seguridad pública, la solución al fenómeno criminal se ha convertido en la principal y más sentida demanda de la sociedad.

La inseguridad pública representa la baja calidad de vida de una sociedad, ya que es el efecto secundario de inadecuada política social, toda vez que la delincuencia no se reduce a un problema exclusivo de la policía, sino de todos los sectores sociales por su naturaleza multifactorial.

Sin embargo, la reacción de la autoridad para combatir la delincuencia ha sido a través de métodos tradicionales de reacción o punición, es decir, mediante el endurecimiento del Sistema Penal, en particular del Derecho Penal. Así, el aumento de penas y/o la creación de nuevos tipos penales y de leyes al vapor, es la solución más recurrida para combatir la delincuencia, provocando inflación legislativa que lejos de solucionar el problema lo agrava.

Las políticas de Seguridad Pública implementadas hasta hora, se caracterizan por su carácter sectorial y por las acciones dirigidas únicamente a los efectos y no a las causas del delito, dejando de lado programas y alternativas de prevención menos dañinas y costosas para la sociedad que pudieran resultar más eficaces.

La combinación del sentimiento de inseguridad y de la poca credibilidad en la autoridad provoca reacciones graves por parte de la sociedad, hasta la justicia de propia mano que refleja, por un lado una sociedad desesperada en busca justicia mediante la violencia y por otro lado una autoridad rebasada no sólo por la delincuencia sino por su misma población.

La policía carece de elementos preparados, que permitan verificar una verdadera prevención del delito al no existir una correcta prevención; de igual forma, en el sistema penitenciario la readaptación no es más que un anhelo utópico, pues las condiciones que prevalecen al interior de las cárceles, se caracterizan como degradantes para la dignidad de cualquier ser humano.

Ante las ineficaces medidas de prevención y represión, y los diferentes factores que contribuyen a gravar el problema del delito de robo agravado en el Perú, han surgido nuevos enfoques, para la prevención del delito, donde la participación ciudadana resulta ser el eje central de éstas; así como identificar las causas que originan la delincuencia.

La presente investigación tienen como propósito analizar los nuevos enfoques de prevención del delito, en los que prevalece la participación de la sociedad, a través de los cuales existe una mayor probabilidad de éxito y a través de una Política Criminológica en determinar los orígenes y causas del delito y de esta forma disminuir los índices de Robo agravado, todo esto como parte de una Política Criminal integral. La presente investigación se divide para su estudio en siete capítulos a través de una investigación bibliográfica y documental.

El primer capítulo denominado “Marco Metodológico” determina el planteamiento y justificación del tema, así como los objetivos el cual se pretende alcanzar, lo que permite verificar el alcance e importancia del tema de la presente investigación.

En el capítulo segundo llamado “Consideraciones Sobre Política Criminal” se establece el marco teórico- conceptual, en el que se definen conceptos, tales como: Política criminal y Control Social, Política criminal y criminología, y la relación de la Política Criminal con el Derecho Penal, definiciones necesarias para situar el tema de participación ciudadana en la disciplina del Derecho Penal.

El capítulo tercero “Las teorías de la pena y los fines de la pena en el Código Penal”. En el capítulo cuarto designado “La Criminalidad Patrimonial en el Perú”. Se desarrolla las estadísticas realizadas por el INEI el cual muestra la

realidad del delito de robo agravado en cifras a nivel nacional, en el cual se realiza un diagnóstico cualitativo de la delincuencia patrimonial en el Perú.

El capítulo cinco está dedicado a identificar y caracterizar la tendencia político-criminal prevalente en el Estado peruano para hacer frente al delito de robo agravado en la última década. El Capítulo Seis analizaremos la “participación ciudadana” como una alternativa viable a disminuir los índices de delincuencia en nuestro país el papel que juega ésta en la prevención del delito, así como los programas y estrategias de prevención aplicados a nivel internacional dentro de ellos el enfoque situacional, social y de prevención comunitaria a fin de determinar los alcances de la participación ciudadana en la prevención del delito y el factor criminológico.

Finalmente en el capítulo Siete denominado “Evaluación metodológica de la Tesis” realizaremos la contrastación de nuestra hipótesis y el análisis de las variables e indicadores utilizados en la investigación.

## **CAPITULO I: MARCO METODOLÓGICO**

### **1. FORMULACIÓN DEL CONTEXTO DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN**

La presente investigación desarrolla una tesis que analiza el contexto de los problemas sociales criminológicos que suceden en la sociedad peruana, y por ello hace referencia a la criminología como ciencia, dado que sobre dicha especialidad se determinará la necesidad de construir una mejor política criminal a ser aplicable a los delincuentes.

Hay un endurecimiento generalizado de las penas para frenar delitos en especial en el delito de Robo Agravado y esto se incorpora dentro de lo que en la teoría de la pena se conoce como “prevención general negativa”. Ese fin o propósito es revertir el incremento de la criminalidad. Es decir el Estado peruano ha respondido al problema de la criminalidad aplicando una política criminal represiva y punitiva, caracterizada por la selectividad y estigmatización hacia el delincuente, el etiquetamiento a personas vulnerables y preeminencia de los grupos de poder.

La sensación de inseguridad que experimentamos por el aumento del crimen y la incidencia del delito de Robo Agravado y las dificultades de las autoridades para prevenir y reprimir el delito, amenazan la calidad de nuestra vida personal y familiar, así como a nuestras democracias. La población se siente insegura no solo cuando sale a la calle, sino cuando está en sus viviendas. Hemos sido testigo y a la vez víctimas de actos delictivos, en nuestro Distrito, donde podemos observar el nivel de inseguridad en las calles es cada vez más constantes.

Las ciudades enfrentan altas tasas de incidencia delictiva por el delito de Robo Agravado que amenazan los sentimientos de seguridad de la población. Vernos libres de la delincuencia por el delito de Robo Agravado, gozar de un ambiente de tranquilidad, estar protegido contra la violencia en el hogar y en la calle, lograr que las ciudades sean más seguras son ingredientes

indispensables para un desarrollo sostenido. Las ciudades siempre han sufrido en mayor o menor dimensión los avatares de la violencia, pero hoy en día, por la incidencia de muchos factores estructurales como la desocupación, falta de empleo, las migraciones, la pérdida de valores, etcétera, han elevado sus índices tornándose más agresivas y temerarias.

Entre los problemas que más afectan a los vecinos están el robo agravado, nos referimos a los atracos en las calles, centros comerciales, paraderos, etc. También están el robo domiciliario, el pandillerismo, con la consecuencia de la drogadicción y el alcoholismo que fomentan conductas violentas en la calle y en el hogar. La violencia o la amenaza de su ocurrencia, afectan los derechos a la vida, la integridad y la libertad de las personas, así como al libre tránsito o circulación y, a la propiedad, entre otros. Nadie puede sentirse libre frente a los actos delincuenciales de Robo Agravado, ni siquiera los bancos, que manejan un conjunto de medidas de seguridad coordinadas con la Policía Nacional para eliminar los riesgos de sus clientes, patrimonio e instalaciones contra la seguridad de sus clientes. Estos también son víctimas de bandas criminales organizadas, al igual que restaurantes, casinos, hoteles, centros comerciales, etc. La delincuencia existe en todo el país. Algunas bandas delictivas usan granadas de guerra, explosivos, fusiles de asalto y armas automáticas que no están autorizadas para el uso de civiles, ni mucho menos Para comercializarse. Los mercados que favorecen la perpetración de determinados ilícitos como la receptación, el robo de auto partes, en donde la población genera un incentivo al adquirir objetos de dudosa procedencia aunado a la falta de acción por las autoridades para erradicar tales prácticas de comercialización ilegal.

Se ha dejado de lado el fortalecimiento de la institución de control del delito, como es el caso de la Policía Nacional para prevenir y combatir el crimen en todas sus manifestaciones. La crisis económica que afecta a la mayor parte de los países que se traduce en la desocupación de los jóvenes, la falta de trabajo e ingresos en las familias. La crisis de valores que ha

generado pobreza, marginalidad, desempleo, drogadicción, alcoholismo, corrupción, pérdida de identidad, pérdida de confianza en sí mismo y en los demás, así como la ausencia de lazos de solidaridad entre vecinos. La criminalidad y violencia en nuestro país constituyen en la actualidad un problema político social de primer orden, que exige la necesidad de implementar medidas Concretas para disminuir la violencia urbana en las principales ciudades del país, en particular contra la incidencia delictiva del delito de Robo Agravado en nuestro país, cuyos efectos los padece transversalmente toda la población. Asimismo la falta de organización y coordinación para la seguridad que existe entre la comunidad y los distintos organismos que dirigen, Juntas vecinales, Municipios, Policía Nacional, etc. Vivimos atemorizados entre muros, rejas y alarmas. Regresar sano y salvo a casa es una aventura cotidiana. Hoy en día la convivencia pacífica en nuestra sociedad se encuentra amenazada por la existencia de tensiones y conflictos que generan conductas violentas y que han surgido por diferentes causas.

Al adoptarse la política criminal de incrementar penas o restringir beneficios penitenciarios, el impacto de dicha normatividad ha determinado que las penas resultan ser instrumentos inefectivos que no coadyuvan a la resocialización de la persona; sino todo lo contrario, incrementar los índices de hacinamiento, lo cual ha conllevado a la imposibilidad de cumplir los fines de la pena o internamiento: la resocialización del interno, generándose violencia interna (motines), así como de una reincidencia constante de aquellos que logran egresar de prisión; Se está prescindiendo de algo tan relevante e importante como es la orientación reinsertadora de las penas privativas de libertad.

La falta de idoneidad de una Política Criminal sobre los índices de criminalidad, basada en un “populismo penal” sin base empírica que la sustente, puede verse en los últimos 6 años, en la que lejos de disminuir dicha incidencia ha ido en aumento. Es de destacar que a pesar de este considerable aumento del rigorismo en las sanciones, la realidad muestra

altas tasas de reincidencia, esta inflación del derecho penal no viene acompañada de una disminución efectiva de la criminalidad, ni de un sentimiento de mayor seguridad subjetiva por parte del ciudadano; uno de los fines de la prisión es el de resocializar a la persona a través de programas y de un correcto seguimiento por parte de quienes están facultados para vigilar y desarrollar los programas respectivos, pero es conocido que desde hace algún tiempo esto no se cumple de manera plena por el hacinamiento que existe en nuestras cárceles peruanas.

## **2. FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA PROBLEMATIZADORA**

¿Es posible establecer Políticas Criminales distintas al endurecimiento de las penas en el Sistema Penal para que el Estado haga frente al Delito de Robo Agravado?

## **3. OBJETIVOS DE ESTUDIO EN LA INVESTIGACIÓN**

### **Objetivo General.**

Demostrar que la Participación Ciudadana es una Política Criminal que ayudaría a disminuir los índices de incidencia delictiva del delito de Robo Agravado en el Distrito de Chiclayo.

### **Objetivos Específicos.**

Para alcanzar el objetivo general mencionado se deberán lograr los siguientes objetivos específicos:

- Estudiar las Consideraciones Generales de la Política Criminal.
- Analizar las Teorías de la Pena y su aplicación en el Código Penal peruano.
- Conocer la Criminalidad Patrimonial en especial el delito de robo agravado en el Perú.



- Analizar la Política Criminal peruana frente al delito de Robo Agravado en el Código Penal peruano concepto, descripción típica y sus distintas modificaciones.
- Demostrar que la participación ciudadana constituye una Política Criminal en Nuestro país.
- Determinar la contrastación de nuestra hipótesis y Evaluación metodológica de la presente investigación.

#### **4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO**

Conforme a lo descrito en los puntos precedentes, consideramos que sobre nuestra iniciativa se conjugan los siguientes elementos que nos permiten justificar y resaltar la importancia de nuestra investigación sobre endurecimiento generalizado de las penas para frenar el delito de robo agravado en nuestro país:

a) En el ámbito penal, no existe una solución teórica ni procesal frente al incremento del delito de Robo Agravado en la provincia de Chiclayo, la cual resulta un tema referencial porque solo pocos autores nacionales hacen investigaciones puntuales y a su vez estos estudios tampoco proponen una reforma institucional sobre el particular.

Este punto nos permitirá sustentar la idea de tener una Política Criminal coherente con las obligaciones internacionales del Estado peruano, la promoción de la niñez y un mayor control del delito de Robo Agravado a efectos de atender un problema social criminológico.

La propuesta al final de nuestra investigación en este contexto, permite aportar un elemento tanto sustantivo como procesal que mejore el Sistema Penal de nuestro país.

b) En el ámbito interdisciplinario, las investigaciones sobre la incidencia delictiva en el delito de Robo Agravado nos permitirá analizar aspectos vinculados al ámbito Civil, Familiar y Constitucional, los cuales en forma preliminar señalamos que son muy limitadas y hacen referencia a elementos

teóricos procedimentales ajenos al verdadero análisis de nuestro tema de investigación que se centra en el diseño de una verdadera Política Criminal para disminuir la incidencia delictiva en el delito de robo agravado en la provincia de Chiclayo.

Como elemento paralelo pero importante, es necesario señalar que los Estudios Sociológicos para analizar este problema social son también insuficientes porque en estas investigaciones no se analiza el factor legal que rodea al delito de Robo Agravado.

c) En el ámbito institucional, tampoco hemos observado una mayor acción de parte del Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Justicia, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio del Interior y Ministerio de Economía (respecto al presupuesto) frente a este problema y ello nos permite plantear un mecanismo de solución.

La novedad de la presente investigación estará en referencia a la construcción de una política del Estado frente a un problema social y lo inédito estará vinculado al planteamiento de un marco teórico que sustente un mecanismo institucional de represión efectiva al delito de Robo Agravado que en la actualidad se está incrementando en forma desproporcional.

De lo expuesto es también necesario señalar que nuestra intención no es criminalizar las conductas antisociales de los delincuentes que cometen delito de robo agravado, por cuanto se encuentra regulada en nuestro Código Penal; explicación que parte del hecho de que nuestra intención es afrontar institucionalmente un problema mayor, con lo cual podríamos plantear mecanismos eficientes de control de:

a) La delincuencia desarrollada en el delito de Robo Agravado; principalmente por su mayor impacto social en la actualidad en nuestro país y específicamente en la provincia de Chiclayo.

b) El desarrollo de activos vinculados al pandillaje para la ejecución de robo agravado en forma violenta o con arma de fuego, que en general está vinculado directamente al delito contra el patrimonio de terceras personas.

Esta investigación se realiza en razón a que en nuestro país hay un endurecimiento generalizado de las penas para frenar el delito de robo agravado y esto se incorpora dentro de lo que en la teoría de la pena se conoce como “prevención general negativa”.

## **5. TIPO DE INVESTIGACIÓN**

La presente investigación de tesis, tiene las siguientes características, en función a sus alcances y objetivos:

### **Será descriptiva:**

Debido a que se procurará hacer una descripción de la realidad socio criminológica que existe en nuestro país, con lo cual validaremos nuestras variables, con los cual se inicia nuestra investigación, toda vez que es un problema de carácter nacional que se ha venido incrementando en los últimos años.

Por otro lado describiremos algunos conceptos y teorías aplicables a nuestra investigación, en particular para luego poder ejecutar una evaluación de las mismas en un contexto más amplio y especializado.

### **Será analítica:**

Debido a que nuestra investigación procura evaluar los conceptos, principios y teorías que existen en el ámbito interdisciplinario entre lo Penal, procesal, para así poder plantear una posición uniforme que guarde coherencia con las demás disciplinas.

### **Será básica:**

Sobre la base de que nuestra investigación está orientada al análisis de doctrina especializada en los temas de derecho penal, procesal penal y sociología jurídica para así poder analizar el verdadero impacto de la Política Criminal.

En este punto, consideramos que el análisis de la Política Criminal del Endurecimiento Punitivo para enfrentar la incidencia delictiva en el delito de robo agravado, se centra sobre todo en un análisis teórico y normativo por ello nuestra línea de trabajo será básica.

### **Será aplicada:**

Ante la importancia de un tema de mucha importancia social y sobre todo la base de su proyección, consideramos que nuestra propuesta de tesis será aplicada porque planteamos proponer dichos alcances al actual proceso de reforma normativa de la Legislación Penal. De este modo, podemos complementar las acciones del Estado en la lucha contra la incidencia delictiva del delito de Robo Agravado.

### **Será documental:**

En este punto, incluiremos documentos del manejo de carácter oficial de parte de las principales instituciones vinculadas al ámbito del manejo de la problemática de la incidencia delictiva del delito de Robo Agravado: Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio del Interior, Instituto Nacional Penitenciario.

Dicha información nos permitirá manejar un esquema de trabajo en el cual observaremos el desarrollo progresivo de los datos estadísticos y limitación orgánica del Estado para afrontar dichos problemas sociales, con lo cual también validamos nuestra investigación de tesis porque presentamos un

trabajo vinculado a la necesidad de resguardar las condiciones de seguridad en nuestra comunidad Tanto a nivel regional como nacional.

**Será cualitativa:**

Si bien utilizaremos datos estadísticos en nuestra investigación, aportaremos elementos materiales que nos permitirán manejar mecanismos de interpretación de las mismas que se complementarán al uso de información dogmática, con lo cual la línea general de nuestra propuesta será cualitativa.

**Será exploratoria:**

Siendo el tema del delito de Robo Agravado un tema absolutamente complejo y además que involucra varias aristas, consideramos que nuestra limitación se centra sobre todo en el análisis de un punto particular: la generación de una Política Criminal para afrontar el problema de la incidencia delictiva del delito de Robo Agravado, con lo cual nuestra línea central de trabajo será exploratoria.

## **6. HIPÓTESIS Y VARIABLES:**

### **Hipótesis**

Establecer la participación ciudadana como una Política Criminal en nuestro Sistema Penal Disminuiría el problema de la incidencia delictiva del delito de Robo Agravado en la Provincia de Chiclayo de una manera más eficaz.

**Variable Independiente:** Establecer la participación ciudadana como una Política Criminal en nuestro Sistema Penal

**Variable Dependiente:** Disminuiría el problema de la incidencia delictiva del delito de Robo Agravado en la Provincia de Chiclayo de una manera más eficaz.

## **Indicadores**

### **Independientes**

- + Doctrina internacional sobre la Política Criminal
- + La víctima y sus derechos regulados en la Constitución Política del Perú.
- + Código Penal parte general y especial (delito de robo agravado), Código Procesal Penal y Código de Ejecución Penal.
- + Fuerzas policiales (FF.PP.), Ministerio Público, Poder Judicial, Establecimientos Penitenciarios.
- + Consejo Nacional de Política Criminal.
- + Casos de delito de robo agravado en la Provincia de Chiclayo.

### **Dependientes:**

- + La relación entre la víctima y los delincuentes.
- + La sobrepoblación carcelaria en los Establecimientos Penitenciarios.
- + Vulneración de los derechos fundamentales del ciudadano.
- + Deficiencias de los organismos del Estado encargados de controlar el delito de Robo Agravado.
- + Protección del ciudadano.
- + Proporcionalidad en la aplicación de la pena del delito de Robo Agravado.

## **CAPITULO II: CONSIDERACIONES SOBRE POLÍTICA CRIMINAL**

El sistema penal es el “conjunto de agencias y sus actividades (internas y externas) que intervienen en la creación (criminalización primaria) y aplicación (criminalización secundaria) de las normas penales” para garantizar el respeto de los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. Este sistema se encuentra integrado por aquellas disciplinas que participan del proceso de criminalización. Esto es, en el acto político de calificar a una conducta como delito y como lesiva para aquellos intereses indispensables para la vida en una sociedad históricamente determinada.

Una de estas disciplinas es la Política Criminal, la cual está encargada de la valoración de los hechos criminales y su regulación en normas penales orientadas a la aplicación de una sanción por el daño o riesgos que producen a un bien jurídico. Ella también tiene injerencia en la promoción de reformas en la legislación penal cuando se evidencia un desfase fáctico entre la realidad y utilidad de la norma penal.

Por tanto, la política criminal cumple un rol fundamental en el proceso de criminalización. Especialmente, en el diseño y formulación de las leyes penales que tienen como objeto la prevención y el control de la criminalidad. Cabe mencionar, que ella desarrolla sus funciones en el marco de un Estado Constitucional de Derecho y que, por lo tanto, debe acatar límites y respetar criterios de racionalidad y legitimidad que garanticen su validez y trascendencia sobre la realidad que pretende legislar. Al respecto, el Tribunal Constitucional destaca que “en el Estado Constitucional de Derecho, el Legislador no tiene una “discrecionalidad absoluta” para establecer las conductas que pueden resultar punibles, o los límites máximos o mínimos de la pena, pues debe respetar las garantías materiales y procesales ya mencionadas (establecidas en la Constitución), dentro de la que destaca, por ejemplo, el principio de proporcionalidad, entre otros bienes constitucionales,

los mismos que se constituyen en el fundamento y límite del poder punitivo del Estado”. (VILLAVICENCIO TERREROS, 2013, pág. 10)

En coherencia con todo ello, este capítulo tiene como objetivo, en primer lugar, precisar el concepto, objeto y evolución de la política criminal.

## **1. Concepto de Política Criminal**

Desde una perspectiva jurídico penal el autor **Heinz Zipf** define la Política Criminal como aquella “obtención y realización de criterios directivos en el ámbito de la justicia criminal” asimismo éste autor citando a Feurbach quien define la política criminal como “sabiduría legislativa del Estado” (ZIPF, 1979, pág. 4)

Por su parte, **Von Liszt Franz**, asocia la política criminal con la “investigación científica de las causas del delito y los efectos de la pena, según la cual el Estado ha de llevar a cabo la lucha contra el delito”. (VON LISZT, 1914, pág. 11). Otra definición importante es la que destaca Hans-Heinrich Jescheck, quien afirma que la Política Criminal es la forma de “dirigir al Derecho Penal para poder cumplir de la mejor forma posible su misión de proteger a la sociedad” (JESCHECK, "Tratado de Derecho Penal Parte General", 2014, pág. 33) Esta definición resalta la relación que tiene el diseño y la formulación de la política criminal con la sociedad en la que se va a aplicar.

En el mismo sentido, es importante la definición jurídica que brinda el penalista alemán **Claus Roxín**, quien afirma que la política criminal es: La totalidad de los aspectos valorativos, según nuestra Constitución y legislación penal, que sean determinantes en la fijación y configuración tanto de los presupuestos de la punibilidad como también de las sanciones. Luego, también los elementos limitadores de la pena de nuestro ordenamiento penal, como el principio de legalidad o el de culpabilidad, son, para mí, componentes de la política criminal de un Estado de Derecho (ROXIN, Claus, 1972, pág. 43).

**Juan Bustos Ramírez** define a la Política Criminal como “el poder de definir los procesos criminales dentro de la sociedad, y por tanto de dirigir y



organizar el sistema social en relación a la cuestión criminal”, (BUSTOS RAMÍREZ, 1986, pág. 7) En cuanto a esta definición retoma el uso exclusivo del derecho penal, como la única vía para el control de la delincuencia, incluyendo el consenso de la sociedad para el control de los hechos criminales.

Para **Luis Jiménez de Asúa** es “el conjunto de principios fundados en la investigación científica del delito y de la eficacia de la pena, por medio de las cuales se lucha contra el crimen, valiéndose tanto de las penas, como medidas de carácter asegurativa (medidas de seguridad)” (JIMÉNEZ DE ASÚA, 1964, pág. 56). Esta definición, aunque parte del estudio científico del delito, en su lucha contra el crimen, deja de lado otros mecanismos no penales de combate contra la criminalidad, además se puede señalar como un logro en esta definición la inclusión de las medidas de seguridad, dentro de la Política Criminal. Ambas definiciones plantean el uso del derecho penal como primera ratio.

A nivel nacional, José Hurtado Pozo define a la política criminal como “la actividad del Estado dirigida a enfrentar las acciones delictuosas (lato sensus) que amenazan la cohesión y el desenvolvimiento armónico de la comunidad” (HURTADO POZO & PRADO SALDARRIAGA, 2011, pág. 51).

Por su parte, Felipe Villavicencio Terreros considera que la política criminal es el “estudio crítico y prospectivo de las normas penales y de las normas institucionales que se encargan de la oportuna y eficaz aplicación preventiva y represiva” (VILLAVICENCIO TERREROS, 2013, pág. 55).

## **2. Objeto y Área de Investigación de la Política Criminal**

Según Binder “el objeto de la Política Criminal, se encuentra orientado a determinados conflictos, los cuales son aquellos que por una decisión de poder que también forma parte de la Política Criminal, han sido catalogados como delictivos y sujetos a penalidad por medio de la ley, en ese sentido la Política Criminal se encuentra autolimitada por una definición previa de los

conflictos, en consecuencia abarca tanto aspectos normativos como institucionales”. (AMAYA COBAR, 2003, pág. 23).

Es decir, el objeto al que se enfoca la política Criminal, son los conflictos determinados criminales, consistentes en las conductas clasificadas como delictivas por una decisión de poder, y con el fin de contrarrestarlas se constituyen los planes gubernamentales para el control de la delincuencia, dicha intervención estatal no debe ser exclusivamente punitiva, sino que primordialmente debe reunir aspectos de prevención, contención, resolución, tratamiento, de fenómeno delictivo, que en un Estado de Derecho deben corresponder con los principios Constitucionales como: la legalidad, igualdad y respeto de la dignidad humana de las personas, así como el respeto de los derechos fundamentales y las normas internacionales; por otra parte al igual que las conductas delictivas, las penas deben estar previamente fundamentadas en la Constitución, leyes secundarias y sujetas a los principios antes mencionados, en ese sentido expresa Binder que “la Política Criminal se encuentra autolimitada por una definición previa de los conflictos”, (AMAYA COBAR, 2003, pág. 24) no debe ser esta improvisada o antojadiza, determinada únicamente por motivos políticos y profundos conflictos sociales, como el caso de nuestro país, que en los últimos años se ha visto azotado por la creciente ola de delitos en su mayoría atribuidos a los miembros de maras o pandillas, que si bien es cierto, se necesita una inmediata solución ante dicha problemática, no pueden vulnerarse los derechos de las personas, ni las garantías procesales establecidas y menos aún ignorarse los principios constitucionales, sino más bien debe crearse un plan integral para el control de la criminalidad que ataque la base del problema, con énfasis en la prevención, como por ejemplo mejorar el sistema educativo, generar empleos, espacios deportivos para la juventud, entre otros. En concreto la Política Criminal moderna, debe esforzarse en conseguir mayor libertad, justicia e igualdad como proclaman las normas Internacionales y nacionales.

Las tendencias modernas de Política Criminal, tienen el tradicional objeto de conseguir la disminución de la criminalidad y la violencia, añadiendo como elementos importantes combatir la creciente desigualdad económica, social y cultural que son factores determinantes de la criminalidad.

Con respecto al área de investigación de la Política Criminal, “en un principio se consideraba que su finalidad era únicamente controlar la criminalidad, a partir de estudios victimológicos y en particular por la preocupación acerca de las necesidades de la víctima, de su ambiente social y el campo de aplicación de la Política Criminal, se extiende también al control de las consecuencias del crimen y por otra parte la prevención del delito”. (AMAYA COBAR, 2003, pág. 25) La finalidad de la Política Criminal como las demás áreas de esta, ha tenido una evolución que responde a las necesidades contemporáneas de la sociedad, y a las nuevas tendencias siendo el caso que inicialmente, el único fin de la Política Criminal era combatir el crimen, mientras que hoy en día regula además aspectos de prevención y el tratamiento de las consecuencias del delito.

### **3. Evolución histórica de la Política Criminal**

Para estudiar la evolución que ha tenido la Política Criminal durante la historia, se estudiará las escuelas penales, las cuales corresponden a distintas etapas del pensamiento penal orientadas a sistematizar el estudio del delito, el delincuente y la pena. Se hará un breve estudio de las escuelas cuyo aporte es importante al derecho penal y a la criminología.

Para iniciar se definirá lo que se va a entender por escuela, de la siguiente manera: para Luis Giménez de Asúa, es “El cuerpo orgánico de concepciones contrapuestas sobre la legitimidad del derecho penal, sobre la naturaleza del delincuente y sobre el fin de las sanciones.” Sin embargo a nuestro criterio una definición más conveniente, por ser general y abarcar más conceptos y por ser más fácil de comprender es la siguiente: “la dirección de pensamiento con una determinada orientación, que responde a presupuestos

filosóficos penales determinados”. Una escuela se diferencia de otras por la orientación de ideas respecto a la pena, al delincuente, a la naturaleza del delito, al método de trabajo, entre otros aspectos. (AMAYA COBAR, 2003, pág. 25)

### **3.1. Escuela Clásica**

Este nombre era tomado por E. Ferri en sentido despectivo para englobar el pensamiento, que con anterioridad a la escuela positiva se había ocupado de los problemas jurídico penales. En algunos casos las ideas sobre determinados puntos eran opuestas.

Su nacimiento se da a principios del siglo XIX a raíz del desarrollo del pensamiento liberal relacionadas al delito y la pena. “Está constituida por un conjunto de doctrinas filosóficas caracterizadas por sus principios liberales humanitarios. Se le considera un movimiento contra la barbarie del derecho penal en el periodo de la venganza pública, lo cual era sinónimo de arbitrariedad y poder”. (TREJO ESCOBAR , 1992, pág. 20) Es decir que este momento de la venganza pública los condenados por delitos de esa época eran castigados en lugares públicos a la vista de toda la gente, por otro lado las penas impuestas eran arbitrarias por la misma característica de secreto que tenía el Derecho Penal.

Se tiene como principales representantes de esta corriente de pensamiento a César Beccaria, con su obra “De los Delitos y de las Penas”; Gaetano Filangieri, Giandomenico Rogmanosi, autor de la “Génesis del Derecho Penal”, Giovanni Carmignani, Rossi y Francisco Carrara, siendo “Programma” de este último, la obra cumbre de esta escuela. Fuera de Italia están Feuerbach, autor del código Bárbaro de 1813, realiza aportaciones al principio de Legalidad y prevención general y por último Bentham, realizando aportaciones a la concepción utilitaria de la pena.

Lo significativo de esta escuela, es su defensa por los derechos fundamentales, su reacción contra la arbitrariedad y el abuso de poder, se han

anotado en algunos documentos que logró abolir las penas infamantes y humanizar el sistema penal, por medio de la implementación de los principios de Legalidad e igualdad, no obstante también tuvo algunos puntos débiles que no fueron abordados y que son precisamente los que atacó la escuela positiva y dio en su estudio mayor énfasis. El punto más importante que fue olvidado por esta corriente de pensamiento es lo referente al delincuente, lo que provoca la falta de soluciones a puntos como la reincidencia, el tratamiento penitenciario, la situación de los menores, entre otros.

### **3.2. Escuela Positivista**

Esta es una corriente de pensamiento antropológica, nace en 1876 en Italia, a partir de la publicación de la obra de César Lombroso denominada: El Hombre Delincuente, donde se “evidencia una explicación causal del delito, a partir de la inexistencia del libre albedrío” (TREJO ESCOBAR , 1992, pág. 23) o sea que a partir de la publicación de dicha obra, se inicia una nueva orientación del derecho penal donde a través de estudios antropológicos del ser humano se pretende dar una explicación del por qué el ser humano delinque, llegando a la conclusión que el sujeto que delinque es alguien determinado al crimen, por factores internos y externos que lo impulsan a delinquir, entonces todo delincuente es un anormal, diferente que no se comporta como los demás seres normales.

Se mencionan como principales pensadores de esta corriente a César Lombroso, antropólogo, quien a través de sus estudios determinó que el delincuente es un ser con características diferentes a una persona normal, determinado biológicamente. Este autor da la orientación antropológica a esta escuela.

Rafael Garófalo, autor que imprime la orientación jurídica y crea la teoría sociológica del delito natural, en su obra “Criterios de Punibilidad” (TREJO ESCOBAR , 1992, pág. 23)

Enrico Ferri, modifica la teoría de Lombroso (según la cual, la conducta del delincuente se encuentra determinada por factores biológicos), en el sentido de afirmar que el delincuente posee instintos heredados, pero que sus usos se encuentran determinados por factores ambientales. Este pensador da la orientación sociológica de la escuela. Autor de las obras de “La Negación del Libre Albedrío”, “La Teoría de la Imputabilidad”, “Sociología Criminal” entre otras.

Algunos de los aspectos que vale la pena subrayar y que en la actualidad se mantienen, aunque discursivamente es, que a partir de esta escuela se habla de medidas de seguridad, las que actualmente subsisten en nuestro Derecho Penal. De ahí que su análisis sobre el delincuente parece ser a lo que se da mayor énfasis en esta escuela, lo cual es también erróneo, por ser una posición extremista como la de su antecesora, la que no le dio casi importancia.

### **3.3. Tercera Escuela Italiana (Terza Scuola)**

Esta es una de las corrientes de pensamiento intermedia o ecléctica, que surge a raíz de las posiciones evidentemente extremas de las dos anteriores y trata de conciliar algunos aspectos. Tiene como principales representantes a Manuel Carnavale con su obra Una tercera Escuela de Derecho Penal y Bernardino Alimena, autor de la obra Escuela Crítica del Derecho Penal, ambas obra de 1891. (TREJO ESCOBAR , 1992, págs. 26-27)

Las escuelas eclécticas o corrientes intermedias constituyen una nueva formulación de los planteamientos de las escuelas anteriores, en puntos fundamentales como, el delincuente, el delito, la pena, la responsabilidad penal, etc. Se tiene como principales postulados, los siguientes:

Con respecto al delito, se tiene como un hecho complejo: porque a la vez de ser un hecho social, es también un hecho producto de factores internos

y externos. O sea que retoma el planteamiento de las dos corrientes anteriores, teniendo que el delito es un hecho social e individual.

En lo relativo a la responsabilidad penal se rechaza la postura del libre albedrío (de la Escuela Clásica) y la de los factores propios del individuo: anormal o la de los estímulos de su contexto (postura de la Escuela Positivista). Esta corriente afirma que la responsabilidad debe basarse en la capacidad individual que tiene cada sujeto de dirigir, su voluntad para cometer delitos; siendo este un gran aporte para las ciencias del derecho penal, porque este pensamiento da pie para hablar de sujetos imputables e inimputables; siendo los primeros quienes responden penalmente, por tener la capacidad de dirigir sus actos. De ahí que se habla en nuestro Código Penal de penas y de medidas de seguridad, para quienes no tienen la capacidad de tal dirección: los inimputables. Esta consideración puede decirse que es de más aplicación para la actualidad y uno de los aportes más fundamentales de esta escuela.

Por último concibe la pena en dos funciones, las cuales son prevención y readaptación del delincuente, concepción que se mantiene también hasta nuestros días.

#### **4. Escuelas Modernas**

Como escuelas modernas podemos mencionar las siguientes:

##### **4.1. Escuela Político Criminal**

Su principal representante es Franz von Liszt con su obra Tratado de Derecho Penal. (TREJO ESCOBAR , 1992, pág. 27) Esta escuela distingue tres momentos: el momento normativo, constituido por el derecho penal; el momento fáctico, que es el hecho delictuoso y por último, el momento valorativo, axiológico constituido por la política criminal. Esta distinción sirve, según esta escuela para poder comprender la función de la política criminal,

la cual es de análisis crítico, para entender por qué se criminalizan algunas conductas o se agravan algunos delitos. Las consideraciones acerca del delito, el delincuente y la pena son las siguientes:

El delito está impulsado por factores internos y externos de la realidad social, siendo entonces un fenómeno social. Pero también es importante poner en evidencia que es también un concepto jurídico porque está contemplado y previsto por las normas jurídicas. En lo que respecta al delincuente, considera que solo está sujeto a responsabilidad penal los normales, a quien se debe aplicar una pena, no así a los anormales, quienes por razones de seguridad del bien social debe aplicarse una medida de seguridad. Esto como puede verse es un gran avance, en materia de derecho penal, ya que esta postura hoy en día sigue siendo vigente en nuestro derecho penal.

#### **4.2. Escuela de la Nueva Defensa Social**

Constituye un pensamiento político criminal francés, que tiene como representantes a Felipe, Jacqués Beonard y Marc Ancel (BUSTOS RAMÍREZ J. , "Derecho Penal Parte General", 1989, pág. 118).

Este pensamiento tiene sus orígenes en 1954, el cual pretendía una transformación del derecho penal, por considerarlo de carácter metafísico. Con esta escuela se pretende un pensamiento más humanista. Está fundado en el pensamiento positivista criminalista de E. Ferri.

La concepción de esta escuela se puede resumir de la siguiente manera: el delito es una personalidad del autor y no un ente jurídico; por una parte rechaza el libre albedrío pero tampoco acepta el determinismo biológico del pensamiento positivista que había creado la tipología a priori de la personalidad del delincuente, es decir que ya se tenían establecidas las características físicas del delincuente. Pero a diferencia en este pensamiento se buscan las razones individuales que llevan a delinquir a las personas. La



política criminal trata de basarse en estudios criminológicos para ser aplicada al derecho penal.

Sin embargo a pesar de los esfuerzos que se hace para humanizar este pensamiento, siempre queda sujeto a los principios positivistas desarrollados por E. Ferri, los que dieron lugar a la creación de las medidas de seguridad predelictuales, es decir aquellas que se basan únicamente en la peligrosidad social del sujeto. Osea que estas medidas se imponen a una persona no por el hecho de haber cometido un delito, sino por su predisposición a cometerlos.

Además al poner como eje la defensa social, la sociedad se convierte en un ente abstracto y absoluto por encima de los individuos que la componen y de los derechos consagrados para los mismos, lo cual da lugar a que la persona como tal no se tome en cuenta y se violenten sus derechos y garantías con la excusa de defender la sociedad, tal pensamiento se identifica mucho con la Ley Antimaras, la cual tenía como fundamento la defensa de la seguridad ciudadana, exponiendo soluciones de derecho penal de autor, haciendo una tipología a priori de la personalidad de los delincuentes, por ejemplo, que posean tatuajes o cicatrices, etc.

#### **4.3. Escuela Técnico Jurídica**

Esta escuela es llamada también neoclásica o dogmática, tiene como fundador a Vicente Manzini y como seguidores a Massari, Carnelutti, De Marisco, Petrocelli y Arturo Rocco. (BUSTOS RAMÍREZ J. , "Derecho Penal Parte General", 1989, pág. 29) Se le hacen críticas por no constituir una escuela, sino solo un método para analizar la norma penal. Así menciona como niveles de análisis, y que no se entrarán a analizar por considerar que ese aspecto no se relaciona con el tema de manera íntima, por ejemplo el Método exegético, el cual es un examen literal o gramatical del derecho penal; otro nivel de análisis es el Sistemático, que es un análisis de los diferentes conceptos y normas del derecho penal, para conocer el que más se adecua a una teoría del delito específico.

Esta corriente de pensamiento concibe el delito como un acto típico, antijurídico, imputable, culpable y susceptible de ser penado. Considera al delincuente como aquel capaz de comprender la norma jurídica, haciendo la diferencia entre imputables e inimputables, los segundos no respetan la norma jurídica porque no la comprenden. En la responsabilidad penal es negado el libre albedrío.

#### **4.4. Escuela Finalista o Teoría de la Acción Final**

Al igual que las anteriores, no es propiamente una escuela, sino más bien una teoría acerca del delito, la pena y el delincuente. Tiene su origen en Alemania con Hans Welzen (BUSTOS RAMÍREZ J. , "Derecho Penal Parte General", 1989, pág. 31) su nombre se deriva de la idea que toda acción humana conlleva a una dirección final; y considera la acción final como una actividad dirigida conscientemente en función a un fin, a diferencia de la teoría causalista, la que considera que la acción causal no está dirigida a un fin sino que resulta del contexto en que se encuentre la persona que realiza la acción en el momento de realizarla.

Para conocer mejor en qué consiste cada una de estas teorías a continuación se analizarán de una forma breve:

En la teoría de la acción causal Liszt, uno de sus principales representantes define la acción como: "movimiento corporal que causa una modificación en el mundo exterior". Según la anterior definición el movimiento conlleva un acto de voluntad que produce un resultado, es decir que la acción y resultado se relacionan por la causalidad. En ese sentido la acción constituye un elemento general de cualquier delito, lo cual evidencia que para esta teoría no importa el elemento psíquico, o mejor dicho el verdadero contenido de la acción humana, solo importando el resultado físico, de tal forma que haya actuado con o sin intención no importa.

La teoría finalista por su parte define la acción humana como “ejercicio de actividad final”, la acción se basa entonces en un conocimiento de la causa, pues el sujeto dentro de ciertos límites puede prever gracias a este conocimiento las consecuencias posibles de su actividad (acción), en otras palabras el sujeto se pone determinados fines y en razón de ellos dirige su acción, a través de un proceso ideado por él mismo. De ahí que la actividad final está orientada conscientemente desde un fin, mientras que la actividad causal está dirigida desde la causa a realizarse en cada caso concreto, ósea que de acuerdo a esto la acción no se realiza para alcanzar un fin.

Aristóteles en relación a este punto manifiesta “no deliberemos a cerca de los fines a alcanzar, sino de los medios para alcanzar estos fines...una vez que ha sido determinado el fin, uno examina cómo y por qué medios se realizará, si este fin parece debe ser conseguido por medio de varios recursos, se busca el medio más fácil y mejor...” el resultado del análisis es el primero en el orden de los hechos...” (BUSTOS RAMÍREZ J. , "Derecho Penal Parte General", 1989, págs. 32-33)

En la escuela finalista la acción por ser vista como un acontecer final se le carga de contenido psíquico, para conseguir el fin último se desarrolla un proceso mental que es la anticipación del fin, selección de los medios para lograr el fin propuesto, además procurar circunstancias concomitantes que podrían darse en la realización del proceso al buscar conseguir el fin último. Esto es anterior a la realización de la acción en el mundo objetivo, a diferencia de la escuela causalista donde la acción humana carece de elementos psíquicos.

Otra diferencia es la intencionalidad humana, el dolo para los finalistas debe ser observado en el tipo penal de los delitos dolosos que al igual que la culpa se aborda en el tipo. Los causalistas estudian estos elementos en la culpabilidad. En la definición Wezel, analiza que el dolo es parte de la finalidad.

Aristóteles relaciona en la conducta voluntaria una finalidad y para la realización final de la acción es necesario anticiparse a los medios y al cómo de la realización en el mundo exterior por parte del sujeto. De tal forma que lo último a alcanzar (el fin), es lo primero a idear.

Para Welzen la acción humana puede ser valorada en dos sentidos, el primero por el resultado que origina, y el segundo independiente del resultado originado. Así por ejemplo la acción del violador como del que intentó violar y por alguna razón ajena a su voluntad no logró el fin deseado, ambas acciones están dirigidas a un resultado reprochable, en consecuencia su valoración es también reprochable.

En lo referente a los delitos imprudentes Welzen, manifiesta que la acción final se dirige a fines que no tienen trascendencia para el derecho penal, en estos la infracción reside en el deber objetivo de cuidado.

## **5. Funciones de la Política criminal**

Según la literatura especializada (BINDER 2010, & ZUÑIGA RODRÍGUEZ, 2001) la Política Criminal debe cumplir tres funciones específicas: i) el estudio de la realidad y de los mecanismos de prevención del delito; ii) la crítica de la legislación penal; y iii) el diseño, implementación y evaluación de un programa político-criminal que responda a las necesidades de la sociedad. A continuación, se describirán cada una de estas funciones.

En primer lugar, es pertinente destacar que la política criminal debe ser diseñada con una base sólida de conocimiento de la realidad delictiva que pretende regular. Por ello, es indispensable el diálogo con la Criminología, pues esta será la encargada de brindar los insumos empíricos y teóricos para comprender la etiología del fenómeno criminal en una sociedad y momento determinado. Asimismo, le permitirá visualizar alternativas de acción dependiendo de la problemática concreta. Además, posteriormente, evaluará

la eficacia e impacto de la normatividad y de los mecanismos de prevención aplicados en la realidad (MEDINA, 2011; ZÚÑIGA, 2001; ZIPF, 1979).

En segundo lugar, la política criminal cumple una función crítica respecto de la legislación penal. Es decir, debe identificar críticamente aquellos aspectos de las normas penales que no cumplan con la protección de bienes jurídicos, o que lo hagan de una forma desfasada de las necesidades sociales. Pues, solo en la medida que se critiquen aquellas, se podrán advertir los vacíos, incoherencias fácticas o normativas que no cubren las leyes penales vigentes y que deben ser modificadas, pues existe “una falta de relación entre una determinada situación social o económica y la respuesta o falta de respuesta que a ella da el subsistema jurídico, en este caso el Derecho Penal” (DÍEZ RIPOLLÉS J. L., 2013, pág. 20)

Dicha constatación exigirá, pues, la formulación racional de una nueva ley penal o la modificación de las existentes, tal como lo desarrolla Díez Ripollés al describir las fases de formulación de la ley penal: prelegislativa, legislativa y postlegislativa (DÍEZ RIPOLLÉS J. L., 2013, págs. 17-56)

En tercer lugar, la política criminal debe concretarse en el diseño de un programa integral que recoja las medidas para la prevención, control y sanción del delito. Para ello es indispensable la elaboración de un diagnóstico que permita definir objetivos y estrategias para abordar un fenómeno criminal concreto (MEDINA, 2011; ZÚÑIGA, 2001). Por ejemplo, en el Perú, el Consejo Nacional de Política Criminal ha elaborado dos políticas frente a dos fenómenos criminales concretos: delitos patrimoniales y trata de personas. Asimismo, aprobó el Plan Nacional de Prevención y Tratamiento del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal, con la finalidad de ensayar medidas sectoriales para prevenir y controlar la delincuencia juvenil.

Finalmente, la Política Criminal debe evaluar la ejecución de todo plan diseñado contra la criminalidad. En ese sentido, debe verificar si las estrategias trazadas fueron idóneas para alcanzar los objetivos político-

criminales planteados como la prevención o reducción de la delincuencia en el contexto específico. Al respecto, la evaluación permitirá advertir aquellos elementos de la política que resultaron exitosos para conseguir los fines propuestos; o identificar aquellos aspectos en los que es aún necesaria una reformulación de estrategias para conseguirlos. Solo en esa medida será posible identificar las disfunciones o restricciones que cabe mejorar y superar para implementar una política criminal eficiente, que cumpla con las finalidades que se describirán a continuación.

## **6. Finalidad de la política criminal**

A lo largo de la historia, la política criminal ha tenido una serie de finalidades distintas, siendo condicionada, en un primer momento, por la finalidad que se le asigne a la pena en una sociedad determinada (RIVERA BEIRAS, 2005). No obstante, con el surgimiento de mecanismos alternativos de solución de conflictos y de sanciones alternativas a la pena privativa de libertad, surge la idea de enfrentar la criminalidad con otro tipo de estrategias distintas al Derecho Penal (MEDINA ARIZA, 2011) que enfatizan el carácter social de la política criminal (DÍEZ RIPOLLÉS J. , 2015).

En ese contexto, podemos identificar tres grandes finalidades que cumple la política criminal: i) Finalidad jurídico-penal; ii) Finalidad social; y iii) Finalidad garantista de los derechos humanos. Seguidamente, se examinará cada una de ellas.

En primer término, la finalidad jurídico-penal hace referencia a “la creación de instrumentos jurídicos para controlarla, prevenirla y reprimirla la criminalidad” (HASSEMER & MUÑOZ CONDE, 2012, pág. 26). En ese sentido, la política criminal es el proceso de conversión de los datos criminológicos en información para la toma de decisiones que se cristalizará en una norma penal. Cabe mencionar que este proceso puede verse condicionado o influenciado por distintos grupos de presión como los empresarios o los medios de comunicación (DÍEZ RIPOLLÉS J. L., 2013, págs. 30-42).

No obstante, como se ha mencionado, el diseño de la política criminal debe respetar los principios del sistema penal, así como las garantías previstas en la Constitución Política del Perú.

En segundo lugar, la finalidad social busca prevenir la delincuencia a través de la generación de condiciones que permitan un desarrollo integral de las personas en la sociedad y le garanticen el ejercicio pleno de sus derechos (VIDAURRI ARÉCHIGA, 2015, pág. 14) Para el cumplimiento de esta finalidad, nuevamente, resulta vital el aporte de la criminología, pues solo en la medida en que se detecten las causas del fenómeno criminal e identifiquen los factores criminógenos que promueven o facilitan la comisión de actos delictivos, será posible configurar planes y acciones que respondan a ellas y que incidan directamente en la disminución de la criminalidad (SEPÚLVEDA SCARPA, 2009, pág. 10).

Finalmente, la política criminal debe ser coherente con el respeto y la garantía de los derechos humanos. Esto es, ella debe ser formulada respetando los límites constitucionales y, sobre todo, el principio de la dignidad humana. Como señala Vidaurri, la política criminal de un Estado no debe ser “pretexto para soliviantar violaciones a la dignidad de la persona humana” (VIDAURRI ARÉCHIGA, 2015, pág. 14). En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional señala que “toda ley dictada como parte de la política criminal del Estado será inconstitucional si establece medidas que resulten contrarias a los derechos fundamentales de las personas, procesadas o condenadas.

Pero también lo será si no preserva los fines que cumple la pena dentro de un Estado social y democrático de derecho.”

Las finalidades reseñadas anteriormente buscan concretizarse a través de decisiones político criminal que tienen como objetivo implementar las acciones y las estrategias de control y prevención de la criminalidad.

## **7. Decisiones de política criminal**

Una decisión político criminal determina el marco de actuación de los actores del sistema penal (VIDAURRI ARÉCHIGA, 2015, pág. 15). A nivel legislativo, estas decisiones orientan la labor de los legisladores en la creación, modificación o derogación de una ley penal. En ese sentido, las decisiones de política criminal “cumplen un mismo rol prohibicionista y sancionador de tales actos a los que descalifican otorgándoles la condición de delictivos y punibles” (PRADO SALDARRIAGA, "Consecuencias Jurídicas del delito Giro Punitivo y Marco Legal", 2016, pág. 43).

En ese sentido, su objetivo es calificar como punible o no a un comportamiento específico en un espacio y tiempo determinado. Estas pueden ser de tres tipos: i) decisiones de criminalización, ii) de descriminalización y iii) de despenalización; las mismas que se diferencian por criterios de intensidad, oportunidad y selección (PRADO SALDARRIAGA, "Consecuencias Jurídicas del delito Giro Punitivo y Marco Legal", 2016, págs. 44-45).

Cabe mencionar que el predominio de alguno de los tipos de decisiones descritos, dependerá del modelo político-criminal seleccionado por el Estado y la sociedad en los que vayan a implementarse. Cada una de ellas tiene características propias que se señalarán a continuación.

En primer lugar, las decisiones de criminalización consisten en calificar como delito un comportamiento anteriormente lícito, es decir, representan “el poder de definición a través del cual el legislador erige en delictivas algunas conductas” (VILLAVICENCIO TERREROS, 2013, pág. 11).

En ese sentido, el proceso de criminalización es producto de la institucionalización del poder punitivo estatal y constituye el resultado de la actividad del Sistema Penal (BINDER, 2010, pág. 2014).

Un ejemplo de criminalización reciente en el Perú, es la incorporación del delito de posesión o comercialización de equipos destinados a la interceptación telefónica o similar. Además, existen dos modalidades de



decisiones conexas a la decisión de criminalización: i) la sobrecriminalización, y ii) la neocriminalización (PRADO SALDARRIAGA, "Consecuencias Jurídicas del delito Giro Punitivo y Marco Legal", 2016, pág. 44) Las decisiones de sobrecriminalización se caracterizan por aumentar las sanciones establecidas para una conducta delictiva o incorporar circunstancias agravantes para delitos específicos. En ese sentido, tienen "la función de hacer más severa la represión de un hecho punible mediante disposiciones que acentúan su persecución penal o que inciden en la intensidad de las sanciones penales aplicables o en la mayor rigidez del régimen de ejecución penal que le corresponde" (PRADO SALDARRIAGA, "Consecuencias Jurídicas del delito Giro Punitivo y Marco Legal", 2016, pág. 45).

Según Prado Saldarriaga, las manifestaciones de sobrecriminalización son, por ejemplo, la incorporación de prisión perpetua, la incorporación de circunstancias agravantes específicas y/o cualificadas, la ampliación diferenciada de los plazos de la prescripción de la acción penal o de la pena (PRADO SALDARRIAGA, "Consecuencias Jurídicas del delito Giro Punitivo y Marco Legal", 2016, págs. 45-46).

Cabe mencionar que la tradición político criminal en el Derecho penal peruano se ha caracterizado por el predominio de este tipo de decisiones. Un ejemplo concreto es la evolución legislativa de la tipificación de los delitos patrimoniales, específicamente de robo. (DÍEZ RIPOLLÉS J. , 2008, pág. 15)

A continuación se resume las modalidades de sobrecriminalización más frecuentes, según su nivel de intensidad punitiva.

1. Modificación cualitativa o cuantitativa de la pena impuesta a un delito determinado, agravando su extensión y efectividad.
2. Incorporación o extensión de la pena de muerte o de prisión perpetua.
3. Eliminación de todo tipo de flexibilización punitiva (aplicación de penas alternativas) o de reducción del cumplimiento de penas (prohibición de beneficios procesales o penitenciarios) para el acto criminalizado

4. Incorporación de circunstancias agravantes específicas
5. Inclusión de circunstancias agravantes cualificadas
6. Eliminación de circunstancias atenuadas privilegiadas
7. Ampliación diferenciada de los plazos de prescripción de la acción penal o de la pena
8. Imprescriptibilidad de la pena o del delito
9. Reducción de la imputabilidad etaria para la responsabilidad penal de menores de edad.
10. Constitución de tribunales de excepción
11. Juzgamiento de delitos y delincuentes comunes por tribunales militares
12. Prohibición de acceso a garantías constitucionales

Cabe mencionar, que múltiples estudios se han pronunciado sobre los efectos negativos que produce el uso frecuente y casi exclusivo de las modalidades de sobrecriminalización detalladas (COITINHO, 2014; HUSAK, 2013; LARKIN, 2011; LUNA, 2005).

Específicamente, cabe destacar tres de estos efectos: i) la inflación penal, es decir, sobreoferta de leyes penales que recogen las modalidades descritas (Becerra, 2013); ii) hacinamiento penitenciario, característica común en las prisiones regionales que genera graves violaciones a los derechos humanos de los internos, e impide el cumplimiento de los fines de la pena, pues perpetúa un ambiente de socialización criminógeno para el reo (BERMÚDEZ TAPIA, 2007, pág. 33) y iii) la ineficacia y pérdida de confianza de la población en el sistema de administración de justicia, que genera indirectamente la búsqueda de justicia por mano propia (INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL, [http://www.seguridadidl.org.pe/sites/default/files/INFORME%20ANUAL%202015\\_%20IDL-SC.pdf](http://www.seguridadidl.org.pe/sites/default/files/INFORME%20ANUAL%202015_%20IDL-SC.pdf), 2015).

Por su parte, las decisiones de neocriminalización tienen como propósito crear nuevos delitos que puedan cometerse en función del alcance de poder en términos político, económico, tecnológico o de género. En ese sentido, “buscan sancionar penalmente modalidades sofisticadas de abuso de poder como los delitos de empresa o de cuello blanco o la cibercriminalidad” (PRADO SALDARRIAGA, "Consecuencias Jurídicas del delito Giro Punitivo y Marco Legal", 2016, pág. 47) Un ejemplo reciente en la legislación peruana es la tipificación del delito de feminicidio.

En suma, las decisiones de criminalización y sus modalidades descritas tienen como objetivo determinar cuándo una conducta es considerada punible y en qué intensidad. No obstante, su implementación se ve, generalmente, condicionada por la coyuntura criminógena que le toca afrontar a un Estado, y en la que suelen confluír intereses opuestos a los criterios de racionalidad que deben orientar el diseño de la política criminal, así como el uso de mecanismos excepcionales para legislar. Por ejemplo, en un contexto de alta percepción de inseguridad, el Congreso peruano otorgó facultades legislativas al Poder Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana. Como resultado de dicha delegación se emitieron 31 decretos legislativos orientados a la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.

En segundo lugar, las decisiones de descriminalización son aquellas orientadas a eliminar la calificación de criminal de una conducta determinada. La descriminalización puede efectuarse de dos formas: i) directa o legal, derogando la normativa penal que tipificaba la conducta como delito; o ii) indirecta o de facto, mediante la permanencia formal de la norma penal en el ordenamiento vigente, pero restringiendo o eliminando su aplicación material (PRADO SALDARRIAGA, "Consecuencias Jurídicas del delito Giro Punitivo y Marco Legal", 2016, pág. 48) En el ordenamiento penal peruano, existen muy pocos ejemplos de descriminalización directa, pudiendo aludir a la eliminación del otrora delito de desacato (art. 374° del Código Penal), derogado mediante la ley 27975, publicada el 29 de mayo de 2013. Por su parte, un ejemplo de

descriminalización indirecta es el caso del pretendido delito de contumacia que introdujo la ley 26641, publicada el 25 de junio de 1996, pero que no dio lugar a procesos o condenas penales.

En tercer lugar, las decisiones de despenalización, son aquellas que excluyen o reducen la pena privativa de libertad como sanción para un delito y la sustituyen por la incorporación de medidas alternativas o de excarcelación anticipada. Por ejemplo, la despenalización del aborto terapéutico, regulada en el artículo 119° del Código Penal.

A modo de resumen, las decisiones de política criminal son las herramientas del Estado para prevenir y controlar los comportamientos que generan una lesión o amenaza a aquellos intereses considerados imprescindibles para la vida en sociedad (PRADO SALDARRIAGA, "Consecuencias Jurídicas del delito Giro Punitivo y Marco Legal", 2016, pág. 44). Estas decisiones, como se ha reseñado, pueden ser de tres tipos: i) de criminalización, que tiene como sub modalidades las decisiones de sobrecriminalización y neocriminalización; ii) de descriminalización; y iii) de despenalización.

## **8. Modelos de política criminal**

Los modelos de política criminal son enfoques orientados a abordar de una forma específica el problema de la criminalidad. En ese sentido, todos ellos son catálogos de objetivos, estrategias, decisiones, acciones y programas orientados a i) la protección de la sociedad frente a la cuestión criminal; y/o ii) a la rehabilitación del delincuente.

En tal sentido, permiten mejorar la aplicación de la justicia penal, siempre que contengan decisiones (o medidas) basadas en investigaciones criminológicas. Al respecto, estos posibilitan i) simplificar, ii) generalizar y iii) aproximar la respuesta penal a la realidad que se pretende regular. En ese contexto, Delmas Marty destaca que los modelos permiten “globalizar la materia tratada y evitar reducciones unilaterales”, siempre que respeten

criterios de coherencia interna y sus presupuestos se adecúen a la realidad con la que les corresponde interactuar (DELMAS MARTY, 1986, pág. 49)

Los modelos de política criminal pueden ser clasificados desde múltiples enfoques. Sin embargo, aquellos que han generado mayor desarrollo teórico son el enfoque político, que enfatiza las características del régimen político del Estado en el que se enmarca la política criminal (DELMAS MARTY, 1986, pág. 50); y el enfoque jurídico-penal, que enfatiza el tratamiento de la delincuencia a través del Derecho Penal (DÍEZ RIPOLLÉS J. L., 2013, pág. 44).

Cabe destacar, que el enfoque que plantea Delmas Marty, parte de la premisa de que en toda sociedad existirán comportamientos que impliquen una trasgresión a las normas que rigen la convivencia en un contexto determinado. Dicha trasgresión puede ser calificada de dos maneras distintas: i) como infracción, o ii) como desviación, según sea el Estado o la sociedad, el que organice la respuesta a dicho comportamiento contrario a las normas vigentes en un momento determinado (DELMAS MARTY, 1986, págs. 27-28) En ese contexto, este primer enfoque concibe a la Política Criminal como el producto del enfrentamiento de diferentes fuerzas y dinámicas que coexisten, confluyen y determinan la respuesta de la sociedad y del Estado frente a los componentes del fenómeno criminal, es decir, frente a la desviación o a la infracción de las normas vigentes, según corresponda (DELMAS MARTY, 1986, págs. 41-42). En tal sentido, la autora francesa identifica dos relaciones en virtud de las cuales se configurarán los modelos político criminales:

i) Relación entre la infracción-desviación y la respuesta estatal, y ii) relación entre la infracción-desviación y la respuesta social. Es de mencionar, que estas relaciones tienen derivaciones propias, variantes o complementarias, según las particularidades de cada una de ellas (DELMAS MARTY, 1986, págs. 49-50). En tal sentido, Delmas Marty propone la existencia de seis modelos: i) Estado autoritario, ii) Sociedad peri-estatal, iii) Estado-sociedad liberal, iv) Estado-sociedad terapéutico-social, v) Estado totalitario,

y vi) Sociedad en vigilancia permanente. Cabe mencionar, que los modelos Estado autoritario, Estado-sociedad liberal y Estado totalitario, pueden agruparse, a su vez, como modelos estatales; mientras que los modelos Sociedad periestatal y Sociedad en vigilancia permanente, pueden agruparse como modelos sociales. A continuación, se describirán los modelos mencionados.

En primer lugar, el modelo Estado autoritario se caracteriza porque las respuestas a los componentes del fenómeno criminal es predominantemente estatal, aunque con determinados matices, según se trate de una infracción o desviación a las normas vigentes (DELMAS MARTY, 1986, pág. 51) En segundo lugar, el modelo Sociedad peri-estatal, presupone la existencia de una organización estatal, pues diferencia entre los supuestos de infracción y desviación. Sin embargo, debido a la ausencia del Estado, la sociedad civil asume el rol de reacción frente al fenómeno criminal (DELMAS MARTY, 1986, pág. 51) Es pertinente precisar, que ambos modelos son considerados modelos político-criminales puros, pues, es posible identificar el predominio del Estado o de la Sociedad en la configuración de la respuesta al fenómeno criminal.

En tercer y cuarto lugar, se encuentran los modelos mixtos, ya que en ellos se evidencia la presencia del binomio Estado-sociedad, “en el que el Estado no impone ni la orientación ni el control de todas las respuestas al fenómeno criminal, sino que abandona una parte de ellas a la sociedad civil” (DELMAS MARTY, 1986, pág. 51). Así, en el modelo Estado-sociedad liberal, la intervención del Estado se restringe solo a la infracción; mientras que la respuesta social se organiza frente a la desviación, es decir, frente a los comportamientos de disconformidad con las normas sociales (DELMAS MARTY, 1986, pág. 51) Por su parte, el modelo Estado-sociedad terapéutico-social, limita la respuesta del Estado únicamente a los actos de desviación; mientras que la respuesta de la sociedad se avoca a la infracción, mediante la mediación o venganza del grupo. Se debe destacar, que la aplicación real de este modelo es utópica, debido a que “la respuesta estatal se orienta prioritariamente hacia

la infracción y sólo a título complementarios hacia la desviación, salvo cuando ésta fuese concebida en un sentido tan amplio que engloba, también, a la infracción” (DELMAS MARTY, 1986, pág. 51)

En quinto y sexto lugar, Delmas-Marty sostiene la existencia de los modelos Estado totalitario y Sociedad en vigilancia permanente, que surgen por oposición a los modelos reseñados anteriormente. En ellos se evidencia una contracción entre la infracción y la desviación, que determina su respuesta frente al fenómeno criminal. En tal sentido, en el modelo Estado totalitario, no se distingue una diferencia entre la infracción ni la desviación, sino que, por el contrario, “hay una respuesta cuasi-continua del Estado”, a través de sus variantes justiciera o terapéutica (DELMAS MARTY, 1986, pág. 53) Por su parte, el modelo de Sociedad en vigilancia permanente, presenta una naturaleza exclusivamente social en el que la sociedad civil se ocupa de la respuesta al fenómeno criminal, a través de su variante vindicativa o autogestionaria (DELMAS MARTY, 1986, pág. 52)

Por su parte, el segundo enfoque sobre la caracterización de modelos de Política Criminal, parte desde una perspectiva jurídico-penal, y se concentra en los mecanismos de intervención penal y de respuesta a la delincuencia. Este enfoque, elaborado por Díez Ripollés identifica tres modelos de intervención penal: i) garantista, ii) resocializador, iii) de seguridad ciudadana cuyas características serán enunciadas a continuación (DÍEZ RIPOLLÉS J. , "La Política Criminal en la Encrucijada", 2007, pág. 61).

En primer lugar, el modelo penal garantista propone una intervención autolimitada que tiene como base un Derecho penal mínimo, el cual gira en torno a los principios de humanidad, proporcionalidad y reintegración como límites trascendentes en el empleo de sanciones penales, ya que existe cierta desconfianza respecto del uso del poder sancionador por parte del Estado. Por ello, este modelo asigna un ámbito de intervención reducido al Derecho penal. Cabe mencionar, además, que la legitimidad y la eficacia de sus normas y sanciones dependerá de la correspondencia de estas con los

objetivos y características de las instituciones sociales de la sociedad en la que se desenvuelve (DÍEZ RIPOLLÉS J. , "La Política Criminal en la Encrucijada", 2007, págs. 63-64).

En segundo lugar, el modelo penal resocializador tiene como base la "ideología del tratamiento del delincuente" Este modelo reconoce la legitimidad del Derecho penal, siempre que este tenga como uno de sus fines la resocialización y reintegración a la sociedad del infractor, y oriente su arsenal normativo hacia ello. En ese sentido, este modelo valora las condiciones sociales y personales que motivaron a delinquir a una persona.

Adicionalmente, es de precisar que este modelo presenta una valoración ambivalente de la pena privativa de libertad, que, por un lado, brinda las condiciones espaciales para cumplir con su función reeducadora; pero, por otro lado, el modelo prioriza también la aplicación de penas alternativas al internamiento (DÍEZ RIPOLLÉS J. , "La Política Criminal en la Encrucijada", 2007, págs. 65-68).

En tercer lugar, el modelo de seguridad ciudadana se contextualiza en la denominada sociedad del riesgo, y concibe la intervención penal como mecanismo para mantener el control y orden social (GARLAND, 2009, pág. 56).

La aplicación de este modelo resalta la prevalencia del sentimiento colectivo de inseguridad ciudadana en la sociedad, sustentado en un protagonismo de la delincuencia violenta o criminalidad de despojo, que atenta contra los principales bienes jurídicos como la vida, el patrimonio y la libertad; y que, como sustenta Díez Ripollés, "tropiezan al menos con tres dificultades para pasar desapercibidos: son conductas que generan inmediata preocupación social dada su estrecha vinculación a los principios básicos de la convivencia, son objeto cotidiano de atención de los medios, y carecen de un grupo experto con la suficiente competencia socialmente atribuida como para encomendar a él la resolución del problema" (DÍEZ RIPOLLÉS J. L.,



2013, pág. 76). Además, prioriza la racionalidad pragmática y enfatiza la eficacia y efectividad de la intervención penal (DÍEZ RIPOLLÉS J. , "El Nuevo Modelo Penal de Seguridad Ciudadana", 2004, pág. 10).

No obstante, este modelo ha sido criticado, principalmente, por concebir que la delincuencia surja por defecto. Esta afirmación fomenta la exclusión social, pues solo tiene Como objetivo inocular al delincuente, es decir, promueve su neutralización por considerarlo como un peligro para la sociedad, sin reparar en la corresponsabilidad del Estado en este punto (DÍEZ RIPOLLÉS J. , "La Política Criminal en la Encrucijada", 2007, págs. 75-76) De la misma forma, también ha sido objetado por el carácter inmediateista de las medidas implementadas, orientadas a las consecuencias y no a las causas de la criminalidad. Lo que se enmarca, a su vez, en un contexto de populismo y politización de la Política Criminal y del Derecho penal, potenciado por un rol activo de los medios de comunicación (DÍEZ RIPOLLÉS J. , "La Política Criminal en la Encrucijada", 2007, págs. 79-82).

Posteriormente, Díez Ripollés propone la configuración de una nueva perspectiva de análisis político-criminal, que permita un análisis comparativo de las políticas criminales, a través de la dimensión "inclusión/exclusión social": el modelo penal bienestarista. Este modelo parte de una aproximación social al fenómeno criminal, que "refleje el contraste entre un afrontamiento ingenuo, tosco de la delincuencia, centrado en los síntomas e incapaz de ver más allá del corto plazo, y un abordaje de la criminalidad experto, consciente de la complejidad del fenómeno, centrado en las causas y dispuesto a dar su tiempo a las modificaciones sociales" (DÍEZ RIPOLLÉS J. , "La Política Criminal en la Encrucijada", 2007, págs. 121-123).

En tal sentido, el modelo propone que el delincuente, tras el contacto con la ley penal, se encuentre en iguales o mejores condiciones para lograr su reinserción en la sociedad, y no en condiciones más difíciles para delinquir. Para ello, se propone el análisis de nueve indicadores que medirán el grado de inclusión o de exclusión social que fomenta la política criminal que diseña

y aplica un país determinado (DÍEZ RIPOLLÉS J. , "La Dimensión inclusión/exclusión social como guía de la Política Criminal Comparada", 2011, pág. 6).

En resumen, existen dos grandes enfoques sobre modelos políticos criminales. Aquel que destaca la influencia del régimen político escogido por el Estado y las características propias de la sociedad en la que se implementa. Y otro caracterizado por priorizar los mecanismos y medidas de intervención penal y su configuración en la respuesta a la delincuencia. Actualmente, se observa un predominio del modelo de seguridad ciudadana en la política criminal de muchos países iberoamericanos (DÍEZ RIPOLLÉS J. , 2008, pág. 16).

## **9. Política Criminal y Control Social**

El término control social es de suma importancia para una mejor comprensión del tema objeto de estudio, por tal razón, es determinante establecer la relación práctica de control social y política criminal. Pero antes hay que establecer el origen y definición de control social.

El control social surge a mediados del siglo XIX en los Estados Unidos, este término tiene una gran relación, ya que en este tiempo existía la necesidad de integrar en un mismo marco social, las grandes masas de inmigrantes que llegaban al país del norte, ofreciendo su fuerza de trabajo influenciado por el proceso de industrialización que se incrementaba, dichos grupos tenían una gran diversidad cultural, religioso, etc. Y esto obligó a buscar vías de socialización ya que tenían la necesidad de superar las diferencias anteriormente expuestas, pero esto a partir de las normas de comportamiento que generarían la convivencia social organizada.

En consecuencia, aparece el fenómeno del control social, el cual fue utilizado por primera vez por el sociólogo norteamericano Edwar Ross, el cual estableció que el control social “es una categoría enfocada con el orden y la organización social, en la búsqueda de estabilidad social desigual en sus raíces étnicas y culturales”. (ZAFARONI , 2000, pág. 19)

Es decir que el control social estaba enfocado a establecer y mantener el orden y la estabilidad dentro de una estructura social, dirigida a uniformar las desigualdades culturales, económicas, religiosas, etc., de la sociedad de aquel momento. Por otra parte Zafaroni establece “que el ámbito del control social es muy amplio y dada su configuración y la inmersión del investigador en el mismo no siempre es evidente. El control social se ejerce a través de la familia, la educación, la religión, los partidos políticos, los medios de comunicación, la investigación científica, entre otros”. (ZAFARONI , 2000, pág. 20) Lo anterior significa que el termino de control social es muy amplio y abarca una diversidad de aspectos lo que confirma Busto Ramírez al definir el Control Social como “los recursos de que dispone una sociedad determinada para asegurarse de la conformidad de los comportamientos de sus miembros a un conjunto de reglas y principios establecidos, así como las formas organizadas con que la sociedad responde a sus transgresiones” (BUSTOS RAMÍREZ J. , "Lecciones de Derecho Penal", 1997, pág. 15).

Según el mismo autor el Control Social comprende por una parte estrategias de control de las conducta, que consiste básicamente en que el individuo internalice las normas sociales, con el fin de que exista conformidad con las mismas, y con ello evitar conductas consideradas como dañosas; y por otra parte la llamada reacción social frente a la realización de una conducta no deseada que puede ser clasificada como formal o informal, lo que dependerá según el autor mencionado de que “el órgano tenga o no como actividad principal el ejercicio del control” (BUSTOS RAMÍREZ J. , "Lecciones de Derecho Penal", 1997, pág. 18) de lo que se desprende que el control social informal lo ejercen instituciones sociales no en forma primordial sino como actividad complementaria, pudiendo mencionar entre estas la familia, la comunidad, la iglesia, el trabajo, etc, sin embargo algunos de estos pasan inadvertidos por la población ya que no son tomados como controles sociales, como por ejemplo los medios de comunicación que con programas recreativos, en el fondo crean en la población pautas de conductas. Por el contrario los controles formales son ejercidos por instituciones que han sido

creadas exclusivamente para ejercer control social, como el caso de la policía, los tribunales, el derecho Penal, etc. De lo anterior podemos decir que la política criminal y control social, se relacionan en cuanto que la primera se vale de la segunda para realizar sus objetivos, en lo referente a prevención y control del delito, así como la articulación de las instituciones que participan en ello.

En conclusión, el control social en un Estado juega un papel determinante ya que con las políticas integrales que se deberían crear e implementar se controlarían todos los grupos sociales. La política criminal es una actividad normativa e institucional en virtud de la cual el Estado controla la comisión de delitos.

## **10. Política Criminal y Derecho Penal**

Para poder determinar la relación de estas dos disciplinas jurídicas, hay que establecer la definición más aceptada de derecho penal. El derecho penal se puede definir de varias maneras, pero generalmente se ha considerado desde dos puntos de vista: el primero se refiere al punto de vista objetivo, es decir aquel que se refiere al sistema normativo, dicha vertiente nace de la definición propuesta por Von Liszt, quien establece que el derecho penal consiste “en el conjunto de reglas establecidas por el Estado, que asocian al crimen como hecho y a la pena como legítima consecuencia” (VON LISZT, 1914, pág. 39) a este derecho se le denomina “Ius poenale”, y establece que el Estado es el legítimo y único titular de este derecho y en donde el control se encuentra centralizado. Esta definición es muy aceptada y usada comúnmente; pero es muy cerrada y necesita ser ampliada, ya que el derecho penal no tiene que limitarse a señalar las penas y los delitos, también tiene que incluir otros medios que se utilizan para controlar a los individuos.

El segundo punto de vista es el subjetivo, en el cual “el derecho penal es considerado, como el poder que tiene el Estado para determinar los hechos

punibles y las sanciones para cada uno de ellos, a este derecho se le denomina “Ius Puniendi” el cual significa un poder jurídico que el derecho objetivo concede al Estado para garantizar el mantenimiento del orden jurídico y restablecerlo cuando sea perturbado.” también el derecho de castigar es la facultad que tiene un Estado para actuar de conformidad con las normas del derecho (es decir el derecho penal objetivo), al derecho penal subjetivo se le ha señalado una doble característica, “al mismo tiempo de ser un poder, es también un deber.” (CAMARGO HERNÁNDEZ, 1964, pág. 49). De lo anterior, se entiende que el derecho penal subjetivo es un poder, ya que el Estado tiene el monopolio a través del Órgano Legislativo para dictar las leyes penales; pero también es un deber porque en un Estado de derecho, el derecho penal subjetivo es su principal garantía y está obligado a regularlo, en el sentido que las leyes penales deben estar acorde a los principios constitucionales y normas internacionales, respetando los derechos fundamentales de las personas y las garantías procesales.

En definitiva, la definición de derecho penal tiene que tener un aspecto objetivo y otro subjetivo, ya que son complementarios y dependientes uno del otro. Es por tal razón y para tener una mayor comprensión, que se tomará la siguiente definición “el derecho penal constituye el conjunto de normas jurídicas- penales establecidas por el Estado con fines preventivos y represivos, que comprenden los hechos punibles y las respectivas sanciones a quienes los cometen”. (TREJO ESCOBAR , 1992, pág. 49).

En el pasado la política Criminal generalmente era tomada como la Política del Estado y solo tenía como finalidad combatir al delincuente, dicha concepción tenía como límite al derecho penal, ya que este era tomado como una “Carta Magna” de los delincuentes, en aquel tiempo se creía que la Política Criminal combatía al delincuente y en consecuencia defendía a la sociedad; pero también se creía que el derecho penal con sus normas débiles salvaban a los delincuentes.

En la actualidad la relación de política Criminal y derecho penal sigue teniendo una gran importancia, y desde nuestro punto de vista ambas disciplinas jurídicas siguen teniendo algunos puntos encontrados, aunque la Política Criminal ya no es tomada doctrinariamente para combatir al delincuente mediante métodos represivos, sigue existiendo en la realidad de los países latinoamericanos y en especial el nuestro, grandes violaciones a los derechos humanos y donde el derecho penal es utilizado como un instrumento represivo en contra de los delincuentes, imponiéndoles penas excesivas que no cumplen con la función rehabilitadora.

Es evidente que entre ambas disciplinas debe existir una íntima relación, en cuanto que en el derecho penal en la aplicación concreta de la ley debe tomarse en consideración la política criminal en el sentido de reflexionar y explicar sobre el efecto que tendrá la pena en la persona condenada para la víctima y para la sociedad. Pero es necesario aclarar que el derecho penal no es ni la primera, ni la única vía que debe utilizar la política criminal para la solución de conflictos, es decir que esta debe prever otros medios y vías no penales.

En caso de haberse agotado otras vías o formas de solución y no se tenga otra alternativa, entraría el derecho penal como instrumento para hacer efectiva la política criminal, pues vendría a proteger los bienes jurídicos violentados. Cabe decir que el derecho penal actúa cuando la violación al bien jurídico ya ha tenido lugar, aplicando al sujeto infractor una sanción, la cual tiene que ir dirigida por mandato constitucional a la readaptación, por lo cual consideramos que antes de cruzar al ámbito penal el Estado debería tomar las medidas de prevención adecuadas y eficaces para el control de la delincuencia a través de Políticas sociales tendientes a satisfacer necesidades de la población o fortalecer puntos débiles que muchas veces son generadores o detonadores de la violencia; y no ser hasta después de haber hecho esfuerzos reales aplicar el derecho penal a las personas que a pesar de todo han delinquido.

## **11. Política Criminal y Criminología**

La denominación de criminología surge, con el antropólogo Francis Toppinard (1830- 1911), dicha ciencia ha tenido una diversidad referente al objeto y área de estudio, asimismo ha tenido una estrecha relación con otras disciplinas jurídicas, como el Derecho Penal y la Política Criminal.

Es así que en la escuela clásica, solo le daba importancia al delito, que considerado como ente jurídico, por el contrario los positivista vienen a dar gran preponderancia al estudio del delincuente y nuevo significado al delito, teniendo como critica esta escuela el hecho de considerar como personas diferentes a los delincuentes, respecto de los demás individuos, tales diferencias eran por un lado físicas, (como por ejemplo los pómulos salientes), según Lombroso. Todos estos aspectos se abordaron en su momento en el desarrollo del estudio de las Escuelas penales.

Pero esto constituye un reflejo que la concepción de la criminología ha ido cambiando en el transcurso del tiempo, hasta nuestros días, que ha incluido como elemento de estudio, además del delito y del delincuente, a la víctima, que es directamente afectada en el cometimiento del hecho delictivo.

De ahí que hay que tomar en cuenta, el surgimiento de la criminología crítica, la que ha venido a revolucionar el estudio de la criminología, ya que la criminología antigua en algunos contextos sus corrientes generaron marginación de algunos sectores económicamente desamparados y los que eran tomados como delincuentes. Tal como establece Juan Bustos Ramírez “la criminología crítica ha sustituido, por tanto el principio de igualdad por el de desigualdad lo que bota el dogma de igualdad ante la ley” ya que para él, esta última afirmación no tiene aplicación práctica en la sociedad, ya que hasta nuestros días el status social, influye mucho al momento que un sujeto es sometido a un proceso determinado.

Para el autor mencionado, “el derecho penal solo se preocupa por el delito, la Criminología, del delincuente y la política criminal, de la reforma legislativa” (BUSTOS RAMÍREZ J. , "Control Social y Derecho Penal", 1987, pág. 18).

De lo anterior se desprende que la criminología y la política criminal, son tomadas como disciplinas accesorias y subordinadas al Derecho Penal. O sea que, se establece una idea de cómo la Criminología, se relacionaba con la política criminal, es evidente que en ese contexto, estas eran tomadas de una forma secundaria.

A la criminología moderna le interesa el estudio en la conducta delictiva, la víctima y el control social, asimismo busca los factores que conducen a la criminalidad, en consecuencia conociendo las causas que originan la criminalidad, la política criminal puede establecer el campo para atacar la problemática a través de un tratamiento adecuado, pues como característica que ya se abordó anteriormente en la política criminal democrática, esta busca los medios idóneos para darle tratamiento a la criminalidad y que mejor apoyo, que la criminología que da un conocimiento científico del problema.

## **12. La Política Criminal y su relación con la Criminología y el Derecho Penal**

La Política criminal surge ante la necesidad de dar respuesta a la criminalidad como problema social que genera afectaciones o amenazas a aquellos intereses que se estiman imprescindibles para garantizar la interacción y convivencia pacífica de las personas. Sin embargo, para que estas respuestas sean idóneas, coherentes y eficaces, la Política criminal requiere del aporte fundamental de la Criminología y del Derecho Penal. Al respecto, las relaciones entre ellas son compatibles con una Estructura Tridimensional del Sistema Penal, donde la Criminología se encarga del hecho, la Política Criminal de la valoración del hecho, y la Dogmática de la interpretación y de las normas Sobre ello, Terradillos menciona la importancia de esta secuencia en el proceso de investigación en Derecho Penal:



La investigación en derecho penal debe abarcar, pues, la dogmática, la criminología y la política criminal. Pero no como partes yuxtapuestas por acumulación sino como elementos integrados en un sistema superior, que es superior precisamente porque, además de incorporar lo diferente, genera sinergias que enriquecen, superando, los resultados de la mera adición (TERRADILLOS BASOCO, 2014, pág. 15)

A continuación, se señalarán las relaciones de interdependencia y complementariedad que se dan entre las tres disciplinas mencionadas.

La criminología es una “ciencia empírica e interdisciplinaria que se ocupa del estudio del crimen, de la persona del infractor, la víctima y el control social del comportamiento delictivo”, con la finalidad de brindar información válida del fenómeno criminal; así como de las técnicas de prevención y de los diferentes modelos de respuesta estatal (GARCIA PABLOS DE MOLINA, 2008, págs. 1-2).

Es decir, ella se encarga de describir las características, patrones y tendencias del hecho criminal; así como de los mecanismos que utiliza el Estado para prevenirlo y controlarlo.

Por su parte, la dogmática jurídico penal es “la disciplina que se ocupa de la interpretación, sistematización y desarrollo de los preceptos legales y de las opiniones científicas en el ámbito del Derecho Penal” (ROXIN, Claus, 1972, pág. 32).

Tiene como funciones principales las siguientes: i) interpretar el Derecho penal; ii) dotar de mayor racionalidad la aplicación de la norma penal; y iii) aportar los principios y lineamientos orientadores para un proceso de reforma penal.

Es en ese contexto de elementos comunes, pero de funciones y métodos distintos, donde surge la política criminal como disciplina articuladora entre las investigaciones empíricas y los postulados normativos. Como se ha mencionado, la política criminal se encarga de la valoración de los hechos

descritos por la Criminología. Dicha valoración servirá de guía a la Dogmática Penal sobre el cómo, cuándo, dónde y por qué de la intervención necesaria y útil del Derecho Penal. Cabe mencionar, que si bien la política criminal permite una comprensión y valoración del poder punitivo como fenómeno social organizado, esta debe respetar los límites y principios que son marcados e inherentes a la Dogmática Penal: legalidad, proporcionalidad, subsidiariedad, culpabilidad y lesividad (HURTADO POZO & PRADO SALDARRIAGA, 2011). Como afirma Zúñiga: No hay pues contradicción entre Política Criminal y Dogmática, sino integración, coordinación de conocimientos, diálogo científico. Especialmente en sede de formación de la ley penal, la Política Criminal es la disciplina que opera mediante la valoración (desde concretas perspectivas jurídico-políticas) de los datos suministrados por la Criminología, para determinar si se produce o no una reforma penal y en qué términos. Los límites de los términos están constituidos, en el ámbito penal pues puede pensarse soluciones en otros ámbitos por el sistema de la teoría del delito, cual método organizado de imputación de responsabilidad penal (ZUÑIGA RODRÍGUEZ, 2001, pág. 155).

En conclusión, la criminología brindará información de la realidad en la que se presenta el fenómeno delictivo e identificará, por ejemplo, aquellas conductas que resulten lesivas a un bien jurídico y que causen malestar en la sociedad; por su parte, la política criminal a partir de la información brindada por la criminología, emitirá una valoración, una propuesta de solución o directriz de acción sobre cómo proceder ante el comportamiento que representa un problema para la sociedad, la cual sin embargo puede ser o no de carácter penal; finalmente, la dogmática será la encargada de analizar la interpretación de las normas elaboradas por la política criminal para su aplicación en el caso concreto. Solo en la medida en que se dé el trinomio funcional descrito entre Criminología, Política Criminal y Dogmática penal, se podrán diseñar respuestas eficaces que respondan a los requerimientos sociales frente al delito. De lo contrario, como afirma Terradillos, éstas serán calificadas de “asociológicas” (TERRADILLOS BASOCO, 2014, pág. 13).

Ahora bien, la Política Criminal, como el conjunto de objetivos, estrategias, planes y acciones orientadas a prevenir y reducir la criminalidad, cumple una serie de funciones, como las normas jurídico penales (dogmática penal), información del entorno social y estado (criminología) y decisiones (Política criminal).

### **CAPITULO III: LAS TEORIAS DE LA PENA Y SU APLICACIÓN EN EL CÓDIGO PENAL**

A nivel teórico, existen diversos planteamientos sobre la teoría de la pena. Sin embargo, estos múltiples postulados pueden sintetizarse en tres grupos: las teorías retribucionistas o absolutas, las teorías relativas o preventivas, y las teorías de la unión o eclécticas. Veamos:

#### **1. Teorías retributivas o absolutas.**

Estas teorías entienden a la pena como un fin en sí misma, sin necesidad de referirla a objetivos prácticos, es decir, a resultados concretos para justificarla. (ZUGALDÍA ESPINAR, 2002, pág. 59)

La pena no es un medio, sino un fin (KANT, 2005, pág. 166). Por ello, las teorías absolutas son teorías de la pena, pero no teorías sobre el fin de la pena. Esta disfruta, precisamente, del privilegio de majestuosidad de estar libre de toda referencia a fines, se justifica en sí misma (ZUGALDÍA ESPINAR, 2002, pág. 59).

Dentro de la perspectiva retributiva, subyacen dos formulaciones: la retribución ética desarrollada por KANT y la retribución jurídica formulada por HEGEL.

KANT parte de la necesidad absoluta de la pena, que deriva de un imperativo categórico, de un mandato de la justicia (KANT, 2005, pág. 167) y no admite excepciones de ningún género. La pena es un fin en sí misma, pues debe imponerse si y porque se ha cometido un delito, aunque no depare su imposición ningún provecho ni para el condenado ni para la comunidad (KANT, 2005, pág. 167). Dice KANT (KANT, 2005, pág. 167): la pena debe imponerse aunque ello conlleve a la disolución de la sociedad civil, aunque se dispersaran todos sus miembros habría que ejecutar al último de ellos que quedara preso para que el mundo no sufra lo que merecen sus hechos. Según KANT, la pena es un fin porque si se convirtiera en un medio para conseguir

un bien para el propio penado o para la sociedad, se trataría al hombre como un simple instrumento al servicio de ciertos fines (KANT, 2005, pág. 166), como un objeto del Derecho, como cosa. A decir de KANT en virtud de que él proclama una República moral, el delincuente se merece el mismo mal que ha causado, esto es, la Ley del Tali3n p3blica (estipulada a nivel abstracto por el legislador, e impuesta en el caso concreto por el Juez) y no la venganza privada (KANT, 2005, pág. 167) En la perspectiva kantiana, la pena retributiva es la 3nica que puede determinar la cantidad y calidad de la pena que ha de imponerse al delincuente. (FEIJ3O S3NCHEZ, p3g. 341)

Por su parte, HEGEL fundamenta la pena no en un mandato moral absoluto de la justicia, sino en un proceso dial3ctico (posici3n-negaci3n y negaci3n de la negaci3n). (HEGEL, 1975, p3g. 159)

Para HEGEL, el ordenamiento jur3dico es querer general (posici3n) (HEGEL, 1975, p3g. 159), el delito ser3a la negaci3n del mismo (HEGEL, 1975, p3g. 160), y la pena, la negaci3n de la negaci3n, esto es: la reafirmaci3n o restauraci3n del orden jur3dico, a trav3s de la necesaria negaci3n de la voluntad especial o particular del delincuente que, a su vez, neg3 la voluntad general. La pena, por tanto, no es un mal, sin m3s: ser3a absurdo entonces afirma Hegel querer un mal s3lo porque previamente ha tenido lugar otro mal. La pena no alude a un bien ni a un mal, sino a la dial3ctica injusto justicia. La pena es la restauraci3n del ideal del orden jur3dico infringido, de la armon3a entre la voluntad general y la particular.

No obstante, cabe precisar que la pena concreta no viene dada, para HEGEL, por la rigurosa ley del tali3n kantiana, sino por un principio valorativo m3s flexible que tenga en cuenta las caracter3sticas de la lesi3n concreta y las circunstancias de la sociedad civil (GARCIA PABLOS DE MOLINA, 2008, p3g. 244). No hay que confundir, pues, el concepto general de la pena de HEGEL (concepci3n absoluta) con la determinaci3n de la pena concreta aplicable al caso, puesto que ello depender3, a decir de HEGEL, de las necesidades cambiantes de la sociedad civil. Argumenta HEGEL: en un momento hist3rico

determinado puede ser adecuado castigar con la pena de muerte el hurto de una pequeña cantidad de dinero o de una zanahoria y en otro distinto, puede serlo sancionar con una pena benigna un hurto de grandes proporciones. Esto se debe a que HEGEL relaciona delito y pena en un plano simbólico o comunicativo, mientras que KANT lo hace en un plano causal externo (FEIJÓO SÁNCHEZ, págs. 347-348).

## **2. Teorías relativas (teorías preventivas puras)**

Las teorías relativas, sin embargo, justifican la pena en cuanto satisfaga determinados fines de prevención general o especial. Porque la pena no es un fin en sí misma, sino un medio preventivo (GARCIA PABLOS DE MOLINA, 2008, pág. 259): no se trata con ella de hacer justicia sobre la tierra, sino de cumplir una función social, de posibilitar la convivencia y evitar la comisión de futuros delitos. En ese sentido, para los partidarios de esta concepción la pena no es una cuestión de principio, un imperativo categórico derivado de la idea absoluta de justicia, ni una necesidad lógica, sino un medio o instrumento útil y necesario para prevenir la criminalidad. Por ello, no se justifica en sí misma, sino en cuanto cumpla con eficacia el fin que la legitima: el control de la delincuencia.

Se trata, pues, de genuinas teorías sobre el fin de la pena lo que no sucede con las teorías absolutas antes examinadas que parten, también, de la idea de que la pena es un mal, pero un mal necesario para hacer posible la convivencia, para evitar la comisión de delitos. Además, a diferencia de las teorías absolutas, en caso de colisión se imponen los intereses utilitaristas y preventivos por sobre los criterios retributivos, porque la pena afirman sus defensores no está orientada a la retribución del delito cometido, no mira al pasado, sino al futuro. Con ello, el común denominador de las teorías relativas es la eficacia preventiva del delito.

Son dos las direcciones principales por donde transitan las teorías preventivas de la pena: la de la prevención general y la de la prevención especial. (FEIJÓO SÁNCHEZ, pág. 348)

## **2.1. Teoría preventivo-general**

En el ámbito de las teorías preventivo-generales se encuentran, a su vez, la teoría preventivo-general negativa o intimidatoria y la teoría preventivo-general positiva o integradora. Pese a que ambas teorías tienen como finalidad prevenir la realización de hechos delictivos en el futuro, dirigiéndose a la sociedad (ROXIN, 1997, pág. 89) cada una de ellas posee formas distintas de lograr dicho cometido. De ello nos ocuparemos a continuación.

### **2.1.1. Teoría preventivo-general intimidatoria**

La formulación moderna de la teoría preventivo-general negativa pertenece a FEUERBACH. (ROXIN, 1997, pág. 90) Este jurista alemán sostiene que la misión del Derecho penal es impedir la violación del Derecho, lo cual, en su perspectiva, se conseguirá acudiendo a unos recortes coactivos de naturaleza psicológica (MIR PUIG, 2008, pág. 91). Es decir, según este autor, el recurso básico para alcanzar los cometidos del Derecho penal es la conminación penal coactiva. Conforme a su planteamiento, el medio idóneo para evitar la comisión de hechos delictivos es la intimidación de la sociedad mediante la amenaza penal (MIR PUIG, 2008, pág. 91). Y, esto, porque el mal futuro que se comunica a la ciudadanía en la previsión legal determinaría al potencial delincuente a que se inhiba de llevar a cabo el delito, que se abstenga de lesionar bienes jurídico-penales. Lógicamente, la amenaza penal funcionaría como un contramotivo del ciudadano y, consecuentemente, remotivaría a aquél a favor de la ley (MIR PUIG, 2008, pág. 91). Es decir, la abstención de cometer delitos operaría como mero efecto reflejo de la intimidación penal (CUELLO CONTRERAS, 2002, pág. 93).

Las críticas que se hacen a esta teoría es que instrumentaliza al ciudadano convirtiéndolo en un mero chivo expiatorio en aras de intereses

sociales y reflexiones ajenas a los merecimientos de autor (QUINTERO OLIVARES & CUELLO CONTRERAS , 1996, págs. 93-94). En el mismo sentido, también se señala que al poner el acento en las exigencias de coacción psicológica para neutralizar los impulsos delictivos del autor, desatiende la propia lesividad social del hecho, quebrando la necesaria proporción entre delito y pena (JAKOBS & SERRANO GONZÁLES DE MURILLO, 1997, pág. 79). De otro lado, se postula que esta teoría parte de una visión negativa del ciudadano como infractor potencial proponiendo un Derecho penal del temor que busca domesticar al hombre, lo cual implica que no concibe al hombre como un ser racional, sino como un ser instintivo que se determina por factores pulsionales, mas no por elementos racionales.

### **2.1.2. Teoría preventivo-general positiva o integradora**

Esta teoría busca prevenir la comisión de injustos penales mediante la afirmación positiva del Derecho, es decir, a través de la afirmación positiva de las convicciones jurídicas fundamentales, de la conciencia moral de la norma, o de una actitud de respeto hacia el Derecho. La prevención general positiva, se dice, es la reacción estatal a hechos punibles, que al mismo tiempo aporta un apoyo a un auxilio para la conciencia normativa social, esto es, la afirmación y aseguramiento de las normas fundamentales. La función preventivo-general positiva se basa en la confianza de la ciudadanía hacia la inviolabilidad del Derecho y en la protección del ordenamiento jurídico frente a los ataques criminales contra él mismo.

Esta es la perspectiva seguida por JAKOBS cuando señala que “Tarea del Derecho penal es el mantenimiento (de la vigencia) de la norma, como modelo orientador de las relaciones sociales; contenido de la pena, por tanto, es el rechazo de la desautorización de la norma, llevado a cabo a costa del que la ha quebrantado Mas propiamente dicho, según JAKOBS: “La pena es siempre reacción ante la infracción de la norma. Mediante la reacción siempre se pone de manifiesto que ha de observarse la norma”. En tal sentido, la



función de la pena es la prevención general mediante el ejercicio del reconocimiento de la norma (JAKOBS & SERRANO GONZÁLES DE MURILLO, 1997, pág. 14).

Así las cosas, a la prevención general positiva corresponderían tres cometidos (GARCIA PABLOS DE MOLINA, 2008, pág. 278): una función informativa, advirtiéndole al ciudadano lo que está prohibido y lo que se debe hacer; la misión de reforzar y mantener la confianza en la capacidad del ordenamiento jurídico para imponerse y triunfar; por último, la tarea de fortalecer en la población una actitud de respeto hacia el Derecho.

## **2.2. Teoría preventivo-especial**

La segunda de las teorías relativas (teorías preventivas puras) es la prevención especial o individual. Para esta teoría, el fundamento legitimador de la pena reside en la evitación de futuros delitos, pero actuando sobre quien ya delinquirió (ZUGALDÍA ESPINAR, 2002, pág. 63) y no sobre la comunidad. Se trata de evitar, por tanto, que quien ya infringió la ley penal, vuelva a hacerlo en el futuro (QUINTERO OLIVARES & CUELLO CONTRERAS, 1996, pág. 80). El cumplimiento y ejecución de la pena van orientados a dicho fin. A partir de ello, el destinatario del mensaje preventivo de la pena no es el infractor potencial, la sociedad (prevención general), sino el propio penado (BUSTOS RAMÍREZ J., 2005, pág. 217). La finalidad u objetivo primario de aquél es evitar la recaída en el delito (reincidencia). El medio o instrumento es la ejecución de la pena impuesta, no la conminación legal abstracta.

Dentro de esta perspectiva, existen tres tipos de prevención especial: la prevención especial resocializadora, la prevención especial inocuizadora y la prevención especial confirmadora.

La finalidad resocializadora de la pena estaría orientada a aquellos ciudadanos corregibles, esto es, a aquellas personas que pueden ser reeducados y reinsertados a la sociedad. La finalidad inocuizadora, por su parte, estaría dirigida a los ciudadanos irresocializables, a los sujetos que

están predestinados a delinquir. Por último, la finalidad confirmadora o admonitoria de la pena se orientaría a aquellos sujetos que delinquen accidentalmente (los ocasionales que no necesitan de resocialización), es decir, a los ciudadanos que pese a haber delinquido son respetuosos de las normas (ZUGALDÍA ESPINAR, 2002, págs. 63-64). Ello, se debe a que los partidarios de la prevención especial basados en criterios criminológicos del positivismo italiano sostienen que las personas que cometen delitos tienen características singulares las cuales configuran una personalidad especial (QUINTERO OLIVARES & CUELLO CONTRERAS, 1996, pág. 80). En función de ello, clasificaron a las personas que cometen delitos en delincuentes habituales o incorregibles, delincuentes corregibles o resocializables y, delincuentes ocasionales (ZUGALDÍA ESPINAR, 2002, pág. 64). A partir de tales premisas, es que se han elaborado las tres clases de penas especiales: una para cada tipo de delincuente.

### **3. Teorías de la unión**

Las teorías de la unión pretenden buscar una síntesis entre las teorías absolutas y las relativas. Partiendo de una consideración práctica, sostienen que la pena, en la realidad, cumple fines preventivo-generales y fines preventivo-especiales (ROXIN, 1997, pág. 95). En efecto, las teorías eclécticas de la unión son el resultado de la conciliación de las escuelas monistas (JESCHECK, "Tratado de Derecho Penal/Parte General", 2002, pág. 81) quienes tratan de armonizar las aportaciones valiosas de las teorías absolutas y de las teorías relativas.

Ahora bien, como afirman ROXIN y JESCHECK, las teorías de la unión no llegan a dicho planteamiento mediante una mera adición de principios de diverso origen y naturaleza, sino a través de un proceso dialéctico. Por eso, se dice que las teorías de la unión proponen fórmulas que sirven de puente entre las teorías absolutas y las teorías relativas. En la concepción de las teorías de la unión, la prevención general y la prevención especial no sólo son

complementarias, sino que son interdependientes, esto es, la prevención general influye en la consecución de la prevención especial y, al mismo tiempo, la prevención especial incide en la materialización de la prevención general.

La operacionalización dialéctica de las teorías de la unión se daría en tres momentos: en la conminación penal, en la imposición de la pena y en la ejecución de la pena. En el primer momento (en el momento legislativo), se realizaría preponderantemente la prevención general; esto, en virtud de que cuando la ley se hace pública comunica a todos los ciudadanos que hay conductas que están prohibidas. En este momento, la sociedad internalizaría la norma jurídico-penal y en adelante adecuaría su conducta conforme a Derecho. Por su parte, la prevención especial se alcanzaría, sobre todo, en los dos momentos posteriores. Y, es que, con razón, los partidarios de estas teorías sostienen que cuando el juez impone una pena al condenado en una sentencia condenatoria y cuando ésta se ejecuta en el centro penitenciario, los efectos de la misma inciden preferentemente sobre el sujeto activo del delito (autor o partícipe). Así, por ejemplo, el juez al fijar la pena en el momento de emitir la sentencia toma en cuenta todos los elementos y las circunstancias que afectan al sujeto activo del delito en el momento de la realización del hecho (Arts. 45 y 46 del CP). Lo mismo ocurre cuando se ejecuta la pena, esta no afecta sobremanera a la sociedad, sino sólo al sujeto que la padece. Sin embargo, los tres momentos estarían relacionados de modo que ninguno puede existir sin el otro (ROXIN, 1997, págs. 97-98): la prevención especial no puede llevarse a cabo sin la prevención general, ni la prevención general sin la prevención especial.

Por último, cabe señalar que la prevención general y la prevención especial que postulan los defensores de las teorías de la unión son las correspondientes a la prevención general positiva y a la prevención especial resocializadora. Es decir, no toman en cuenta la prevención general intimidatoria ni la prevención especial inocuizadora.

#### **4. Fines de la pena en el ordenamiento jurídico peruano**

Los fines de la pena en el ordenamiento jurídico penal peruano se encuentran regulados en la Constitución Política, en el Código Penal y en el Código de Ejecución penal. A nivel constitucional, los fines están previstos en el Art. 139 inciso 22, el cual señala que “El principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado en la sociedad”. Por su Parte el Art. IX del Título Preliminar del Código Penal establece que “La pena tiene función preventiva, protectora y resocializadora”. Finalmente, el Código de Ejecución penal en su Art. II del Título Preliminar prescribe que “La ejecución penal tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad”.

##### **4.1. Fin resocializador de la pena**

El fin resocializador de la pena en el Derecho penal peruano está consagrado en los tres cuerpos legales anteriormente aludidos.

Es evidente que este fin resocializador de la pena es una expresión que se deriva de la Constitución de 1979. En efecto, la finalidad resocializadora de la pena que le asignan los tres instrumentos jurídicos pasa por la adaptación al Estado social y democrático de Derecho que consagra la Carta Fundamental (MONTROYA VIVANCO, 2005, pág. 634). Se observa pues, que en su redacción ha sido necesario tomar en consideración el estado actual de la dogmática penal y la política-criminal, así como las más recientes doctrinas criminológicas y penitenciarias.

La finalidad resocializadora es lo que ha llevado al legislador peruano a establecer penas privativas de libertad racionales para una cierta cantidad de delitos. Esta misma finalidad resocializadora es la que ha motivado al legislador a buscar medidas sancionadoras alternativas a las penas privativas de libertad para ser aplicadas a los delincuentes de poca peligrosidad, o que

han cometido hechos delictivos de menor gravedad. Por eso, se han diseñado “nuevas formas de sanciones para los infractores que no amenacen significativamente la paz social y la seguridad colectivas”, entre las cuales se encuentran las penas pecuniarias, las inhabilitaciones, etc. En el mismo sentido, en orden a la finalidad de resocialización, se ha establecido la posibilidad de suspender o cancelar la autorización para portar o hacer uso de armas de fuego. Sobre esta cuestión, cabe precisar que la prohibición de portar o hacer uso de armas de fuego restringe un derecho fundamental, no obstante, por ello no se puede afirmar que su prohibición larga o a perpetuidad impide la resocialización.

También, el fin resocializador de la pena es lo que determina que no sean legítimas las penas que, por su propia naturaleza, impiden la resocialización. Consecuentemente, no están legitimadas ni la cadena perpetua ni la inhabilitación a perpetuidad. Por ello es incongruente que, el art. 29 del Código Penal, establezca la posibilidad de imponer pena de cadena perpetua, previsión que es incompatible con la finalidad resocializadora que se atribuye a la pena. El mismo tenor se sigue para deslegitimar la pena de muerte. No obstante, en el Art. 140 de la Constitución, se mantiene la pena de muerte para casos de traición en situación de guerra y para el terrorismo. Ahora bien, la gravedad y peligrosidad que entrañan estos supuestos no justifican la excepcionalidad. Y ello con independencia de la nula eficacia intimidatoria que pueden ejercer estas previsiones en las situaciones descritas.

A decir de LANDA ARROYO, la pena de cadena perpetua, afecta el principio reeducativo, resocializador y rehabilitador de las penas, así como, los derechos a la dignidad y libertad personal (LANDA ARROYO, 2006, pág. 103). Para este autor, la perspectiva garantista de la persona humana, en tanto, fundamento del Estado Constitucional, recuerda que la restricción de la libertad nunca puede terminar anulando su contenido esencial ni su carácter objetivo. Por ello, en opinión de LANDA ARROYO aquí siguiendo la postura

del Tribunal Constitucional cualquier sentencia condenatoria, no puede imponer una pena de carácter intemporal, como la pena de cadena perpetua, en tanto es contraria a los fines que la Constitución le asigna. En efecto, la proscripción de la pena de cadena perpetua se debe, entre otras razones, a que la dignidad de la persona humana prevista en la Constitución se concretiza en la finalidad reeducativa, rehabilitadora y resocializadora del delincuente. Esto obliga al Estado a tomar medidas adecuadas para que la persona que delinque pueda reincorporarse a la vida social. Concluye LANDA ARROYO, contrario, sería concebir a la persona que delinque como un objeto, más no como un sujeto, del ius puniendi del Estado; es decir, que la persona sentenciada no sería un fin en sí mismo, sino un medio de la acción punitiva del Estado (CASTILLO CÓRDOVA, 2007, pág. 49).

#### **4.2.Fin protector de la pena**

La función protectora que se asigna a la pena, debe interpretarse como función de protección de bienes jurídicos, tal y como se establece en el art. IV Código Penal, en relación con el principio de lesividad. Lesividad que se concreta en la exigencia de que el injusto típico se fundamente en la afectación (lesión o puesta en peligro) del bien jurídico protegido en el correspondiente delito, como contenido de la antijuricidad material. Es importante poner de manifiesto que, por lo demás, la función de protección de bienes jurídicos es al mismo tiempo función, fundamento y límite de la intervención penal. Por ello, la función de exclusiva protección de bienes jurídicos, debe ponerse en relación con la Exposición de Motivos del Código Penal, en la que se afirma que el Título Preliminar enarbola un conjunto de principios garantistas, entre los que, junto a la finalidad preventiva, se hace referencia a la “finalidad protectora de la persona humana”. Esto significa que la referencia a la protección de la persona no implica que sólo esté legitimada la protección penal de los bienes jurídicos estrictamente personales. Por el contrario, la protección de bienes jurídicos colectivos será legítima siempre que se trate de proteger bienes que constituyen valores preponderantes en la

sociedad, en tanto y en cuanto, con ello, se protege también el libre desarrollo de la personalidad de todos los ciudadanos. Lo dicho se encuentra avalado expresamente por el Art. I Código Penal, donde se establece que la prevención de delitos es un medio de proteger a la persona y a la “sociedad”.

Partiendo de que la segunda función o finalidad de la pena es la protección de bienes jurídicos (y también tomando en cuenta el fin preventivo), se infiere que el Código Penal asume una posición ecléctica sobre los fines de la pena<sup>1</sup>. Es decir, asume una postura que se inclina por fines preventivos especiales resocializadores y fines preventivos generales positivos. Esto se expresa en las diversas clase de penas con fines resocializadores que se establecen para diversos delitos. (LANDA ARROYO, 2006, pág. 104) Es decir, compatibilizan la resocialización con las finalidades preventivas de carácter general.

#### **4.3. Fin preventivo de la pena**

El tercer fin que el Código Penal le asigna a la pena es el de prevenir delitos. Así las cosas, sólo es necesario precisar que haciendo una interpretación teleológica del Art. IX del Título Preliminar del Código Penal se infiere que los fines preventivos a los que se refiere el Código Penal sustantivo al menos desde la perspectiva formal son los preventivo generales positivos y los preventivo especiales resocializadores. Con ello, el Código Penal proscribe la finalidad preventivo-general intimidatoria y la finalidad preventivo-especial inocuizadora.

Lo expuesto, significa que partiendo de que la configuración del Estado como social y democrático de Derecho es el fundamento del *ius puniendi*, las finalidades que se atribuyen a la pena de cada delito deben respetar los límites derivados de esta concepción del Estado. Las finalidades preventivas deben respetar, en todo caso, el principio de legalidad, que tiene su origen en el

---

<sup>1</sup> Sobre este punto, los fines de la pena que contempla el ordenamiento jurídico Peruano son compatibles con los planteamientos de la teoría de la Unión.

Estado de Derecho. Respeto, no tan sólo en sentido formal, de sujeción a la ley, sino material, de interpretación de la ley respetando tanto la letra como el espíritu, incluyendo la prohibición de analogía contra reo. Los principios de exclusiva protección de bienes jurídicos, utilidad de la intervención penal, subsidiariedad y fragmentariedad se derivan de la concepción del Estado como social. Ello implica que sólo esté legitimada la incriminación de conductas que sirvan para evitar las lesiones más graves de los bienes jurídicos prevalentes en la sociedad, a los que podemos denominar bienes jurídico-penales, en cuanto son merecedores de la intervención penal. La exclusiva protección de bienes jurídico-penales, en un segundo momento, limita la intervención del Derecho penal al castigo de aquellos hechos que, en el caso concreto, han lesionado o puesto en peligro un bien jurídico-penal. Es decir, el respeto al principio de lesividad o antijuricidad material. La concepción del Estado como democrático obliga a una concepción del principio de igualdad, en su vertiente material, de tratar a los iguales como iguales y a los desiguales como desiguales. Ello conlleva, así mismo, el respeto de los principios de humanidad, proporcionalidad y culpabilidad. Principio de humanidad que se manifiesta en dos vertientes: a) supresión de penas infamantes y progresiva sustitución de penas privativas de libertad por otras menos lesivas de los derechos del condenado; b) humanización del sistema de ejecución de las penas privativas de libertad, de forma que se respete la dignidad de la persona y se posibilite la resocialización.

Sin embargo, contra toda lógica, se observa que existen delitos en los que la pena tiene finalidades preventivas intimidatorias y preventivo-especiales inocularizadoras. Esto se expresa en los delitos sancionados con pena de cadena perpetua (por ejemplo, el Art. 173, el Art. 152, el Art. 200, terrorismo, tráfico ilícito de drogas, etc.) o de larga duración.



## **CAPITULO IV: LA CRIMINALIDAD PATRIMONIAL (DELITO DE ROBO AGRAVADO) EN EL PERÚ**

La criminalidad patrimonial, específicamente la relacionada con el delito de robo agravado, registra los indicadores de mayor prevalencia a nivel nacional y regional (INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL, Informe Anual, 2015, pág. 16)

El objetivo del presente capítulo es describir esa realidad y tendencia. Para ello, en primer lugar, se analizará la importancia de las estadísticas para el estudio del delito. En segundo lugar, se revisará la situación de la criminalidad patrimonial en el Perú, a partir de los registros administrativos y de las cifras de victimización que figuran en los datos de los sistemas de información criminal elaborados por la Policía Nacional del Perú- PNP, el Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI, el Ministerio Público y el Instituto Nacional Penitenciario. Finalmente, se identificarán las características de la criminalidad patrimonial asociada al robo agravado a nivel nacional, así como los costos sociales y económicos que genera.

### **1. Consideraciones generales sobre las estadísticas y la medición del crimen**

Las estadísticas y la medición del crimen tienen por función caracterizar y cuantificar el fenómeno criminal que afecta a una sociedad determinada y es fundamental para el diseño de políticas públicas orientadas a la prevención y control del delito (DAMMERT, SALAZAR, MONTT, & GONZALES, 2010, pág. 45).

La ausencia de un sistema integral de información sobre criminalidad representa un obstáculo insuperable para el diseño de una adecuada política criminal, puesto que no se cuentan con las herramientas para medir cómo se manifiesta el crimen en un espacio tempo-espacial concreto. Asimismo, el no disponer de información confiable y certera contribuye, también, a aumentar la percepción de inseguridad frente al delito.

Al respecto, cabe destacar dos aspectos. En primer lugar, es importante contar con sistemas de información y estadísticas sobre la criminalidad, principalmente, por tres razones: i) por la “cristalización de la cultura del delito en la sociedad”, que se manifiesta a través de las exigencias de la población por mayor seguridad y mayor rigorismo en las sanciones para quienes infrinjan la ley; ii) porque nos encontramos en un proceso de modernización del Estado, a lo largo del cual se presta atención a superar los obstáculos para un adecuado planeamiento estratégico que permita el diseño de políticas públicas coherentes y eficaces para la realidad en las que ellas se van a aplicar; y iii) por el creciente impacto de las problemáticas de delincuencia e inseguridad para una comunidad determinada, y que en el marco de la sociedad de la información, a través de los medios de comunicación, adquieren un papel fundamental. En resumen, contar con información de calidad es un factor necesario e indispensable para el proceso de toma de decisiones y, consiguientemente, para el diseño de políticas públicas en materia de seguridad. Como señala la Comisión de Estadística de Inglaterra, el aporte principal del registro estadístico de los sucesos criminales es el desarrollo de políticas, planes y programas, que permitan gestionar las acciones de control y prevención de la criminalidad según los niveles de gobierno, así como de brindar información a la opinión pública (Statistics Commission. (Septiembre de 2006). Report N° 30: Crime statistics: user perspectives. Londres: Statistics Commission.pág. 1).

En segundo lugar, la medición del crimen puede convertirse en un proceso complejo cuando no existe información uniforme sobre dicho fenómeno (MUJICA, "Problemas y Consideraciones Básicas sobre la medición del Delito en el Perú", 2013, pág. 161).

Especialmente, cuando los sistemas de registro de las instituciones encargadas de la prevención y el control de delito emplean metodologías distintas dependiendo de la entidad que se trate (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2013). Esto se debe, principalmente, a dos motivos: i)

ausencia de información de fuente directa; y ii) falta de herramientas o herramientas poco precisas para el registro de las incidencias delictivas (MUJICA, "Problemas y Consideraciones Básicas sobre la medición del Delito en el Perú", 2013, pág. 161) Esta falta de rigurosidad metodológica, ha generado, entre otros, tres problemas: i) la concentración de la medición del delito en el estudio evolutivo de las denuncias sobre delitos; ii) el subregistro delictivo, es decir, la existencia de una brecha entre los delitos denunciados y los delitos realmente cometidos; y iii) dificultades para la comparación entre tasas de delitos denunciados. (MUJICA, "Problemas y Consideraciones Básicas sobre la medición del Delito en el Perú", 2013, pág. 162) De los problemas mencionados, es importante profundizar en el predominio del uso de la denuncia como dato para la medición del crimen. En ese contexto cabe señalar que las denuncias registradas por las instituciones estatales, solo nos brindan una visión parcial del fenómeno delictivo, lo que implica que existe un porcentaje de subregistro compuesto por la cantidad de hechos delictivos que no se denuncian por diversos motivos, que responden a la naturaleza del delito, vínculo entre víctima y victimario o condiciones de acceso a los mecanismos, instancias o procesos de denuncia (DAMMERT, SALAZAR, MONTT, & GONZALES, 2010, págs. 48-49) En ese sentido, el número de denuncias como fuente de medición del delito tiene, a su vez y entre otras, dos limitaciones metodológicas: i) existe una cantidad de delitos que no son abarcados por el registro de denuncias, que genera un subregistro; y ii) la denuncia es un tipo de medida de capacidad del Estado, es decir, de la disponibilidad de los mecanismos estatales al servicio del ciudadano para que denuncie, pero su registro, no implica necesariamente, como se ha mencionado, una coincidencia real con la incidencia delictiva (MUJICA, "Problemas y Consideraciones Básicas sobre la medición del Delito en el Perú", 2013, págs. 164-165).

De ahí que, un aumento en el número de denuncias evidencia una mayor capacidad del Estado para registrarlas, pero no necesariamente más cantidad de delito. Por el contrario, una reducción en el número de denuncias, no significa necesariamente una reducción de la incidencia delictiva, sino una

menor capacidad del Estado para registrar los hechos criminales y para cubrir la necesidad de denuncia de la población. Esta situación produce un importante subregistro delictivo, el cual conlleva a la necesidad de diseñar mecanismos alternativos a la denuncia para reducir la cifra oculta del delito (MUJICA, "Problemas y Consideraciones Básicas sobre la medición del Delito en el Perú", 2013, pág. 167). En ese estado de cosas, el registro de los hechos criminales solo abarca una parte del fenómeno criminal. Como se ha mencionado, la denuncia implica capacidad del Estado, es decir, presencia de las instancias y mecanismos estatales al servicio de la población para el registro de hechos delictivos específicos; sin embargo, se detecta e infiere que una cantidad de delitos no se denuncian y, por lo tanto, se quedan sin registrar. A este grupo de hechos delictivos se le denomina cifra negra o cifra oculta de la criminalidad (Pérez & Benito, Estudios de los instrumentos existentes para medir la delincuencia, 2013). Como señala el PNUD: "en todas partes del mundo, la tasa de criminalidad registrada es apenas una fracción de la tasa real de la delincuencia; la diferencia entre una u otra tasa se conoce como criminalidad oscura o cifra oculta de la criminalidad" (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2013, pág. 42)

Al respecto, se habla de la pirámide invertida de la criminalidad, para evidenciar que "la institucionalidad no es capaz de abarcar la totalidad de los hechos delictuales, y en cada etapa del proceso se pierde "información", de modo que al final de la pirámide solo una porción reducida de los delitos cometidos culmina con castigo de cárcel para el autor." (DAMMERT, SALAZAR, MONTT, & GONZALES, 2010, pág. 10) La pirámide invertida de la criminalidad se encuentra compuesta por cinco niveles: i) delitos estimados, ii) delitos registrados, iii) causas ingresadas, iv) casos sentenciados, y v) reclusos. A continuación, se detallará brevemente en qué consiste cada uno de ellos. El primer nivel se encuentra compuesto por los delitos estimados y recogidos por las encuestas de victimización. En este nivel también se encuentran aquellos que componen la cifra negra. El segundo nivel se encuentra integrado por los hechos delictivos registrados por la Policía Nacional, es decir, brinda un

panorama sobre la extensión del alcance y la capacidad del Estado para cubrir el fenómeno delictivo. El tercer y cuarto nivel, se relacionan con la cantidad de acusaciones y procesos que se encuentran a cargo del Ministerio Público y del Poder Judicial. Cabe mencionar, que dentro de este nivel también se incluyen los procesos culminados con una sentencia, ya sea absolutoria o condenatoria. Por último, el quinto nivel, se encuentra integrado por el registro penitenciario de aquellas personas condenadas.

En resumen, el proceso de registro de hechos delictivos empieza con la comisión de un delito, continúa con su denuncia, sigue con la actuación del sistema de justicia penal, y finaliza con la emisión de una sentencia, que dependiendo del caso, implicará la ejecución de una sanción.

Como se ha mencionado, la información sobre el crimen proviene de una serie de fuentes distintas entre sí, que dificultan la elaboración de un diagnóstico comparativo. Por un lado, existen fuentes oficiales de estadísticas criminales, que son, entre otras: i) estadísticas policiales, ii) fiscales, iii) judiciales, y iv) penitenciarias (DAMMERT, SALAZAR, MONTT, & GONZALES, 2010, pág. 22) Todas ellas forman parte de los registros administrativos con los que cuenta el Estado para medir el crimen, pero que dan cuenta solo de una parte de la criminalidad real. No obstante, estos registros tienen limitaciones metodológicas de diseño y aplicación de los instrumentos que, como se ha destacado, impiden un registro preciso de todos los delitos.

Algunas de estas carencias son, por ejemplo, i) la falta de disponibilidad de la información oficial, ii) el subregistro de delitos, o iii) la baja calidad de la información procesada (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2013, pág. 42)

Por ello, y a fin de reducir la cifra oculta de la criminalidad, se propone que los registros administrativos se complementen con encuestas de victimización, que registran la dimensión objetiva y subjetiva del delito; en ese sentido, son “instrumentos necesarios para estimar el verdadero impacto de la delincuencia y la violencia en la población, como también para dimensionar

la envergadura del problema” (DAMMERT, SALAZAR, MONTT, & GONZALES, 2010, pág. 23). Al respecto, las encuestas de victimización tienen dos grandes objetivos: i) determinar la situación de inseguridad del país en un momento determinado y compararlo con un momento anterior para contrastar su mejora o retroceso; y ii) identificar las tendencias y características propias de las dinámicas delictivas en una realidad específica. Sin embargo, la principal limitación para el empleo de una encuesta de victimización es el elevado costo de su diseño y aplicación (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2013, pág. 42)

El Perú actualmente también cuenta con sistemas de registros administrativos del crimen similares a los descritos en esta sección. No obstante, aún no cuenta con una Encuesta Nacional de victimización, según los parámetros y criterios señalados. A continuación, se enunciarán las principales características que exhiben de cada uno de los sistemas de registro de la criminalidad que operan en el país.

## **2. Los sistemas de registro de la criminalidad en el Perú**

Como se ha precisado, en el Perú existen distintos sistemas de información estadística de la criminalidad, según la institución encargada de su registro (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2013). En ese sentido, coexisten registros administrativos correspondientes a las siguientes instituciones: i) Policía Nacional del Perú (PNP), ii) Ministerio Público, iii) Poder Judicial, y iv) Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Seguidamente, haremos una sistematización de las características esenciales que distinguen a cada uno de ellos.

En primer lugar, las estadísticas policiales recogen las denuncias de la población sobre un determinado hecho delictivo. En el Perú, la Policía Nacional se encarga de sistematizar en sus Anuarios Estadísticos, la cantidad de denuncias, según tipo delictivo y ámbito geográfico; así como también el número de accidentes de tránsito. Esta tarea se encuentra a cargo de la Dirección de Estadística de dicha institución (MINISTERIO DE JUSTICIA Y

DERECHOS HUMANOS, "La Delincuencia en el Perú:Propuesta de intervención articulada", 2013, pág. 10)

En segundo lugar, el sistema de información del Ministerio Público peruano está integrado por dos subsistemas: i) el Sistema de Información de Apoyo al Trabajo Fiscal, utilizado para casos bajo el Código de Procedimientos Penales de 1940; y ii) el Sistema de Gestión Fiscal, utilizado para casos bajo el Código Procesal Penal de 2004. Cada uno de estos subsistemas brinda información sobre los casos y denuncias al Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público, que es el órgano encargado de producir análisis y reportes estadísticos para uso fiscal (MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, "La Delincuencia en el Perú:Propuesta de intervención articulada", 2013, pág. 8)

En tercer lugar, las estadísticas judiciales se encargan de contabilizar los procesos así como las sentencias producto de los juicios a cargo del Poder Judicial. En el Perú, estas provienen de dos fuentes: i) el Registro Nacional de Condenas, y ii) la Subgerencia de Estadística. Cabe mencionar, que cada una de las fuentes mencionadas registra de forma independiente la información que procesa, es decir, cada fuente determina las variables pertinentes para su análisis. Por ejemplo, el Registro Nacional de Condenas utiliza una clasificación que se ajusta a la tipificación del Código Penal. Sin embargo, la Subgerencia de Estadística utiliza una clasificación que incluye variables adicionales (MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, "La Delincuencia en el Perú:Propuesta de intervención articulada", 2013, págs. 9-10).En cuarto lugar, la estadística penitenciaria se encarga de contabilizar y sistematizar la cantidad de personas condenadas y sus características. En el Perú, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Instituto Nacional Penitenciario, a través de su unidad estadística, se encarga de elaborar, anualmente, los Informes Estadísticos Penitenciarios (Instituto Nacional Penitenciario, 2015). En ellos, el INPE sistematiza la información vinculada con la población carcelaria en los penales, así como aquellos que purgan condena fuera de los establecimientos

penitenciarios o en régimen abierto o de medio libre (población intramuros y extramuros, respectivamente).

Asimismo, produce información relacionada con los programas de tratamiento que se aplican a los internos, así como del nivel de sobrepoblación y de hacinamiento penitenciario (MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, "La Delincuencia en el Perú:Propuesta de intervención articulada", 2013, pág. 12)Es importante mencionar que cada uno de los registros descritos recolectan información a través de formatos e instrumentos diferentes y con ellos es que construyen su propia base de datos lo cual posee también procesos de registro y criterios metodológicos independientes (MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, "La Delincuencia en el Perú:Propuesta de intervención articulada", 2013, pág. 9).

Esta falta de estandarización metodológica en el tratamiento de las cifras de la criminalidad, impiden, pues, una gestión eficiente de la información sobre la criminalidad en el Perú.

Frente a esa diversidad de fuentes de información mencionada, y conscientes de la necesidad e importancia de contar con un registro estadístico integrado moderno y eficiente de la criminalidad, el Consejo Nacional de Política Criminal (CONAPOC) creó el Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (CEIC). El CEIC está a cargo del Instituto Nacional de Estadística (INEI) y tiene como objetivo general estandarizar “procesos y variables, así como el cruce de información estadística que permita un mejor acercamiento al problema de la criminalidad” en el Perú (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2013, p. 26). En ese sentido, el CEIC elabora reportes estadísticos que brindan información sobre la situación delictiva al CONAPOC y a las demás instituciones de prevención y control del delito. Para el año 2015, el CEIC ha elaborado reportes de homicidios en el Perú (Instituto Nacional de Estadística, 2015); así como el I Censo Nacional de Población Penitenciaria (Instituto Nacional de Estadística, 2016).



Asimismo, otro esfuerzo importante para estandarizar la producción de estadísticas de la criminalidad, es la guía metodológica denominada “Clasificación Internacional de los delitos con fines estadísticos-ICCS”, aprobada en el 46 periodo de sesiones de la Comisión de Estadística de la ONU, y respaldada por la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, en su 24 sesión de mayo de 2015. La implementación de la ICCS se encuentra a cargo de la Oficina de Naciones Unidas para el control de la Droga y el Delito (UNODC) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, y tiene como objetivo proporcionar una metodología común para el conocimiento y clasificación de los fenómenos delictivos que permita orientar las políticas y acciones de intervención públicas de prevención y control de la criminalidad. También, la ICCS busca el mejoramiento en la medición, comparabilidad y análisis de las estadísticas de la delincuencia a nivel regional y global (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2015). Cabe mencionar, que en el marco de dicho proyecto, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), presentó los avances del diseño e implementación de la plataforma del Sistema Integrado de Estadísticas de la Criminalidad y la Seguridad Ciudadana, que tiene como objetivo construir una base de datos integrada con las estadísticas de todas las instituciones encargadas de la prevención y control del delito en el Perú (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2015). Cabe señalar que las ventajas de un sistema estadístico integrado de la criminalidad se aprecian en la experiencia que en dicho dominio aporta la Municipalidad de Miraflores. En este distrito limeño en base a la integración de la información estadística proveniente de la Policía Nacional y el propio gobierno local, a través de la central de alerta Miraflores, se han logrado configurar políticas idóneas que han tenido un impacto positivo en la reducción de la incidencia delictiva, así como es la percepción de seguridad en el distrito. Es más, en el año 2014 la incidencia delictiva y la percepción de inseguridad en el distrito lograron reducirse cerca de un 40% (DE BELAUNDE DE CÁRDENAS, 2015, pág. 15)

Ahora bien, más allá de las limitaciones metodológicas mencionadas en torno a los sistemas de información de la criminalidad, existe una tendencia en la tipología de los delitos que registran una mayor incidencia, entre los que destacan los delitos patrimoniales, específicamente, el robo. A continuación se describirá la prevalencia de la criminalidad patrimonial a nivel regional y local, así como sus principales características y manifestaciones.

### **3. La criminalidad patrimonial y sus principales manifestaciones**

La criminalidad patrimonial, específicamente el caso de robo, constituyen una de las seis amenazas a la seguridad ciudadana de América Latina (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2013, pág. 41). Al respecto, el PNUD resalta que “el robo es el delito que afecta de manera más frecuente a los latinoamericanos y que existe un marcado crecimiento en el número de robos que se cometen con violencia” (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2013, pág. 41) Estos poseen por tres rasgos característicos: i) el aumento del robo violento; ii) la sustracción de bienes de menor cuantía que no se denuncia; y iii) el surgimiento y expansión de mercados de objetos robados (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2013, pág. 57) Cabe mencionar, que todas estas características de la criminalidad patrimonial violenta deben tomarse en cuenta, insoslayablemente, para el rediseño y la reformulación de estrategias y medidas idóneas para su control y prevención.

Según las fuentes disponibles es notorio que las tasas de robo en América Latina se han incrementado en los últimos diez años la tasa de robos para Latinoamérica en el año 2005 fue de 302.1 por 100 mil habitantes. Para ese año, Argentina registró la tasa más alta, 907.7 robos por 100 mil habitantes; y Costa Rica (501.1), México (470.1), Chile (403), Nicaragua (397.4) y Ecuador (346.7) superaron el promedio regional.

Finalmente, en el año 2014, la tasa de robos para Latinoamérica ascendió a 406.6 por 100 mil habitantes, es decir, creció en 96.3 puntos. Según la información disponible para ese año, nuevamente, Costa Rica

superó el promedio regional y registró 1095 robos por 100 mil habitantes. Chile (598.7), Ecuador (570.6) y Uruguay (542.8) también registraron tasas superiores al promedio latinoamericano.

Si bien los datos mencionados son altos, estos solo muestran aquellos consignados en los registros administrativos. En ese sentido, se debe recordar que este tipo de datos no miden cantidad de delitos, sino capacidad del Estado para registrarlos. Por lo tanto, y para reducir la cifra oculta, se sugiere complementar el panorama regional con el porcentaje de victimización que, como se ha mencionado, permite recoger información sobre los hechos no denunciados. (DAMMERT, SALAZAR, MONTT, & GONZALES, 2010, pág. 24)

Desde este enfoque, se aprecia que, el porcentaje de victimización por robo en Latinoamérica para el año 2014 ascendió a 49.4% (Carrión, Zárate, & Zechmeister, 2015). Según el Barómetro de las Américas, Argentina registró el porcentaje más alto de victimización a nivel regional con un 71.8%, seguido de otros países que superaron el 60% y el 50%. Cabe mencionar, que coincidentemente, algunos de ellos registran las tasas más altas de robos por 100 mil habitantes, como son los casos de Chile, Colombia, Perú y Uruguay.

Ahora bien, el panorama latinoamericano de la criminalidad patrimonial no resulta ajeno a la realidad peruana. Si bien las tasas de robo en Perú están por debajo del promedio latinoamericano, cabe destacar su tendencia al incremento en los últimos años. En ese sentido, la orientación de alta prevalencia de la criminalidad patrimonial en la región, aunque estable, también se manifiesta en el Perú, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro (Policía Nacional del Perú, 2015, pág. 16).

A pesar, pues, de los problemas metodológicos que afectan a los sistemas de registros administrativos en el Perú, el delito de robo tanto en su modalidad simple y agravada representan un alto nivel de ocurrencia (INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL, [http://www.seguridadidl.org.pe/sites/default/files/INFORME%20ANUAL%202015\\_%20IDL-SC.pdf](http://www.seguridadidl.org.pe/sites/default/files/INFORME%20ANUAL%202015_%20IDL-SC.pdf), 2015, pág. 13).

Según los Anuarios Estadísticos de la Policía Nacional del Perú, la tasa de denuncia por 100 mil habitantes del delito mencionado es alta y mantiene una tendencia creciente y sostenida (Policía Nacional del Perú, 2015, pág. 17).

La tasa de robos creció de forma continua durante el periodo comprendido entre los años 2000 a 2005. Posteriormente, si bien en el año 2007, disminuyó en 20.3 puntos; a partir del año 2008, se registró un aumento progresivo y continuo de la tasa de robos, que, para el año 2015, alcanzó a 266.3 casos por 100 mil habitantes.

Por otro lado, según la información disponible del Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público, las incidencias contra el patrimonio, específicamente en el caso de robo registrados, representan un porcentaje importante en la estadística fiscal. Cabe mencionar que los casos registrados por este delito, supera el 60% del total de las incidencias contra el patrimonio registradas (INFORMÁTICA, 2015, págs. 597-600)

Al respecto, para el año 2009, los registros por robo representaron el 26.27% (23 868 casos). Sin embargo, que en el año 2014, tal ilícito representaron un 27.30% (39 534 casos) y 38.05% (60 489 casos), de las incidencias contra el patrimonio registradas. Cabe señalar que en el año 2014, que de un total de 39 534 robos, los distritos fiscales de Ica (12.70%), La Libertad (11.20%) y Lima (10.78%) anotaron los mayores porcentajes.

Adicionalmente, cabe mencionar que, los detenidos y sentenciados por delitos contra el patrimonio, según el Registro de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de Libertad Efectiva (RENADESPPLE), también representan un porcentaje importante del total de detenidos. Por ejemplo, en el año 2013, se registraron 57 050 detenciones, de los cuales, el 35.06% (20 005) estaba por delitos contra el patrimonio; de los cuales el 50.94% estaba por robo. Por su parte, en el año 2014, se registraron 75 280 detenciones, de los cuales, el 31.31% (23 567) lo fue por delitos contra el patrimonio; de los cuales el 38.69% estaba por robo, que en el caso concreto, están involucrando solo a quienes

fueron detenidos y condenados a pena privativa de libertad efectiva por el delito de robo.

#### **4. Los costos de la criminalidad patrimonial**

Los costos de la criminalidad pueden ser clasificados desde diferentes perspectivas según se incide en el actor afectado; en el ámbito temporal en que se ocasiona la afectación, y entorno al tipo específico de afectación. Al respecto, cabe destacar de estas tres clasificaciones, que se interrelacionan entre sí y coinciden en distintas dimensiones del desarrollo de la vida en sociedad; (Corporación Andina de Fomento, 2014; PNUD, 2013); Organización de Estados Americanos, 2008). La primera es respecto del sujeto afectado, pues el crimen y el delito generan cambios en la dinámica cotidiana de las personas y de la sociedad en su conjunto. Según esta clasificación, los costos de la criminalidad impactan en tres actores: i) el ciudadano; ii) el tejido social, y iii) las instituciones democráticas. En primer lugar, el crimen puede impactar en la vida cotidiana del ciudadano, ya que implica un condicionamiento de sus conductas y una restricción de sus libertades para evitar ser víctima de un delito (PNUD, 2013, pp. 95-96). Por ejemplo, evitar salir de noche o contratar cámaras de vigilancia privada. Al respecto, según la Encuesta CAF 2013, las personas encuestadas habrían implementado las siguientes medidas para evitar ser víctimas de un delito: instalación de rejas y cerraduras de seguridad en sus viviendas (24%), adquisición de perros guardianes (17%) y la instalación de alarmas y cámaras de vigilancia (12%) (FOMENTO, 2014, pág. 34). En segundo lugar, el crimen también genera costos para el tejido social, es decir, para la sociedad en su conjunto, específicamente, en el uso de los espacios públicos y en la colaboración y cooperación entre los ciudadanos (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2013, págs. 97-99). Por ejemplo, con la instalación de rejas o tranqueras que limitan el libre tránsito por la vía pública. Esto ha dado lugar a la consolidación de la “arquitectura del miedo”, basada en la planificación y edificación de la ciudad a partir de la protección contra terceros

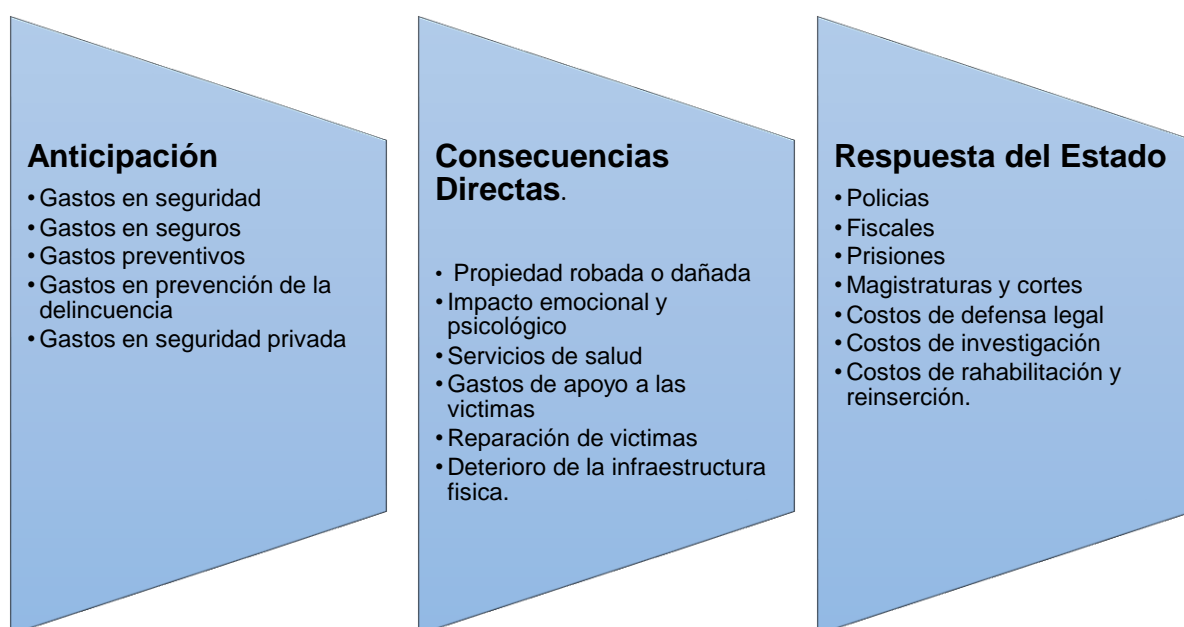
ajenos a su entorno. A nivel de Lima Metropolitana, el Observatorio Lima Cómo Vamos identifica para el año 2014 que el 44.9% de la población encuestada estaría de acuerdo con colocar rejas o tranqueras y restringir el paso a extraños por sus calles. Asimismo, destaca el estudio realizado en torno al uso de las rejas en el barrio La Huerta, ubicado en el distrito del Rímac en Lima. Dicha investigación identifica una mejora en la percepción de seguridad de los vecinos, luego de la instalación de rejas de seguridad en la vía pública, aunque no necesariamente sobre la disminución en la frecuencia del crimen (BONILLA, 2015, pág. 76)

Finalmente, en tercer lugar, la criminalidad genera costos para las instituciones democráticas, sobre todo, para el ejercicio de la gobernabilidad y la vigencia del Estado de Derecho (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2013, págs. 99-100) Al respecto, “la inseguridad pone bajo tensión el respaldo de la ciudadanía al Estado de Derecho, con la demanda de respuestas rápidas y efectivas, y la aplicación de medidas rigurosas contra los delincuentes, aunque estas se traduzcan en restricciones de los derechos, el incremento de atribuciones policiales y, en algunos casos, violaciones a los derechos humanos” (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2013, pág. 100), como lo demuestran campañas como “Chapa tu choro” la continua prórroga del Estado de emergencia en el Callao (El Comercio, 2016) y recientes denuncias sobre “escuadrones de la muerte” en la Policía Nacional (BRICEÑO, 2016). Una segunda clasificación, basada en el método contable, divide los costos de la criminalidad en función del momento en el que se ocasionan: i) costos anticipados, ii) costos como consecuencia del delito, y iii) costos de la respuesta al delito. En primer lugar, los costos anticipados consideran aquellos destinados a la prevención de la violencia, como el patrullaje motorizado en un distrito, o la conformación de juntas vecinales que patrullen los vecindarios.

En segundo lugar, los costos que se generan como consecuencia del delito, como la pérdida del bien sustraído, o el tiempo requerido para

interponer una denuncia. En tercer lugar, los costos de respuesta al delito, hace referencia a aquellos en los que incurre el Estado para sancionar a los responsables, la denominada economía del proceso, que comprende desde el registro de la denuncia, la investigación y captura del delincuente, así como los vinculados al proceso penal y a la reclusión en los establecimientos penitenciarios (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2013, págs. 101-103) Al respecto, una investigación sobre la estimación de los costos de delitos contra personas y la propiedad en países latinoamericanos, identificó que los costos asociados a las consecuencias directas del delito son los más altos; entre los que destacan los casos de Honduras y Paraguay, donde este tipo de costo ascendió a 8.01% y 6.26% del PBI, respectivamente, para el año 2010.

### **Costos de la criminalidad, según el método contable**



Una tercera clasificación, en costos directos e indirectos, incluye las clasificaciones mencionadas anteriormente, pero hace hincapié en las formas de medir y estimar los costos de la criminalidad en las diferentes esferas de la vida en sociedad (Corporación Andina de Fomento, 2014, pp. 33-35). Los

costos directos hacen referencia a las afectaciones sobre la integridad de la persona, así como sobre las acciones del Estado para la prevención y control del delito (Olavarría, Costos del delito según el método contable: un estudio comparado de los casos de Chile, Costa Rica, Honduras, Paraguay y Uruguay, 2015). Al respecto, estos costos pueden medirse a través de la suma de los gastos del cuidado y atención de salud de la persona afectada; así como a partir del valor del bien perdido o sustraído como consecuencia del delito (FOMENTO, 2014, pág. 33).

Adicionalmente, se pueden utilizar las técnicas de valuación contingente y la de precios hedónicos. La primera técnica, permite estimar el monto del precio de la seguridad que los ciudadanos estén dispuestos a pagar. Por ejemplo, una investigación realizada en Estados Unidos, destaca que la población estaría dispuesta a desembolsar entre \$ 100 y \$ 150 dólares por año para lograr una reducción del 10% en la ocurrencia de delitos, lo que implica “una disposición a pagar con el fin de prevenir el crimen de aproximadamente \$ 25 000 dólares por robo y \$ 70 000 por asaltos graves” (JAITMAN, 2015, pág. 4).

Por su parte, la segunda técnica, se utiliza para estimar el impacto de la inseguridad sobre el valor de los bienes. Esta técnica fue aplicada en una investigación realizada en Colombia, donde se identifica que las familias con recursos económicos más altos, preferirían pagar más por predios ubicados en barrios más seguros. Por otro lado, los costos indirectos se refieren a los efectos del crimen sobre las actitudes de las personas, en sus esferas laboral y económica, así como en la falta de confianza en las instituciones del Estado (OLIVARRIA GAMBI, 2015, pág. 55). Cabe mencionar, que la evidencia para la estimación de los costos indirectos aún es escasa por la complejidad y especificidad de su medición; sin embargo, en una investigación realizada en Colombia, se identificó que “el secuestro de empresarios o gerentes sí impacta negativamente la inversión de las firmas; no solo de aquellas directamente afectadas por los secuestros, sino también de las que se



localizan en la misma zona” (FOMENTO, 2014, pág. 37) En cuanto a las relaciones de confianza interpersonal, la Encuesta CAF identificó que el 32% de las personas con percepción de inseguridad desconfiaban de los demás, y que el 11% tenía un trato más hostil con extraños (Corporación Andina de Fomento, 2014, p. 37). Por su parte, en torno a la confianza en las instituciones públicas, las personas víctimas de robos en la vía pública tendrían menos confianza en la policía y en el Poder Judicial como instituciones a las que podrían acudir para solicitar ayuda frente al hecho delictivo del cual fueron víctimas. (CORBACHO, PHILIPP, & RUIZ VEGA, 2015, pág. 412)

No obstante, si bien existen en Latinoamérica investigaciones sobre el costo económico de la criminalidad en general, y en algunos casos específicamente de la criminalidad patrimonial; aún persiste la necesidad de contar con investigaciones empíricas que permitan evidenciar los efectos de la criminalidad en la sociedad peruana y su impacto diferenciado según el tipo de delito y el perfil de la víctima. Al respecto, es de destacar que una aproximación a esta materia ha sido el estudio efectuado por el Laboratorio de Criminología de la Pontificia Universidad Católica del Perú sobre el impacto del robo en la vía pública en la economía doméstica de Lima Metropolitana (MUJICA, LÓPEZ, & PRADO, "El Impacto del robo y el Hurto en la Economía domestica: Un estudios Exploratory sobre los datos de Lima Metropolitana", 2015, pág. 138)

En este estudio, los autores calculan el impacto económico diferenciado del robo en base al valor del objeto robado, al nivel socioeconómico de la víctima y al tiempo que se demoraría en recuperar el bien robado.

Además, la citada investigación identifica que el costo promedio de los objetos robados en Lima Metropolitana para el año 2011 osciló entre S/. 200 y S/. 580 soles. Este promedio generaría un impacto diferente en las economías domésticas de las víctimas, así como en el tiempo de recuperación del bien, según su nivel socioeconómico. Por ejemplo, si la víctima perteneciera al nivel socioeconómico A, con un ingreso promedio de S/. 10

480 soles, el impacto del robo sobre su economía doméstica oscilaría entre 1.9 % y 5.5%; y se demoraría como máximo un mes en recuperar el bien sustraído. Sin embargo, si la víctima perteneciera al nivel socioeconómico E, cuyo ingreso mensual promedio es de S/. 950 soles, el robo del bien sustraído representaría un impacto promedio entre 21.1% y 61.1% a su economía doméstica; y la recuperación del objeto tardía entre 4 a 11 meses, dependiendo del valor del bien. Cabe agregar, que en este último caso, el delito genera costos adicionales en supuestos en los que, por ejemplo, el objeto sustraído constituya una herramienta de trabajo o de contacto para ofertas laborales como los documentos, computadoras o celulares (MUJICA, LÓPEZ, & PRADO, "El Impacto del robo y el Hurto en la Economía domestica: Un estudios Exploratorio sobre los datos de Lima Metropolitana", 2015, págs. 139-142) En este capítulo, se ha pretendido demostrar, que más allá de las limitaciones metodológicas de los registros administrativos y la disponibilidad de la información de las encuestas de victimización, la prevalencia constante de la criminalidad patrimonial en el Perú; así como de los costos directos e indirectos que ella genera. Ahora bien, frente a este escenario, el Estado peruano dictó, entre otras, una serie de disposiciones normativas con el propósito de desincentivar la comisión de los delitos mencionados y evitar la lesión a bienes jurídicos trascendentes para la población como lo son el patrimonio y la integridad personal.

## **CAPÍTULO V: LA POLÍTICA CRIMINAL PERUANA FRENTE AL DELITO DE ROBO AGRAVADO EN EL CÓDIGO PENAL, CONCEPTO, DESCRIPCIÓN TÍPICA Y SUS DISTINTAS MODIFICACIONES**

Como se ha sostenido en el capítulo anterior, la criminalidad patrimonial asociada al delito de robo agravado representa un porcentaje importante de la criminalidad nacional. Frente a esos indicadores, una de las estrategias constantes del Estado peruano ha sido la aprobación de normas penales con el objetivo de prevenir y reducir la comisión de tales hechos punibles. El presente capítulo está dedicado a identificar y caracterizar la tendencia político-criminal prevalente en el Estado peruano para hacer frente al delito de robo en la última década, que como ya se ha mencionado, fue el periodo con la mayor cantidad de modificaciones legales en torno a dicho delito (MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, "La Delincuencia en el Perú: Propuesta de intervención articulada", 2013, pág. 29).

Para ello, en primer lugar se describirán aspectos generales sobre el delito de robo, previstos en los artículos 188° y 189° del Código penal de 1991. En segundo lugar, se detallarán también las modificaciones legislativas realizadas a las modalidades simples y agravadas en el delito mencionado en la última década. En ese contexto, se analizarán los proyectos de ley que fundamentaron las leyes modificatorias, en función de su justificación y exposición de motivos. De igual forma, se describirán sus características y se determinará la tendencia político-criminal a la que corresponden. Finalmente, se examinará si la tendencia identificada se mantiene en el proyecto de nuevo Código penal 2015-2016.

### **1. Consideraciones dogmáticas sobre el delito de robo**

Los delitos contra el patrimonio se encuentran regulados en el Título V del Libro Segundo del Código Penal peruano de 1991 y que comprende los siguientes actos criminalizados: i) Hurto (capítulo I), ii) Robo (Capítulo II), iii) Abigeato (capítulo II-A), iv)

Apropiación ilícita (capítulo III), v) Receptación (capítulo IV), vi) Estafa y otras defraudaciones (Capítulo V), vii) Fraude en la administración de personas jurídicas (capítulo VI), viii) Extorsión (capítulo VII), ix) usurpación (capítulo VIII) y x) Daños (capítulo IX). Cabe mencionar, que anteriormente los delitos informáticos también se encontraban regulados en este capítulo. Sin embargo, fueron derogados mediante la ley 30096 del 22 de octubre de 2013.

Entre los delitos mencionados, el robo mantiene una presencia importante en los registros de la criminalidad patrimonial de nuestro país. Como se ha indicado en el capítulo anterior, las estadísticas oficiales y encuestas de victimización indican que este delito se presenta con mayor frecuencia y el que influye de manera decisiva en la percepción de inseguridad que experimentan los ciudadanos.

Ahora bien, según la dogmática penal, el bien jurídico protegido en estos delitos es el patrimonio. Al respecto, en la doctrina se ha identificado la existencia de cuatro concepciones respecto a su noción y naturaleza como bien jurídico tutelado (Salinas, 2015, p. 946): i) la concepción económica, que considera al patrimonio como el conjunto de bienes con una valoración económica que se encuentran bajo la posesión de una persona sin importar su origen lícito o ilícito; ii) la concepción jurídica, que concibe el bien jurídico de estos delitos como el conjunto de valores conocidos como derechos y obligaciones subjetivas reconocidos por el Derecho; iii) la concepción personal, que plantea que el patrimonio incluye el conjunto de bienes, susceptibles de valoración económica y protegidos por el Derecho, que permiten el desarrollo de la personalidad de quien los ostenta; y, finalmente, la concepción mixta, que sostiene que el patrimonio es la suma de valores económicos, bajo protección del ordenamiento jurídico y puestos a disposición de una persona (SALINAS SICCHA, 2015, págs. 946-947)

Nuestro Código Penal de 1991 acoge la concepción mixta de patrimonio. En tal sentido, como señala Roy Freyre, el patrimonio se concibe como “el conjunto de bienes muebles e inmuebles susceptibles de valoración

económica, de utilidad primordial o superflua, sobre los cuales una persona física, o los representantes de una persona jurídica, tienen la garantía estatal de ejercer todos y cada uno de los derechos inherentes a la propiedad, sin más limitaciones que las establecidas en favor de terceros por la ley, sean o no acreedores” (ROY FREYRE, 1983, pág. 34).

En torno a la tipificación del delito de robo, el Código penal de 1991 prevé un tipo básico para cada delito (artículo 189°) y un catálogo de circunstancias agravantes específicas. En cuanto a las modalidades básicas, “apoderamiento ilegítimo de un bien mueble total o parcialmente ajeno, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra” Es decir, el comportamiento típico se configura con el acto de apoderamiento de un bien mueble mediante su sustracción por parte del agente. Esto es, a través de una acción del sujeto activo que le permite desplazar el bien del lugar donde se encuentra e ingresarlo a su esfera de dominio.

Como afirma Roy Freyre respecto a este delito: “hay que apoderarse, para apoderarse hay que sustraer, y para sustraer es necesario sacar la cosa mueble del ámbito de vigilancia ajena donde se encontraba, para luego colocarla ilegítimamente, con ánimo de obtener provecho para sí o para otro, dentro de la propia esfera de disposición del agente” (ROY FREYRE, 1983, pág. 42).

## **2. Delito de robo (ARTICULO188°), según Código Penal peruano 1991**

El que se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de ocho años.

En el mismo sentido, la Sentencia Plenaria No 1-2005/DJ-301-A, establece que el apoderamiento es también el “elemento central” para

diferenciar entre la consumación y tentativa del delito de robo. Según esta sentencia, la consumación se configurará cuando el agente coloque el bien bajo su esfera de dominio y tenga sobre él la disponibilidad potencial, es decir, la posibilidad de realizar actos de disposición sobre el bien sustraído.

En lo que concierne al “bien mueble total o parcialmente ajeno” que es objeto de sustracción, este ha de entenderse en sentido amplio, es decir, “no solo los objetos con existencia corporal, sino también a los elementos no corpóreos, pero con las características de ser medidos tales como la energía eléctrica, el gas, el agua y cualquier otro elemento que tenga valor económico, así como el espectro electromagnético” (SALINAS SICCHA, 2015, pág. 961) En ese sentido, se considera bien mueble a aquellos valores u objetos, tanto materiales como inmateriales, susceptibles de ser extraídos o transportados, es decir, que sean trasladables y que sirvan de objeto a las relaciones jurídicas; que posean una utilidad y que sean susceptibles de valoración económica.

Otro elemento típico del delito del robo como la mayoría de los delitos patrimoniales del Código Penal, son de carácter doloso, y tienen una finalidad lucrativa. Este elemento subjetivo “constituye la finalidad que persigue el agente, esto es, el sujeto activo actúa desde el inicio con la finalidad última de obtener un provecho, beneficio, utilidad o ventaja indebida” (SALINAS SICCHA, 2015, pág. 967)

Cabe mencionar, que el delito de robo se caracteriza: i) el empleo de violencia (vis absoluta) o amenaza (vis compulsiva) en el robo, lo que lo convierte en un delito pluriofensivo, asimismo el delito de robo es suficiente que el bien sustraído tenga alguna valoración económica; y iii) la pena conminada para este delito, siendo más grave en los supuestos de robo (SALINAS SICCHA, 2015, pág. 1016).

Por su parte, en cuanto a las modalidades agravadas, históricamente el delito de robo cuenta con un catálogo de circunstancias agravantes específicas en el artículo 189°; (ROY FREYRE, 1983, pág. 67) Este tipo de

circunstancias, como ha descrito en la doctrina, hace referencia a aquellas condiciones o indicadores que circundan la realización de un delito. Su función es posibilitar el incremento o disminución de la pena que corresponde aplicar al autor o partícipe del hecho punible en función a determinadas características consideradas relevantes. De ahí que se consideren que son elementos importantes para aumentar o reducir el desvalor de la acción cometida (antijuricidad del hecho) o identificar la intensidad del reproche que alcanza al autor (culpabilidad del agente) (PRADO SALDARRIAGA, "Consecuencias Jurídicas del delito Giro Punitivo y Marco Legal", 2016, págs. 203-205). Cabe mencionar que las circunstancias agravantes específicas reguladas para operar con el delito de robo son de tres grados o niveles, es decir, se agrupan en función de diferentes estándares de penalidad conminada, según el tipo de agravante consignada (PRADO SALDARRIAGA, "Consecuencias Jurídicas del delito Giro Punitivo y Marco Legal", 2016, pág. 234). Al respecto, estas corresponden a las siguientes categorías: i) lugar de comisión, ii) modo de ejecución, iii) presencia de condiciones de peligrosidad social, iv) pluralidad de agentes, v) utilización de medios específicos, vi) características del sujeto activo, vii) características personales de la víctima; y viii) aquellas vinculadas al desvalor de la acción o del resultado. La redacción actual de las modalidades agravadas del delito de robo (artículo 189º) cuenta con 13 circunstancias agravantes; las mismas que se consignan a continuación:

### **3. Circunstancias agravantes del robo, según Código Penal peruano de 1991 Robo con agravantes (art. 189)**

La pena será no menor de doce ni mayor de veinte años si el robo es cometido:

1. En inmueble habitado.
2. Durante la noche o en lugar desolado.
3. A mano armada.
4. Con el concurso de dos o más personas.

5. En cualquier medio de locomoción de transporte público o privado de pasajeros o de carga, terminales terrestres, ferroviarios, lacustres y fluviales, puertos, aeropuertos, restaurantes y afines, establecimientos de hospedaje y lugares de alojamiento, áreas naturales protegidas, fuentes de agua minero-medicinales con fines turísticos, bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la Nación y museos.
6. Fingiendo ser autoridad o servidor público o trabajador del sector privado o mostrando mandamiento falso de autoridad.
7. En agravio de menores de edad, personas con discapacidad, mujeres en estado de gravidez o adulto mayor.
8. Sobre vehículo automotor, sus autopartes o accesorios.

La pena será no menor de veinte ni mayor de treinta años si el robo es cometido:

1. Cuando se cause lesiones a la integridad física o mental de la víctima.
2. Con abuso de la incapacidad física o mental de la víctima o mediante el empleo de drogas, insumos químicos o fármacos contra la víctima.
3. Colocando a la víctima o a su familia en grave situación económica.
4. Sobre bienes de valor científico o que integren el patrimonio cultural de la Nación.

Ahora bien, desde la aprobación del Código Penal de 1991, el delito descrito ha sido sujeto de una serie de reformulaciones legislativas, con la finalidad de responder a los requerimientos sociales de la población y que se evaluarán a continuación.

#### **4. Modificaciones legislativas del tipo de robo**

El proceso de reforma del Código Penal de 1924, se cristalizó con la promulgación del Código Penal de 1991, que tuvo como objetivo esencial



“promover un sistema de delitos y penas razonable y adecuado a los principios garantistas de legalidad y proporcionalidad, procurando, con ello, la afirmación de un Estado social y democrático de Derecho” (PRADO SALDARRIAGA, "Todo sobre el Código Penal", 1966, pág. 11). En tal sentido, entre otras medidas, unificó y sistematizó todas las disposiciones penales en un solo texto para evitar la existencia de leyes penales dispersas fuera del Código Penal, como fue el caso de los delitos de contrabando, regulados en la ley 24939. Asimismo, incorporó un catálogo de penas alternativas a la pena privativa de libertad, como la prestación de servicios a la comunidad o la pena de multa; excluyó la pena privativa de libertad indeterminada (internamiento) y los supuestos de reincidencia y habitualidad (MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, "Código Penal", 2016, págs. 10-11).

Sin embargo, al poco tiempo de la entrada en vigencia del Código Penal de 1991, y teniendo como contexto la presencia activa del terrorismo, la inflación económica y el autogolpe de Estado de 1992, surgió la denominada contrarreforma, que se enfocó en retomar postulados político-criminales represivos y sobrecriminalizadores. Así, como señala Prado: En menos de un año de vigencia, la ecuanimidad de los tipos penales y de las penas de la Parte General y de la Parte Especial del novísimo Código Penal, fueron objeto de continuas y reiteradas modificaciones que consolidaron rápidamente y sin mayores escrúpulos una política criminal de emergencia, que impuso como praxis el uso coyuntural y simbólico de las decisiones de criminalización (MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, "Código Penal", 2016, pág. 10) Esta tendencia rigorista, ha generado que para el año 2016, se hayan propuesto 591 modificaciones en los 25 años de vigencia del Código Penal; que, además, a nivel legislativo, la mayoría de ellas hayan sido inspiradas en la presentación de 1668 proyectos de reforma de diversos artículos del Código Penal a lo largo de cinco legislaturas (1995-2016). Además, el uso exclusivo y recurrente de la ley penal como único mecanismo para incidir en el control y prevención del fenómeno criminal evidencia la desnaturalización de la reforma penal, y su uso como una manifestación de mala técnica legislativa, que

“genera, de forma refleja, inseguridad jurídica en los destinatarios de la norma, y pérdida de credibilidad en la eficacia de esa política criminal que aparentemente navega a la deriva” (MESTRE DELGADO, 2004, pág. 8)

### **Reformas y proyectos de reforma al Código Penal de 1991, periodo 1991-2016**

	1990-1995	1995-2000	2000-2001	2001-2006	2006-2011	2011-2016
<b>MODIFICACIONES</b>	<b>78</b>	<b>92</b>	<b>19</b>	<b>137</b>	<b>141</b>	<b>124</b>
<b>PROYECTOS DE LEY PRESENTADOS</b>	<b>No disponible</b>	<b>267</b>	<b>54</b>	<b>826</b>	<b>204</b>	<b>317</b>
ADAPTADO DE: Congreso de la República (1995-2016), Sistema Peruano de Información Jurídica.						

Precisamente, uno de los mejores ejemplos de dicha orientación político-criminal sobrecriminalizadora, se encuentra en la regulación del delito de robo y en sus respectivas modificaciones. En efecto, desde la promulgación del Código Penal de 1991, este delito ha sido modificado en 19 ocasiones, siendo las modalidades agravadas las más reformadas. El periodo legislativo en el que se produjo la mayor cantidad de cambio fue el comprendido entre los años 2006-2011, con 09 modificaciones a través de la publicación de los siguientes instrumentos normativos: i) el Decreto Legislativo 1084, ii) Ley 28982, iii) Ley 29407, y iv) Ley 29583, que se describirán a continuación. Cabe mencionar, que durante los años 2006 – 2011 no se produjeron modificaciones en el tipo penal de robo (artículo 188°). Sin embargo, desde su redacción original, este delito fue modificado en tres ocasiones, mediante i) la ley 26319, publicada el 01 de junio de 1994, ii) el decreto legislativo 896, publicado el 24 de mayo de 1998, y iii) la ley 27472, publicada el 05 de junio de 2001. Las dos primeras modificaciones plantearon decisiones de sobrecriminalización a través del incremento punitivo de la pena

conminada; mientras que la tercera optó por una decisión de despenalización, a través de la reducción del rango punitivo previsto para dicho delito.

Por su parte, el delito de robo con agravantes (artículo 189°) fue objeto de cinco modificaciones durante el periodo de análisis, efectuadas, todas ellas, mediante la publicación de dos leyes. La primera de estas reformas, fue realizada por la ley 28982, publicada el 03 de marzo de 2007, y estuvo basada en el proyecto de ley 0032/2006-CR, aprobada el 15 de febrero de 2007. Concretamente, la modificación consistió en la incorporación de una circunstancia agravante específica de primer grado, asociada a nuevos lugares de comisión del delito, que complementaba lo estipulado en el inciso 5 del primer párrafo del artículo en mención: terminales terrestres, ferroviarios, lacustres y fluviales, puertos, aeropuertos, restaurantes y afines, establecimientos de hospedaje y lugares de alojamiento, áreas naturales protegidas, fuentes de agua minero-medicinales con fines turísticos, bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la Nación y museos.

Por su parte, las cuatro modificaciones adicionales fueron realizadas mediante la ley 29407, Concretamente, las modificaciones introducidas por este dispositivo normativo para el robo con agravantes fueron sustentadas en los proyectos de ley 3240/2009-CR y 0174/2006- CR, cuyas iniciativas fueron recogidas en el texto sustitutorio del 10 de setiembre de 2009, que previó cuatro modificaciones. La primera fue el incremento del mínimo de pena para las circunstancias agravantes específicas de primer grado a 12 años de pena privativa de libertad.

La segunda y tercera modificación, fueron la incorporación de dos circunstancias agravantes específicas de primer grado vinculadas con i) las características de la víctima del delito: discapacitados, mujeres en estado de gravidez; y ii) el objeto sobre el cual puede recaer el delito: sobre vehículo automotor. Finalmente, la cuarta modificación fue el incremento del máximo de pena para las circunstancias agravantes específicas de segundo grado a

30 años de pena privativa de libertad. Todas las modificaciones descritas se encuentran sistematizadas a continuación.

### **Modificaciones a las modalidades simple y agravadas del delito de robo, 2006-2011**

Delito	Ley	Reforma
ROBO CON AGRAVANTES (ART. 189°)	LEY 28982(03 de Marzo de 2007)	Incorporación de circunstancias agravantes específica de primer grado, vinculada al lugar de comisión del delito.
ROBO CON AGRAVANTES (ART. 189°)	Ley 29407(18 de setiembre de 2009)	Incremento del mínimo de pena para las circunstancias agravantes específicas de primer grado: 12 años de pena privativa de la libertad.
ROBO CON AGRAVANTES (ART. 189°)	Ley 29407(18 de setiembre de 2009)	Incorporación de circunstancias agravante específica de primer grado, vinculada a las características de la víctima del delito.
ROBO CON AGRAVANTES (ART. 189°)	Ley 29407(18 de setiembre de 2009)	Incorporación de la circunstancia agravante específica de primer grado, vinculada al objeto sobre el cual recae el delito.
ROBO CON AGRAVANTES (ART. 189°)	Ley 29407(18 de setiembre de 2009)	Incremento del mínimo de pena para las circunstancias agravantes específicas de segundo grado: 30 años de pena privativa de la libertad.

### **5. Tendencia de la política criminal aplicada al delito de robo.**

El análisis de los proyectos de ley y de las leyes que inspiraron las reformas reseñadas a los artículos 189°, durante la última década, ha permitido identificar la presencia de las siguientes características: i) uso recurrente del endurecimiento punitivo, a través de decisiones de sobrecriminalización; ii) prevalencia de una tendencia securitaria; iii) predominio de la lógica de giro punitivo y de “gobierno a través del delito” y iv) falencias en las etapas prelegislativa y legislativa de elaboración de la ley penal. A continuación, se describirán cada una de ellas.

En primer lugar, la política criminal peruana aplicada al delito de robo en el periodo de estudio se concentró en la aprobación de decisiones sobrecriminalizadoras, generando un endurecimiento punitivo permanente. Las modificaciones realizadas pueden clasificarse en dos grandes tipos de estas decisiones: i) incorporación de circunstancias agravantes específicas, de diverso grado; e ii) incremento de penas. Al respecto, cabe mencionar, que los artículos con mayores reformas, fueron las modalidades agravadas del

delito de robo. En ese contexto, de las nueve modificaciones realizadas en el lapso de cinco años el artículo 189<sup>o</sup>, siete de ellas estuvieron vinculadas a la incorporación de nuevas circunstancias agravantes de primer y segundo grado, predominando la incorporación de dicho delito. Es de destacar que muchas de las agravantes específicas incorporadas en el artículo mencionado, también es considerado como circunstancia agravante genérica que figuran en el artículo 46<sup>o</sup> del Código Penal y que producen una duplicidad regulativa de circunstancias, pero que por principio de especialidad, terminan siendo aplicadas.

En segundo lugar, existe una prevalencia de la tendencia securitaria, que se evidencia tanto en la fundamentación de los proyectos de ley que originaron las reformas, así como de los argumentos esgrimidos durante las sesiones de debates en el Congreso previas a la aprobación de la ley modificatoria. Así, la mayoría de estos giran en torno a tres temas: i) la prevalencia de un clima inseguridad en el país, ii) benignidad de las normas penales, que justifican su incremento, y iii) revalorización de la prisión, tal como lo sustentan las siguientes afirmaciones:

Esos, señor presidente, son básicamente los objetivos de la norma (sobre reformas a la ley 29470) que creo responden a una coyuntura particular de inseguridad ciudadana, que para todos los peruanos ha pasado a ser el puesto número uno de preocupación, ha superado en las encuestas a la pobreza y hoy se ha generalizado como el principal problema e impacta en la vida diaria de todos los ciudadanos (Diario de debates. Sesión 16 de setiembre 2007, p. 57).

La incorporación de circunstancias expresas de robo de vehículos automotores en los tipo penal de robo agravado conminado con severas penas privativas de libertad, permitirán enviar un mensaje de comunicación preventiva y sancionadora en forma directa a los agentes del delito y sujetos de vulnerabilidad, cumpliendo con más eficacia la norma penal (Proyecto de Ley 3240/2008-CR, p. 2).

Se llenarán las cárceles de gente, habrá que construir más cárceles, pero no los podemos dejar en la calle cometiendo los mismos delitos, porque jurídicamente no debe ser así. Estos delitos han llevado a cosas más graves, además, al contrario, ahí los frenamos. Pero sí, hay que construir más cárceles para meter a estos delincuentes callejeros, por supuesto, hay que meterlos a la cárcel de todas maneras y construir más cárceles (Diario de debates. Sesión 16 de setiembre 2007, p. 58).

En tercer lugar, se identifican falencias en el proceso legislativo de elaboración de la ley penal. Como ha mencionado Díez Ripollés, la elaboración de la ley penal se encuentra compuesta por tres fases: pre-legislativa, legislativa y post-legislativa. Cada una de ellas tiene objetivos propios y está compuesta por una serie de requerimientos que, de ser cumplidos, garantizan una ley penal racional y acorde con la realidad que pretende regular. Además, el autor citado señala que la dinámica legislativa de la ley penal está compuesta por tres fases que identificación de la falta de correspondencia entre realidad social y la respuesta jurídica que se formula frente a un hecho que amenaza o lesiona determinados bienes jurídicos, y que culmina con la presentación de un proyecto de ley o de reforma de ley para suplir dicha falta de relación; ii) la fase legislativa, que se inicia con la recepción del proyecto de ley, continúa con su debate y que culmina con su aprobación y publicación; y iii) la fase post legislativa, que inicia con la publicación de la nueva ley y que culmina con su evaluación y/o cuestionamiento sobre su vigencia con la realidad social (DÍEZ RIPOLLÉS J. L., 2013, págs. 17-20). Al respecto, componentes esenciales de la fase pre-legislativa, como la elaboración de un diagnóstico que identifique las causas que generan esta falta de correspondencia entre la legislación vigente y la realidad actual, y que justifique su modificación, no aparecen en la mayoría de los proyectos que dieron origen a las modificaciones a las modalidades simples y agravadas del delito analizado. En tal sentido, los proyectos de ley revisados no cuentan con información empírica suficiente que permita vislumbrar la necesidad de la modificación planteada. Aquellos proyectos que

cuentan con algún tipo de información que “sustente” la pertinencia de su propuesta, solo se limitan a la recopilación y/o descripción de estadísticas de diferentes instituciones encargadas de la prevención del delito, sin que exista un análisis empírico ni criminológico en torno a sus causas y/o descripción de la dinámica del fenómeno criminal que se pretende modificar.

Cabe mencionar, la ausencia de estadísticas de victimización de los delitos mencionados, y la concentración de las cifras de denuncias de la policía nacional, haciendo un uso equívoco de las estadísticas sobre la criminalidad, pues como se ha señalado, las estadísticas en torno a los registros administrativos, brindan información sobre el alcance de la capacidad estatal para registrar incidencias delictivas; sin embargo, solo brindan un panorama sesgado respecto de la extensión del fenómeno delictivo. Lo mismo en el tratamiento de la información estadística, pues esta se presenta en números absolutos y no en tasas por 100 mil habitantes, unidad de medida estandarizada para conocer y comparar la frecuencia relativa de ocurrencia de hechos delictivos en una población y tiempo determinados (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA, 2000, pág. 2) Otra falencia identificada en este ámbito es respecto del análisis de costo/beneficio que se presenta en cada proyecto de ley. Según el artículo 75º del Reglamento del Congreso de la República, el análisis de costo/beneficio es un componente obligatorio de los proyectos de ley y una herramienta indispensable para la toma de decisiones y su aprobación o no en función de su viabilidad y efectos en la realidad. (HARO CARRANZA , 2012, pág. 3) En tal sentido, este análisis tiene como objetivo primordial “asignar diversos valores positivos (beneficios) y negativos (costos) a los derechos involucrados en las normas bajo análisis,(...) que deben tener en consideración los efectos transversales de las acciones legislativas”

En tal sentido, el análisis costo/beneficios y resulta fundamental para asegurar una mejor calidad de las leyes.

Sin embargo, los 05 proyectos en los que se basan las modificaciones planteadas carecen de un análisis costo/beneficio de la implementación y aplicación de la ley. Al respecto, la justificación más frecuente en dicho apartado es “la presente iniciativa legislativa no irroga mayor gasto para el Tesoro Público, porque estamos ante una modificación de la legislación penal con el propósito de disuadir la comisión de delitos (...)”. No obstante, en algunos otros, se enuncia ambigualmente el beneficio del proyecto para el control de la criminalidad, pero no se profundiza en los costos que la implementación de la propuesta legislativa pueda generar. Esta situación no solo representa una dificultad para la toma de decisiones por parte del legislador que permita producir leyes de mejor calidad; sino también en la cuestionada legitimidad del Congreso Nacional. Al respecto, la metodología planteada por Durand para la realización de un análisis costo/beneficio para proyectos de ley en Perú, basada en la identificación de gestores, beneficiarios y efectos de los proyectos de ley, contribuirá a revertir dicha situación.

Si bien, en materia de las reformas al código penal se regulan modificaciones de conductas de las personas o sobre la duración de la pena privativa de libertad, las consecuencias de su aplicación pueden traducirse en que la persona que comete un robo sobre vehículo automotor permanezca entre 12 y 20 años en la cárcel, lo que evidentemente significaría un costo adicional para el sistema penitenciario en términos de infraestructura, alimentación, cuidados de salud y tratamiento, entre otros.

De igual forma, otra falencia en este ámbito es la ausencia de una comisión encargada del seguimiento y evaluación de las leyes, es decir, “que se encargue de identificar el grado de cumplimiento de los objetivos esperados por el legislador al dictar la norma, visibilizar los impactos no previstos producidos por la aplicación de ella, identificar posibles externalidades que afecten su eficacia o eficiencia y proponer medidas correctivas si fuera necesario”. (NAVARRO CORBACHO, 2016, pág. 103)



Por el contrario, existe una tendencia a priorizar la promulgación de la norma en detrimento de incentivar su implementación. Como bien afirma Bravo, se sigue “con la inercia de la práctica parlamentaria tradicional de continuar acompañando al proceso legislativo hasta el momento en que la norma es aprobada y promulgada” (BRAVO ALARCÓN , 2015, pág. 7)

En cuarto lugar, se observa la presencia de una lógica de giro punitivo y de gobierno a través del delito. Por ejemplo, en el decreto legislativo 1084, se manifiesta una tendencia a utilizar las leyes penales como mecanismos para fortalecer políticas establecidas por el Estado, pues se modifica el delito de hurto en el marco del Acuerdo Comercial entre Estados Unidos y Perú, ampliando su objeto de aplicación. En tal sentido, se identifica como precedente de la tendencia gobernar a través del delito. Cabe mencionar que esta tendencia no es reciente en la política criminal peruana, pues, las mismas características se observaron en la política criminal de la dictadura militar de los 70-80, en la que, por ejemplo, “la vocación reformista de Velasco no dudó en utilizar el control penal como un instrumento de promoción y aplicación de sus políticas de desarrollo. De esa manera surgieron nuevos delitos destinados a evitar toda alteración en el proceso de implementación de cada reforma. Un caso similar fue el de los que aparecieron con los decretos leyes 17716 y 18158. Con ellos el gobierno intentó controlar toda opción de rechazo y boicot a la ejecución de la Reforma Agraria” (PRADO SALDARRIGA, 1990, pág. 54)

Ahora bien, las características anteriormente descritas, propias del modelo de seguridad ciudadana y del giro punitivo, también se observan en el quinquenio 2011-2016. En dicho periodo, los artículos analizados se vieron modificados por la aprobación de las leyes 30076, 30077 y 30096, publicadas el 19 y 20 de agosto, y el 22 de octubre de 2013, respectivamente.

En torno a las modificaciones al delito de robo con agravantes, la ley 30076 previó dos modificaciones. La primera de ellas fue la incorporación de una circunstancia agravante de primer grado vinculada con nuevos objetos

sobre el cual puede recaer la acción del agente, y que complementa la redacción del inciso 8 del primer párrafo: sobre vehículo automotor, sus autopartes o accesorios. Por su parte, la segunda modificación previó la transformación de la circunstancia agravante específica de tercer grado, pues, la convirtió en una circunstancia en la que debían concurrir dos aspectos para su aplicación: cuando el agente en calidad de integrante de una organización criminal, como consecuencia del hecho, produce la muerte de la víctima o le causa lesiones graves a su integridad física o mental. Por su parte, la modificación introducida por la ley 30077, previó la conversión de dicha agravante específica de tercer grado en dos agravantes vinculadas a i) la calidad del sujeto activo del delito: cuando el agente actúe en calidad de integrante de una organización criminal; y ii) a la afectación generada a la víctima como consecuencia del delito: si como consecuencia del hecho, se produce la muerte de la víctima, o se le causa lesiones graves a su integridad física o mental.

La vigencia, entonces, de esta tendencia securitaria sobrecriminalizadora, posibilita sostener la existencia de todo un ciclo de sobrecriminalización en la política criminal nacional.

El mismo que se manifiesta para el caso de los delitos patrimoniales, mediante las siguientes etapas: i) acto criminalizado, en el Código Penal de 1991; ii) incorporación de circunstancias agravantes específicas de distinto grado; iii) la agravación cuantitativa de pena conminada, como la producida mediante la ley 29470 para las modalidades agravadas del robo; v) la prohibición de beneficios penitenciarios, penales y procesales; y vi) el establecimiento de la pena de cadena perpetua.

De igual forma, en cuanto a las manifestaciones del giro punitivo y gobierno a través del delito, se evidencian, hasta en tres momentos en la realidad nacional: i) la delegación de facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana al Poder Ejecutivo en junio 2015, ii) el predominio del discurso securitario y punitivo en las elecciones generales 2016, y iii) la

declaración y renovación del Estado de emergencia en distintas ciudades del Perú para controlar la delincuencia.

En primer lugar, como estrategia para controlar la inseguridad en el país, el gobierno peruano solicitó la delegación de facultades legislativas, que fue autorizada mediante la ley 30336, del 30 de junio de 2015, basada en el proyecto de ley 4569/2014-CR. Esta ley dispuso en su artículo 01: “Delegase en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar por el término de noventa (90) días calendario en materia de seguridad ciudadana, lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, contados a partir de la vigencia de la presente Ley, en los términos a que hace referencia el artículo 104 de la Constitución Política del Perú”. Como consecuencia de dichas facultades, el Ejecutivo emitió 31 decretos legislativos vinculados a i) incorporación de tipos penales, como el sicariato, incorporado mediante decreto legislativo 1181 publicado el 27 de julio de 2015; ii) el endurecimiento punitivo, como ocurrió mediante el decreto legislativo 1237, del 26 de setiembre de 2015, a través de las modificaciones previstas para diversos artículos del código penal; o iii) el fortalecimiento de las capacidades de prevención y control de la criminalidad, como las medidas de prevención para combatir los delitos patrimoniales relacionados con vehículos automotores y autopartes, mediante decreto legislativo 1214 publicado el 24 de setiembre de 2015. Cabe mencionar, que esta misma estrategia se ha manifestado también en el reciente presentación ante el Congreso del Gabinete Ministerial, presidido por Fernando Zavala (LA REPÚBLICA, 2016, pág. 10)

Por su parte, en torno al discurso securitario y punitivo en las elecciones generales 2016, las propuestas de la mayoría de los candidatos giró en torno a medidas de mano dura y de tolerancia cero frente a la delincuencia. Por ejemplo, respecto a los planes de gobierno, según un análisis realizado por el Instituto de Defensa Legal, solo tres de los diecinueve planes de gobierno inscritos, aprobaron en materia de propuestas en seguridad ciudadana, por contar con tres componentes: i) diagnóstico serio, ii) objetivos definidos, y iii)

estrategias adecuadas para responder a la problemática de la inseguridad en el país (INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL, Elecciones 2016, 2016).

Por su parte, durante los debates entre los candidatos y equipos técnicos, las propuestas más frecuentes giraron en torno a la declaración de estados de emergencia a nivel nacional para combatir la inseguridad ciudadana, la presencia de las fuerzas armadas en las calles, o la construcción de nuevas cárceles (RPP, 2016) como lo ilustran los siguientes pasajes de los debates presidenciales: Construiremos 15 penales factorías con fines de rehabilitación, pero para los criminales avezados, secuestradores, violadores, marcas y extorsionadores, construiremos cinco “cárceles 4 mil” ubicadas a más de 4 mil metros de altura sobre el nivel del mar, lejos de las ciudades, sin señal de telefonía celular, para impedir que estos delincuentes dirijan a sus compinches desde las cárceles. La propuesta es construir 20 cárceles porque somos conscientes que será fundamental para la lucha contra la inseguridad ciudadana (Debate de equipos técnicos. 15 de mayo de 2016). No me temblará la mano para declarar el Estado de emergencia cuando sea necesario. A mí no me temblará la mano para devolver el 24x24 hasta llegar a una remuneración policial justa. No me temblará la mano para recuperar nuestras calles.

Tengo la decisión política para poner orden en nuestro país, enfrentando a la delincuencia desde el primer día. Será el primer paso para abrir las puertas al desarrollo (Primer debate presidencial. 22 de mayo de 2016).

En un futuro gobierno enfrentaremos y venceremos la delincuencia con decisión política, con liderazgo y con el respaldo de las Fuerzas del Orden (Segundo debate presidencial. 29 de mayo de 2016).

Finalmente, otra manifestación del giro punitivo y del gobierno a través del delito, fueron las tres declaraciones, y prórrogas, del Estado de emergencia en la Provincia Constitucional del Callao y en las provincias del Santa y Casma (departamento de Áncash). En el primer caso, el Estado de

emergencia en el Callao fue declarado mediante decreto supremo 083-2015-PCM, publicado el 04 de diciembre de 2015, y tuvo como objetivo “fortalecer la lucha contra la delincuencia y criminalidad organizada en todas sus modalidades”. Cabe mencionar que este Estado de excepción fue prorrogado hasta en cuatro ocasiones, mediante los decretos supremos 004-2016-PCM, del 16 de enero de 2016, el 013-2016-PCM, publicado el 02 de marzo de 2016, el 036-2016-PCM, publicado el 31 de mayo de 2016, y el 056-2016-PCM, del 30 de julio de 2016. Por su parte, en el segundo caso, mediante decreto supremo 009-2016-PCM, publicado el 10 de febrero de 2016, se declaró en Estado de emergencia a las provincias del Santa y Casma, “a fin de consolidar la lucha contra la inseguridad ciudadana y el crimen organizado en sus diferentes modalidades y restablecer el principio de autoridad”. Al igual que en el caso anterior, también se prorrogó el Estado de emergencia por una segunda vez, mediante el decreto supremo 020-2016-PCM.

En resumen, la política criminal frente al delito de robo en la última década, respondió a un modelo de seguridad ciudadana y de giro punitivo en el que las decisiones de sobrecriminalización, de incremento de penas e incorporación de circunstancias agravantes específicas, han sido las más frecuentes

## **6. Estado actual de la política criminal: diagnostico expansión del Derecho Penal.**

Las características principales de la política criminal practicada en los últimos años pueden resumirse en el denominador mínimo común del concepto de la “expansión” del Derecho penal. En efecto, en el momento actual puede convenirse que el fenómeno más destacado y visible en la evolución actual de las legislaciones penales del “mundo occidental” está en la aparición de múltiples nuevas figuras, a veces incluso de enteros nuevos sectores de regulación, acompañada de una actividad de reforma de tipos penales ya existentes realizada a un ritmo muy superior al de épocas anteriores.

El punto de partida de cualquier análisis del fenómeno que puede denominarse la “expansión” del ordenamiento penal ha de estar, en efecto, en una sencilla constatación: la actividad legislativa en materia penal desarrollada a lo largo de las dos últimas décadas en los países de nuestro entorno ha colocado alrededor del elenco nuclear de normas penales un conjunto de tipos penales que, vistos desde la perspectiva de los bienes jurídicos clásicos, constituyen supuestos de "criminalización en el estadio previo" a lesiones de bienes jurídicos, cuyos marcos penales, además, establecen sanciones desproporcionadamente altas. Resumiendo: en la evolución actual tanto del Derecho penal material como del Derecho penal procesal, cabe constatar tendencias que en su conjunto hacen aparecer en el horizonte político-criminal los rasgos de un "Derecho penal de la puesta en riesgo" de características antiliberales. Simplificando mucho, probablemente en exceso, éste es un primer punto de partida de la situación político-criminal que cabría ubicar temporalmente en los años ochenta del siglo XX y que plantea lo que podría denominarse la crisis propia del Estado social en materia criminal. Como se intentará exponer a continuación, sin embargo, esta problemática expansiva que podría resumirse en la idea del “Derecho penal del riesgo” no es la única: en la evolución más reciente, hay otros fenómenos de expansión que añaden características distintas a ese cuadro político criminal de partida (JAKOBS & CANCIO MELIÁ, 2003, pág. 63).

## **7. Los fenómenos expansivos**

En primer lugar se trata, entonces, de esbozar una imagen más concreta y más actual de esta evolución político-criminal. Desde la perspectiva aquí adoptada, este desarrollo puede resumirse en lo esencial en dos fenómenos: el llamado “Derecho penal simbólico” y lo que puede denominarse “resurgir del punitivismo”. En todo caso, debe subrayarse desde el principio que estos dos conceptos sólo identifican aspectos fenotípicos sectoriales de la evolución global y no aparecen de modo clínicamente “limpio” en la realidad

legislativa. Ambas líneas de evolución, la “simbólica” y la “punitivista” ésta será la tesis a exponer aquí constituyen el linaje del Derecho penal del enemigo.

Sólo teniendo en cuenta esta filiación en la política criminal moderna podrá aprehenderse el fenómeno que aquí interesa (JAKOBS & CANCIO MELIÁ, 2003, pág. 63).

### **7.1. El Derecho penal simbólico**

Particular relevancia corresponde, en primer lugar, a aquellos fenómenos de neocriminalización respecto de los cuales se afirma críticamente que tan sólo cumplen efectos meramente “simbólicos”. Como ha señalado Hassemer desde el principio de esta discusión, quien pone en relación al ordenamiento penal con elementos “simbólicos”

puede crear la sospecha de que no toma en cuenta la dureza muy real y nada simbólica de las vivencias de quien se ve sometido a persecución penal, detenido, procesado, acusado, condenado, encerrado, es decir, la idea de que se inflige un daño concreto con la pena para obtener efectos algo más que simbólicos. Por lo tanto, para siquiera poder abordar el concepto, hay que recordar primero hasta qué punto el moderno principio político-criminal de que sólo una pena socialmente útil puede ser justa ha sido interiorizado (en diversas variantes) por los participantes en el discurso político-criminal. Sin embargo, a pesar de ese postulado (de que se satisface con la existencia del sistema penal un fin, que se obtiene un resultado concreto y mensurable, aunque sólo sea en el caso de las teorías retributivas la realización de la justicia), los fenómenos de carácter simbólico forman parte de modo necesario del entramado del Derecho penal, de manera que en realidad es incorrecto el discurso del “Derecho penal simbólico” como fenómeno extraño al Derecho penal. En efecto: desde perspectivas muy distintas, desde la “criminología crítica” y, en particular, desde el así llamado enfoque del labeling approach, que pone el acento sobre las condiciones de la atribución social de la categoría “delito”, hasta la teoría de la prevención general positiva, que

entiende delito y pena como secuencia de tomas de posición comunicativa respecto de la norma: los elementos de interacción simbólica son la misma esencia del Derecho penal. Entonces, ¿qué es lo que quiere decirse con la crítica al carácter simbólico, si toda la legislación penal necesariamente muestra características que cabe denominar “simbólicas”? Cuando se usa en sentido crítico del concepto de Derecho penal simbólico, se quiere, entonces, hacer específica referencia a que determinados agentes políticos tan sólo persiguen el objetivo de dar la “impresión tranquilizadora de un legislador atento y decidido”, es decir, que en estos ámbitos predomina una función latente sobre la manifiesta, o, dicho en una nueva formulación, que hay una discrepancia entre los objetivos invocados por el legislador y los agentes políticos que conforman las mayorías de éste y la “agenda real” oculta bajo aquellas declaraciones expresas.

En la “Parte Especial” de este Derecho penal simbólico corresponde especial relevancia por mencionar sólo este ejemplo, en diversos sectores de regulación, a ciertos tipos penales en los que se criminalizan meros actos de comunicación, como, por ejemplo, los delitos de instigación al odio racial o los de exaltación o justificación de autores de determinados delitos. Un examen de esta “Parte Especial” indica con toda claridad que el Derecho penal simbólico no sólo implica una puesta en escena por parte de determinados agentes políticos, sino que, además, en cierto modo es también la sociedad en su conjunto la que lleva a cabo una (auto-)representación: “nosotros no somos así”. Un exorcismo: “el racismo no forma parte de esta sociedad” (esto queda “probado”, de hecho, por una determinada criminalización; con independencia de que ésta quizás sea completamente inadecuada para llegar a un nivel de aplicación razonable). Pero, en todo caso, puesto que lo cierto y evidente es que las cosas son justo al revés, en tales casos no se confirma una determinada identidad social, sino que ésta se pretende construir mediante el Derecho penal. Más adelante podrá hacerse alguna consideración acerca de otras funciones latentes del Derecho penal simbólico,



manifestadas en su descendiente, el Derecho penal del enemigo (JAKOBS & CANCIO MELIÁ, 2003, págs. 66-68).

## **7.2. El resurgir del punitivismo**

Sin embargo, reconducir los fenómenos de “expansión” que aquí interesan de modo global sólo a estos supuestos de promulgación de normas penales meramente simbólicas no atendería al verdadero alcance de la evolución. Pues el recurso al Derecho penal no sólo aparece como instrumento para producir tranquilidad mediante el mero acto de promulgación de normas evidentemente destinadas a no ser aplicadas, sino que, en segundo lugar, también existen procesos de criminalización “a la antigua usanza”, es decir, la introducción de normas penales nuevas con la intención de promover su efectiva aplicación con toda decisión, es decir, procesos que conducen a normas penales nuevas que sí son aplicadas o al endurecimiento de las penas para normas ya existentes. De este modo, se invierte el proceso habido en los movimientos de reforma de las últimas décadas, en el que fueron desapareciendo diversas infracciones recuérdese sólo la situación del Derecho penal en materia de conductas de significado sexual que ya no se consideraban legítimas. En este sentido, se advierte la existencia en el debate político de un verdadero “clima punitivista”: el recurso a un incremento cualitativo y cuantitativo en el alcance de la criminalización como único criterio político-criminal; un ambiente político-criminal que, desde luego, no carece de antecedentes. Pero estos procesos de criminalización y esto es nuevo en muchas ocasiones se producen con coordenadas políticas distintas al reparto de roles tradicional que podría resumirse en la siguiente fórmula: izquierda política demandas de descriminalización/derecha política demandas de criminalización. En este sentido, parece que se trata de un fenómeno que supera, con mucho, el tradicional “populismo” en la legislación penal: la historia no se repite.

Respecto de la izquierda política resulta especialmente llamativo el cambio de actitud: de una línea simplificando, claro está que identificaba la criminalización de determinadas conductas como mecanismos de represión para el mantenimiento del sistema económico-político de dominación a una línea que descubre las pretensiones de neo criminalización específicamente de izquierdas: delitos de dicho Rodríguez Mourullo que “no sigue ninguna línea político-criminal coherente”. Naturalmente, esta evolución no ha concluido con aquel regalo de despedida jurídico-penal de los socialdemócratas. La mayoría parlamentaria de la derecha política existente en España desde 1996 hasta la primavera de 2004 ha hecho caer una verdadera cascada de reformas penales sobre la imprenta del Boletín Oficial del Estado (en muchos sectores diversos) que en el año 2004 (justo para las elecciones generales) desembocó en una especie de revisión general del Código de 1995, adaptando mediante el incremento generalizado de los marcos penales y la creación de nuevos tipos delictivos la legislación penal española al nuevo clima político. Esto ha sucedido es esencial subrayarlo con una aprobación muy amplia de casi todas las fuerzas políticas, especialmente en todos aquellos ámbitos que algo podrían tener que ver con el terrorismo; en cuanto se pronuncia esa palabra, casi todos los agentes políticos inician una carrera para llegar los primeros al frente (mediático) del “decidido combate”. Por otra parte, hasta el momento no hay indicio alguno que la nueva mayoría parlamentaria surgida después de los atentados en Madrid de marzo de 2004 pretenda revertir algún elemento de esta última contrarreforma. (JAKOBS & CANCIO MELIÁ, 2003, págs. 69-75)

## **8.Punitivismo y Derecho penal simbólico**

Con lo expuesto hasta el momento ya queda claro que ambos fenómenos aquí seleccionados como indicadores del panorama global no son, en realidad, susceptibles de ser separados nítidamente. Así, por ejemplo, si se introduce una legislación radicalmente punitivista en materia de drogas, ello tiene una inmediata incidencia en las estadísticas de persecución criminal

(es decir, no se trata de normas meramente simbólicas de acuerdo con el entendimiento habitual), y a pesar de ello es evidente que un elemento esencial de la motivación del legislador a la hora de aprobar esa legislación está en los efectos “simbólicos” obtenidos mediante su mera promulgación. Y a la inversa, también parece que normas que en principio cabría catalogar de “meramente simbólicas” pueden llegar a dar lugar a un proceso penal “real”. Lo que sucede es que en realidad, la denominación “Derecho penal simbólico” no hace referencia a un grupo bien definido de infracciones penales caracterizadas por su inaplicación, por la falta de incidencia real en la “solución” en términos instrumentales, sino que, como antes se indicaba, identifica un especial significado simbólico del proceso mismo de criminalización, es decir, la especial importancia otorgada por el legislador a los aspectos de comunicación política a corto plazo en la aprobación de las correspondientes normas. Y estos efectos incluso pueden llegar a estar integrados en estrategias mercado-técnicas de conservación del poder político, llegando hasta la génesis consciente en la población de determinadas actitudes en relación con los fenómenos penales que después son “satisfechas” por las fuerzas políticas.

Dicho con toda brevedad: el Derecho penal simbólico no sólo identifica un determinado "hecho", sino también (o: sobre todo) a un específico tipo de autor, quien es definido no como igual, sino como otro. Es decir, que la existencia de la norma penal -dejando de lado las estrategias a corto plazo de mercadotecnia de los agentes políticos- persigue la construcción de una determinada imagen de la identidad social mediante la definición de los autores como "otros", como no partícipes de esa identidad. Y parece claro que para ello también son necesarios los trazos vigorosos de un punitivismo exacerbado, en escalada, especialmente, cuando la conducta en cuestión ya se hallaba amenazada de pena. Por lo tanto, el Derecho penal simbólico y el punitivismo mantienen una relación fraternal. A continuación puede examinarse lo que surge de su unión: el Derecho penal del enemigo. (JAKOBS & CANCIO MELIÁ, 2003, págs. 76-77).

## **CAPITULO VI: PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

El concepto de participación ciudadana por su misma naturaleza carece de un solo significado, toda vez que la participación ciudadana puede presentarse en cualquier escenario de la vida social, jurídica y política. Sin embargo para fines del presente estudio, abarcaremos su concepción más amplia para posteriormente encauzarla como una alternativa de carácter preventiva para disminuir los índices de delincuencia en nuestro país.

La participación ciudadana tiene dos componentes: participar que provienen del latín *participare* y significa tener una parte o tocarle algo de ella, de tal forma participación es la acción de participar o intervenir en un asunto o un hecho, lo que implica, según Zazueta Villegas, que al participar en asociación con otros, se comparten opiniones, acuerdos y se orientan acciones de manera conjunta. El segundo componente es el adjetivo ciudadana que provienen del sustantivo ciudadano haciendo explícito el sentido de esa participación entre miembros de la misma categoría política (ciudadanos), la cual está destinada a la promoción de acciones, cuyos propósitos sólo tienen significado en el ámbito por excelencia del ciudadano. (ZAZUETA VILLEGAS, 2003, pág. 5).

En el sector de la seguridad pública la participación ciudadana consiste “en sumar esfuerzos y trabajo de la sociedad a las funciones que desempeña el Estado en materia de seguridad pública, pasando así de una administración centralizada y unilateral a otra abierta y democrática con la colaboración de la ciudadanía (...).” (TAPIAS FLORES, 2002, pág. 62) Dicha participación se da principalmente en las políticas de prevención del delito.

Esto parte de la idea de que la seguridad pública es tarea no sólo del Estado sino de todos los sectores sociales incluyendo la participación de la comunidad en general, vislumbrándose una sociedad más participativa, crítica pero sobre todo demandante de sus derechos ante el evidente fracaso del Estado en materia de seguridad pública.

El que la sociedad participe en funciones que tradicionalmente llevaba a cabo el Estado, “(...) se trata de una necesidad histórica, ya que refleja tendencias seculares del ser humano a ser actor y artesano de su vida social (....)” (CHINCHILLA MIRANDA, 2008, pág. 8) y no implica que las instituciones hasta ahora encargadas de la seguridad pública pierdan el monopolio de esta función, pues únicamente se busca que la sociedad colabore con la autoridad en diferentes niveles, para el fortalecimiento de un gobierno democrático y moderno.

La participación ciudadana no sólo es una alternativa más en la prevención del delito, sino es la expresión de la democracia y la encargada de la vigencia de ésta, a fin de que la democracia no se reduzca a una simple formalidad. (CHINCHILLA MIRANDA, 2008, pág. 8) Por ejemplo en países como México el voto ciudadano (la mayoría de las veces viciado o pocas veces ejercido) es el único vínculo de la democracia reflejando “(...) una sociedad pasiva pero sobre todo domesticable (...)” carente de una verdadera democracia donde el Estado es el que manda y la sociedad la que obedece.

La democracia se conquista con la participación ciudadana que sólo puede subsistir en un régimen de libertades, (CHINCHILLA MIRANDA, 2008, pág. 8) lo que diferencia a un Estado Democrático de uno Autoritario. Autores como Del Valle Martínez determinan que la participación ciudadana en la gestión pública, es una expresión de civilidad siendo ésta la forma más elevada y madura de una cultura, lo que implica el ejercicio de uno de los valores más esenciales de la sociedad moderna: la democracia.

De tal forma, fomentar la participación ciudadana en las políticas públicas de seguridad es perfeccionar la democracia, donde el ciudadano no sólo sea contralor de la autoridad, sino parte activa y responsable de la seguridad pública.

## **1. Formas de Participación Ciudadana**

La participación ciudadana puede originarse a través de dos vías: la primera por iniciativa de la misma autoridad en busca de nuevas soluciones para prevenir la delincuencia ante el eminente fracaso de la represión y así consolidar una seguridad pública más democrática, y la segunda por parte de la sociedad que al detectar la ineficacia de las instituciones encargada de la seguridad pública se organizan de forma independiente, a fin de autoprotegerse de la delincuencia, sin embargo, el presidir de una autoridad que limite el actuar de la sociedad puede culminar en una justicia de propia mano en el peor de los casos, por lo que se hace necesario para el éxito de cualquier programa de prevención del delito el control de una autoridad que vigile y coordine el actuar de la sociedad. La misma participación ciudadana, como lo apunta Cafferata, ayuda a eliminar esos focos de violencia (justicia de propia mano) entre la sociedad, a través de una concertación entre la autoridad y la sociedad.

De esta forma la participación ciudadana puede alcanzar ciertos niveles: (ANIYAR CASTRO, 2005, pág. 8).

- Colaboración con el Estado en algunos elementos secundarios de la tarea pública.

- Aporte de los ciudadanos para un mejor conocimiento del Estado de las demandas sociales. Ejemplo la policía comunitaria.

- Participación efectiva en la tarea central de prevención como en la propuesta de soluciones.

- El nivel más elevado, el de toma de decisiones y la ejecución y control de las políticas o medidas implementadas para lograr tales soluciones.

En las sociedades modernas se requiere de una coparticipación del Estado y de la sociedad, pues la civilidad requiere abarcar el conocimiento de ambos, (DEL VALLE MARTINEZ , 2004, pág. 18) donde la participación ciudadana no desborde las garantías individuales de las que goza cada individuo, ni la

autoridad viole el Estado de derecho, haciéndose necesario el control entre ambos, para programas preventivos exitosos.

## **2. Objetivos de la Participación Ciudadana**

La participación ciudadana en la prevención de delito en concreto tiene tres objetivos fundamentales que permiten resultados exitosos en la política de prevención implementadas por la autoridad. El primero es mejorar la relación entre la comunidad y la autoridad, específicamente con la policía, quien es el representante más cercano de dicha autoridad, con el fin de crear lazos de respeto y cooperación entre ambos, principalmente en el diseño de las estrategias para prevenir el delito que deben responder a las necesidades de la sociedad, pues muchas veces las prioridades del Estado no son las de la sociedad, lo que evidencia su fracaso. El segundo objetivo es eliminar el sentimiento de inseguridad entre la población, principalmente, porque es la propia sociedad la que tiene el control de las políticas preventivas que se ejercen. Por último, ejercer mayor control sobre la autoridad vigilando su actuar. El conjunto de estos objetivos permite una prevención del delito más eficaz.

Se dice que cuando los ciudadanos intervienen en el diseño de políticas públicas, se crean mecanismos que mejoran la Administración Pública, porque las medidas que se implementan realmente satisfacen las necesidades y prioridades de la comunidad, además de que ésta vigila el desempeño de las autoridades; se trata por lo tanto de un control popular, que vuelve eficiente y eficaz la gestión gubernamental. (DEL VALLE MARTINEZ , 2004, pág. 19)

Pagoraro Juan S. en su estudio de las políticas de seguridad pública y participación comunitaria establece que se ha descubierto que la mejor forma de prevenir conductas delictivas era convocando a los vecinos y congestionando la seguridad con ellos. (PEGORARO, 2005) El hecho de que sea la ciudadanía protagonista de las políticas de prevención causa un fuerte efecto en ésta y mientras más alto sea el grado de inclusión mayor efecto

tendrá la prevención del delito, ya que el ser parte de un proyecto, de sentirlo como suyo, pero sobre todo a sabiendas de un beneficio propio, se genera un mayor grado de responsabilidad y de eficacia, pero sobre todo políticas públicas más integrales.

### **3. La Participación Ciudadana en la Prevención del Delito**

Actualmente en la búsqueda de soluciones al tema de la inseguridad Pública se han implementado innovadoras estrategias de prevención del delito, las cuales implican la participación ciudadana como característica indispensable. En países como Chile, Argentina, Bogotá, Canadá, Estados Unidos entre otros se han implementado dichas estrategias con éxito, entre las que resaltan las siguientes:

#### **3.1. Enfoque situacional**

El enfoque situacional también conocido como diseño ambiental, se ha establecido en países anglosajones, escandinavos y actualmente en países de América Latina. Dicho enfoque se define como “el conjunto de medidas no penales tendientes a impedir el paso al acto mediante la modificación de las circunstancias particulares en el marco de las cuales una serie de delitos similares se cometen o pueden cometerse.” (CHINCHILLA MIRANDA, 2008, pág. 8) Es decir, el enfoque situacional trata de evitar la comisión de delitos mediante la reducción de oportunidades en el ámbito urbano.

Es un modelo que se dirige a las víctimas potenciales de un delito, a fin de dificultar las conductas criminales, disminuir la victimización y el sentimiento de inseguridad y aumentar las posibilidades de captura de los infractores.

En Canadá y Estados Unidos el enfoque situacional es conocido como prevención de la delincuencia mediante el diseño ambiental (CPTED), el cual apunta a la misma idea de que existen “(...) delitos en parte a causa de las oportunidades que ofrece el entorno físico.” (CHINCHILLA MIRANDA, 2008, pág. 8).



De esta forma el postulado base de estas teorías es que el delito surge en gran medida de elecciones influidas por aspectos concretos e inmediatos de las situaciones en que puede encontrarse un infractor potencial. Las acciones preventivas, que apuntan a modificar la situación pre-criminal están orientadas a pensar sobre las decisiones que éste puede tomar antes de pasar al acto, alcanzando su objetivo cuando dicho infractor decide no exponerse a la tentación de violar la ley o cuando ante tal tentación, llega a la conclusión que la comisión del delito es demasiado difícil y arriesgada, así como poco provechosa. (CHINCHILLA MIRANDA, 2008, pág. 9)

El enfoque situacional abarcan una serie de factores y acciones que abarcan desde la vigilancia realizada por determinadas personas guardias de seguridad, conserjes, conductores de autobuses, vendedores en comercios, vecinos organizados; cámaras, videos, televisión en circuito cerrado, rayos X, sistemas de alarma, detectores de metales, etiquetas electrónicas, perros, iluminación de calles y comercios; supresión de setos que oculten las entradas de las casas de la vista de los vecinos, obstáculos al acceso o a la penetración de un edificio, puertas reforzadas, cercas, barreras, rejas, cerraduras, cristales antibalas para proteger a cajeros y vigilantes; controles en la entrada a condominios o casas de apartamentos, hasta la limpieza rápida de graffiti y la reparación de propiedades dañadas o deterioradas para quitarles a los vándalos el placer de volver a ver el “fruto de su trabajo” o mediante la movilización de gente por lugares que se consideraban peligrosos para evitar calles o parajes solitarios. (CHINCHILLA MIRANDA, 2008, pág. 9)

El consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la Unión Europea llegó a la conclusión de que la prevención de la delincuencia mediante el modelo situacional ha demostrado ser una estrategia útil, eficaz, muy concreta y viable para prevenir la delincuencia y la sensación de inseguridad integrada en un enfoque multidisciplinario. Experiencias piloto han demostrado que este modelo puede reducir el número de ciertos delitos si se modifica la oportunidad de delinquir, por ejemplo si se desplaza a la multitud que sale de

los locales nocturnos fuera de los centros comerciales, que se quedan vacíos una vez pasada la hora de cierre, se reducirían los robos y actos vandálicos en los comercios.

Ejemplos claros de este modelo son los instalados en países como Gran Bretaña y Holanda conocidos como Secured by Design y Police Label Safe Housing, ambos programas cuentan con especialistas entrenados conocidos como agentes de enlace arquitectónico o consultores de diseño en la prevención de la delincuencia, que tiene como objetivo fomentar de manera activa medidas de seguridad. Las personas que cumplan con dicho objetivo al edificar una vivienda que cuente con características adecuadas para la prevención de la delincuencia y reducción del miedo, serán acreedora a una certificación de “Secure by Design”.

Esta certificación obviamente ofrece una ventaja comercial para vender o alquilar estas viviendas. (VAN SOOMEREN, 2001, pág. 25)

Otro ejemplo es el de transporte público de Australia o Colombia, en donde los viajeros al temer por su seguridad, y por la suciedad de vehículos y estaciones, el efecto intimidante de los graffitis acumulados, así como las conductas agresivas de grupos de vándalos y el efecto amplificador de los medios de comunicación que informaban sobre los incidentes ocurridos, dejaron de utilizar dentro de lo posible dicho medio de transporte. Por lo que a finales de 1990 se adoptaron medidas como: limpieza de estaciones y vehículos y un programa de limpieza rápida para eliminar los graffitis desde su aparición con la participación de la comunidad, mejora de la iluminación en las estaciones, entre otras. Este conjunto de medidas redujo en un 42% los delitos contra la persona, los actos de vandalismo disminuyeron considerablemente. Como podemos observar de los ejemplos expuestos, independientemente de la modalidad que adopte el enfoque situacional es de vital importancia que exista la participación ciudadana, ya que muchas de las actividades que se realizan dentro de un enfoque de esta naturaleza,

requieren tanto de la autoridad como de la parte activa de la sociedad, procurando el éxito de todo programa preventivo.

El modelo situacional o ambiental es una alternativa viable para la prevención de la delincuencia siempre y cuando se realice en un contexto multifactorial, es decir, donde sea parte de otras estrategias de prevención y no la única, ya que se considera que este modelo no previene toda clase de delitos, tal es el caso de los delitos de cuello blanco o el fraude. De igual forma puede generar que la población se concentre sólo en las comunidades y barrios menos expuestos a la delincuencia, contribuyendo a una separación entre zonas seguras y zonas con problemas.

### **3.2. Enfoque Social**

El enfoque social, al igual que el situacional, es un conjunto de medidas no penales que se caracteriza por atacar las causas que generan la delincuencia. El enfoque social aunque no innovador es esencial para cualquier política criminal integral, pues enmarca como menciona Laura Chinchilla a las clásicas teorías etiológicas del delito, según las cuales la acción criminal se explica por la existencia de diversos factores anteriores a su perpetración. (CHINCHILLA MIRANDA, 2008, pág. 15)

Existen en la actualidad una multiplicidad de factores que se asocian con la delincuencia, dado que cada autor maneja su propia clasificación, que aunque diferentes coinciden entre si, de tal forma los factores más comunes son: insuficiencias en la regulación social y en los lazos sociales como padres ausentes, indiferentes o negligentes; adolescentes insuficientemente integrados a su medio familiar, escolar o profesional; ausentismo y mala conducta escolar; desarraigo y marginalidad, necesidades insatisfechas o desigualdad económica que pueden ser colmadas por medios ilegítimos tales como: la necesidad de dinero para pagar deudas o satisfacer un deseo urgente, necesidad de acción, estímulo o excitación; frustración, deseo de

venganza; consumo de alcohol y otras drogas; violencia intrafamiliar o abusos sexuales. (CHINCHILLA MIRANDA, 2008, pág. 16)

El objetivo central de este enfoque es “que las acciones de prevención social centradas en el potencial actual del infractor deben tender a ayudarlo a satisfacer sus necesidades esenciales y aspiraciones legítimas; facilitar su inserción familiar, escolar y profesional; reforzar los controles sociales informales en la familia y la escuela, desalentar los agrupamientos criminales y esforzarse en dismantelar las bandas de delincuentes y luchar contra el abuso de alcohol y drogas.”<sup>268</sup> Un ejemplo de este enfoque, es la prevención social en las escuelas de los Países Bajos, en donde tres secundarias registraban tasas elevadas de ausentismo escolar y abandono precoz de los estudios. Conscientes de que las perturbaciones en las escuelas y el ausentismo presentan una fuerte correlación con la delincuencia, los autores del proyecto decidieron actuar sobre los alumnos que más se ausentaban de la escuela. La intervención consistió en la instauración en las tres escuelas de un sistema informatizado de registros de ausencias, llamadas telefónicas sistemáticas a los padres la misma mañana en que se señalaba la ausencia de su hijo y contratación de consejeros escolares, que dieron seguimiento a los alumnos ausentes o aquellos que consideraban abandonar los estudios. Estas medidas redujeron significativamente la frecuencia de las ausencias no justificadas de las escuelas. De igual forma en Canadá Francia y diversos países europeos suelen privilegiar este enfoque. (CHINCHILLA MIRANDA, 2008, pág. 17)

Una de las características de este programa de prevención es la participación ciudadana como condición para el desarrollo de sus fines, ya que para combatir las causas generadoras de la delincuencia es necesaria una vinculación estrecha con la sociedad para detectar, elabora y ejecutar cada una de las acciones que se implementan.

Como ya mencionábamos, el enfoque social de prevención del delito no es ninguna estrategia nueva, principalmente en países de Europa, sin

embargo en América Latina son pocas la política criminales que abarcan una prevención social, pues como ya mencionamos a lo largo de la presente investigación son las medidas penales las que prevalecen.

Sin embargo la aplicación de un enfoque puramente social sólo ha dado resultados mediocres, “debido esencialmente a su presentación y aplicación como panaceas universales, cuando la delincuencia, no sólo constituye uno de los elementos de la vida social, sino un fenómeno complejo, que no puede resolverse con soluciones únicas y a corto plazo.” (CHINCHILLA MIRANDA, 2008, pág. 18).

Aun así no debemos perder de vista que los enfoques sociales son necesarios pues atacan las causas de la delincuencia, siempre y cuando sirvan para complementar otros enfoques y estrategias de prevención del delito.

### **3.3. Prevención Comunitaria**

Es importante tomar en cuenta que la participación ciudadana no es más que un aspecto de la necesaria concepción global de la prevención, vinculada a la satisfacción de las necesidades de sobrevivencia, nutrición, libertad y crecimiento espiritual y corporal. Por lo que los vínculos comunitarios son de especial atención para la prevención del delito, pues como decía Zaffaroni la destrucción de estos vínculos se presentaría como un genocidio llevado a cabo por el sistema penal.

La prevención del delito en la comunidad se basa en el hecho de que la interacción social y la promoción de relaciones entre los vecinos, de una misma cuadra o de un mismo barrio, juega un rol importante en la investigación y denuncia de cualquier actividad delictiva que se pueda realizar en ese vecindario. Si bien es cierto, que la comunidad ha intentado controlar el delito, se hace necesario una adecuada organización y vinculación con las estructuras del control social; además de las realizaciones de actividades que puedan organizarse en los grupos comunitarios, actividades que pueden ser

tanto deportivas como recreativas; ya que el principal problema que presenta la prevención del delito en la comunidad, es la dificultad de organizar vecindarios de ingresos bajos con los de ingresos altos. Para resolver este problema se está llevando a cabo la capacitación de familias fuertes en el barrio, para que puedan mejorar el liderazgo que ellas tienen y lograr una adecuada organización comunitaria.

El programa de prevención del delito en la comunidad involucra a todos los ciudadanos comunes del barrio, que han logrado comprender que la policía por sí misma, no puede crear comunidades libres de amenaza delictiva. Este programa está basado en la premisa de que los ciudadanos comunes, que son los más afectados por la actividad delictiva, son por lo tanto los más interesados en asumir con mayor responsabilidad una tarea preventiva.

Así mismo la comunidad organizada, bajo parámetros de seguridad comunitaria, también desempeña un papel principal, en la detección temprana de desviaciones de los miembros de la policía, que en muchos casos sus mandos no están en capacidad de identificar. Por otra parte, la comunidad también constituye una reserva moral para efectos de hacer cumplir una serie de principios políticos criminales que sirven de fundamento regulador del poder punitivo del Estado. (ANIYAR CASTRO, 2005, pág. 89).

#### **4. El Factor Criminológico sobre la incidencia delictiva en el delito de robo**

En el desarrollo del presente capítulo, introduciéndonos más sobre el la delincuencia debemos considerar algunos elementos referenciales, como por ejemplo la evaluación de la realidad criminológica en la que se sitúan los delincuentes como también evaluar la Política Criminal Publica Punitiva del Estado, para así poder tener un elemento de evaluación crítico.

Consideramos que la propuesta que pretendemos evaluar, debe focalizar en términos esenciales a la construcción de una “política Punitiva

estatal” en términos formales (MARTINEZ CASTRO, 2014, pág. 34), la cual a nuestro parecer:

- a) No es correctamente desarrollada por el Estado.
- b) No guarda correlación entre las obligaciones de carácter internacional y las disposiciones internas a nivel normativo. (ANUARIO DE DERECHO PENAL, 2010, pág. 48)
- c) No se genera una línea de acción programática e institucional entre las dependencias del Estado vinculadas.

No se tiene un factor de evaluación y medición de los niveles de rendimiento de las acciones estatales emprendidas para efectos de su eventual modificación o readaptación a los nuevos contextos.

## **5. La Realidad Criminológica: Evaluado en el Análisis de Tesis**

Para la formulación y sustentación de nuestro tema de tesis, en forma específica y a nivel de desarrollo final de la descripción de nuestro principal grupo de estudio presentamos el siguiente esquema a nivel conclusivo.

Dicha referencia ha sido generada en función a la información sociológica suministrada en los puntos precedentes y en este punto lo haremos a nivel sistemático, por cuanto ya hemos adelantado algunas definiciones.

Igualmente debemos señalar que la referencia es puntual en cuanto a la referencia dogmática ubicada en la información bibliográfica y revistas y a la vez es complementada por la información que proporcione el INEI. (INFORMÁTICA, 2015).

### **a. El factor social**

En el presente punto, consideramos como elementos referenciales del grupo humano de delincuentes, los siguientes aspectos.

- Elevado nivel de fragilidad de las relaciones familiares, en donde se puede detallar, familias en proceso de violencia familiar constante, familias disfuncionales, familias divididas y separadas y familias nucleares en

residencia con familias amplias con elevado nivel de desatención de las necesidades básicas.

- Elevado nivel de separación de los progenitores en el cuidado de los hijos, quienes asumen un rol más “independientemente o autónomo” de sus progenitores debido a que no existe un control estricto.
- Desarrollo de niveles de relaciones familiares complicados y complejos en donde los progenitores por lo general presentan una segunda pareja en el hogar, situación que contrasta con la oposición de los menores, antes de la ejecución de actos radicales por parte de estos identificamos tales actos como actos de separación del hogar materno o familiar, la generación e inclusión en la drogadicción y consumo de alcohol.
- Elevada precariedad de los servicios básicos en las residencias y ámbitos de las ciudades donde viven los delincuentes.
- En este contexto se debe señalar el nivel socioeconómico que rodea a los delincuentes en cuanto a su “ciudad o localidad” donde se desarrolla que lo condiciona negativamente.
- Nivel socioeconómico vinculado a trabajos dependientes.
- Elevada condición de “Fertilidad múltiple”, conforme se puede apreciar en el registro estadístico del INEI como el hecho de que una persona declara tener hijos de “Compromisos o relaciones” diferentes.
- Residencia en sectores socio económicos deprimidos o en situación de afectación, como por ejemplo asentamientos humanos o “conos” o “Pueblos marginales”.
- Débil referencia académica y profesional de los progenitores que finalmente se traslada a los hijos con lo cual se va generando un nivel de pobreza o estructural.
- Una elevada movilidad social en función a la atención de necesidades de orden económico en casos de incursión en actividades delictivas: tráfico ilícito de drogas y ejecución de actos de carácter delictivo en complicidad con las autoridades.



## **b. El Factor Económico**

Entre los principales elementos a ser evaluados en el presente punto, debemos señalar el siguiente:

- Limitación económica en forma estable, permanente y estructural tanto de los delincuentes como en la familia a la cual recurren, como modo de vida.
- Escaso nivel de accesibilidad a programas de empleo estatal.
- Escaso nivel de atención de las principales necesidades de carácter económico, tanto en forma individual o por intermedio de algún programa estatal.
- Débil referencia al acceso al sistema formal del ámbito bancario, financiero o de seguros, con lo cual su incidencia en el ámbito económico del país es sumamente limitada.

## **c. Factor Cultural**

En el ámbito cultural, ubicamos las siguientes condiciones, respecto de su relación con la “ley” y sobre el “Derecho Penal” como elementos referenciales para la presente tesis.

- Escaso nivel de relación con las “obligaciones” cívicas que tiene un miembro de la comunidad política.
- Desvinculación con la “sociedad” en un nivel de consideración parte del problema interno en los delincuentes.
- Elevada condicionalidad de limitarse a contextos geográficos específicos, con lo cual los ratios de movilidad social se limitan.

Este punto es importante en nuestra investigación porque los “núcleos geográficos” son los principales elementos de donde provienen los delincuentes. Así la referencia a zonas marginales condiciona el desarrollo de una actividad delincuencial en forma proporcional al contexto económico en el cual se desarrolla el delincuente.

#### **d. El factor político**

Principalmente vinculado al contexto del desarrollo legislativo, el cual de por si es limitado en nuestro país, debido a la intervención de factor como:

- La presión social.
- La exigibilidad social de incrementar las penas.
- El desarrollo de políticas de clientelaje político, principalmente en función a las pretensiones de la clase política.
- El quiebre del modelo estatal del “Estado de bienestar” en una época a partir del años 1990, en la cual se priorizado la economía liberal del mercado.

#### **6. Evaluación de la Política Criminal en el País**

Conforme hemos manifestado en nuestra investigación consideramos que **existe una política criminal punitiva y expansiva en nuestro país** en términos objetivos o medianamente planificados, la débil relación entre:

a) El acuerdo Nacional, (ACUERDO NACIONAL, 2014, pág. 70) en el ámbito de lucha contra la criminalidad y la corrupción, no hacen detalle mayor o específico al control del crimen.

Esta situación se agudiza si se observa que a nivel de dicho documento ratificado y suscrito por todas las “fuerzas políticas” del país, no hay referencia alguna sobre la política criminal para la delincuencia que tenga un efecto positivo.

Nuestra observación deviene de la lectura y análisis de los contenidos del “Acuerdo Nacional” publicado por dicha entidad.

Documento de carácter más político y con un objetivo concertados que si bien ha tenido cierto impacto en la generación de múltiples acciones no ha tenido eco en el ámbito del control de la delincuencia en nuestro país.

b) El consejo del Estado (PORTAL DEL ESTADO PERUANO, 2015), el cual es la "mesa de trabajo" en la cual participan todas las entidades representativas del Estado, Unidas respecto de "políticas de carácter nacional". Dicha entidad, fue creación del gobierno de Valentín Paniagua y tenía por objetivos "concertar" posiciones instituciones sobre temas de

"carácter nacional", entre las cuales se fijan: I) Posición frente a la solicitud de Inconstitucionalidad del tratado de paz y límites con el Ecuador tramitado ante el tribunal constitucional respecto del "kilómetro cuadrado cedido sin autonomía" a favor del Ecuador por el Perú, II) La extradición de Alberto Fujimori respecto de Chile, II) la lucha contra la corrupción y los delitos contra la administración pública (durante los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala).

Sin embargo, no existe ninguna "Posición" concreta sobre políticas públicas penales ni tampoco hay referencia explícita o implícita para el caso de atención de los delincuentes.

Ante la omisión de información, consideramos oportuno evaluar entonces a nivel teórico los siguientes aspectos: la política punitiva estatal, en general el "poder" como facultad cedida por la ciudadanía a favor del Estado, implica el ejercicio de varias competencias y facultades que conforman el "poder" Único del Estado.

Uno de estos "poderes" es el iusimperium del Estado a nivel punitivo, el cual se redefine en cómo se interviene en el ámbito legislativo contra determinadas "acciones antisociales", conforme lo desarrolla la teoría del Derecho Penal en General. (SILVA SERNAQUÉ, 2002, pág. 321)

Por ello, el control estatal de la criminalidad parte del hecho de controlar y restablecer el equilibrio que debe existir en la sociedad, por ello exige que el Estado ( y toda la administración Pública ), pueda tener una "estrategia" que para el caso nuestro se traduce en una política pública en el ámbito punitivo para así no limitarlo al ámbito de la represión con la "condena de medidas privativas de libertad", por cuanto en el mismo código penal se establece que la "condena carcelaria" no es la única y que el juez penal, en función a los hechos y regulación normativa puede imponer otras medidas sancionatorias, que para el caso del control de la criminalidad juvenil resultan idóneos, sin que esta medida pueda afectar algún derecho de la población.

En este orden de ideas, se debe conjugar:

- a) La legitimidad del Estado para imponer medidas de represión y control social, porque por ello existe la figura del "contrato social", en la cual los ciudadanos admiten el poder del Estado para garantizar su paz social.
- b) Un nivel de eficiencia en la gestión pública, para que así el Estado tenga un cierto nivel de control efectivo en la lucha contra la criminalidad, para que así la propia sociedad se sienta garantizada en cuanto al ámbito normativo existe, porque le permite atender sus necesidades en un orden que garantiza el Estado de Derecho.

Para el caso penal, la legitimidad del Estado está también enfatizada en el inciso 22 del artículo 139 de la constitución que dispone que el Estado debe garantizar el principio de rehabilitación, reeducación y reincorporación del condenado a una pena privativa de derechos, a la finalización de la misma.

Téngase en este contexto constitucional que si a un " mayor de edad" se le considera su condición de ciudadanía para volver a incorporarse a la sociedad que en principio había afectado ¿porque a un menor de edad, se le limitaría esta posibilidad si forma parte de la delincuencia.

La vinculación constitucional al sistema punitivo estatal esta direccionado en función a la interpretación del artículo 1° de la constitución, construido sobre la función de que la prioridad es la defensa de la persona humana y de su dignidad y ante ello, todo condenado o "persona antisocial" (en términos generales) tiene el beneficio de que se le impongan medidas de rehabilitación para así reinsertarse en la comunidad.

Sin embargo, estas acciones de defensa a favor de la persona, no implican el limite material o sustantivo del Estado de imponer medidas de represión acorde a los hechos antisociales, a nivel que inclusive nuestro país admite la posibilidad de imponer dos medidas de carácter drástico en el ámbito penal:

a) la pena de muerte, en casos especiales, no aplicables a casos de los Delincuentes, pero que si es admisible si se cumplen las condiciones reguladas en la constitución.

b) La cadena perpetua, que está regulada en función a una privación de libertad hasta el fallecimiento de la persona condenada, supeditada a un control de rehabilitación a los 35 años de cumplida la pena.

Como se podrá observar, estas medidas al ser más drásticas en nuestro sistema penal, nos permiten señalar que el Estado cuenta con mecanismos idóneos para limitar en un nivel extremo algunas acciones criminológicas, como: la traición a la patria, las acciones terroristas y la generación de delitos de orden sexual contra menores de edad con ulterior muerte.

Bajo estas pautas, la política criminal del Estado debe ponderar:

a) Un lineamiento constitucional en la defensa de la persona humana, tanto para la protección de derechos como para la imposición de las condenas a ser aplicadas a los "agentes activos" del ilícito, por un lado y la defensa de la "Victima"(agente pasivo).

b) Un procedimiento penal para garantizar la defensa de derecho de las partes en el proceso penal, que garantice el orden constitucional establecido en el Estado de derecho y las condiciones procesales establecidas para ello.

c) Un procedimiento de imposición de sanciones en función a los parámetros sancionatorios impuestos en el Código Penal.

d) Un procedimiento de seguimiento de la condena, respecto de las condiciones personales del condenado, para así garantizar su posterior Reinserción Social.

Sin embargo, para la comunidad nacional estas acciones se encuentran limitadas y desde nuestra perspectiva, los objetivos materiales teóricos y sustantivos si bien están absolutamente garantizados en el ámbito normativo y procedimental, en el ámbito de la realidad social, debemos

considerar que existen falencias que contradicen lo regulado en el ámbito de la ley.

El menor ejemplo que materializa nuestra posición en este punto está en referencia a la condición de "rehabilitación " del condenado, quien en realidad no asume ninguna capacitación o readaptación en algún centro penitenciario del país y muy por el contrario, dicha cancelería lo capacita para incrementar su nivel de peligrosidad social.

De nada sirve para la comunidad en general que el Estado tenga una serie de "Condiciones constitucionales" para la imposición de una medida penal a un condenado, si este finalmente no logra readaptar a la convivencia social y continua delinquiendo y reingresando a los centros penitenciarios.

Ante ello, observamos la severa deficiencia de nuestra política criminal y con ello también la disfuncionalidad de la defensa de los derechos de las

Personas en situación de criminalidad (delincuentes), porque a la sociedad y al propio Estado se limitan en sus derechos, en forma objetiva, al no poder ejecutar e imponer medidas que realmente atiendan y controlen el delito (en general) en el país.

Frente a esta realidad no existe una "política nacional en el ámbito criminológico" ni referencia similar o complementaria, porque para ello se debe partir del análisis de la propia "ley" en cuanto a su efectividad en el ámbito procesal y procedimental del control de la criminalidad en el país y observamos una disfuncionalidad en cuanto al nivel de comunicación entre el poder judicial, ministerio público y el INPE con el resto del Estado, con lo cual se inicia una serie de situaciones controversiales, como:

- a) La expedición de normas penales simbólicas o que no tiene un efecto inmediato en el control de la criminalidad.
- b) la generación de medidas de orden extra penal que eventualmente afectan el Estado de Derecho, cuando se ejecutan acciones de lucha contra el crimen.

En este punto, téngase en cuenta que cuando se luchó contra el terrorismo, el Estado ejecuto medidas y acciones inconstitucionales al nivel de haber sido denunciado y condenado por el propio sistema interamericano de protección de Derechos Humanos (corte interamericana de Derechos Humanos).

c) Una limitación jurisdiccional en el control de la delincuencia en función a la limitad acción de la ley en el ámbito practico.

d) Un débil procedimiento de control de la "condena" posterior a la emisión de la sentencia penal.

## **7. Diseño de una política criminal para los delincuentes**

A nuestro criterio, y está en función de la información que hemos utilizado en la presente investigación, consideramos que se deben tener en cuenta los siguientes aspectos en función al control antisocial de la delincuencia con el objeto de atender bajo los siguientes alcances.

a) Ponderar el desarrollo e integridad de las delincuentes función a su capacidad psicológica y nivel socio familiar, para así limitar su incorporación al mundo delictivo.

Ello implica la posibilidad de evaluar los casos en "Estado de Abandono" moral y material en el que se encuentran los delincuentes si su contexto socio familiar es sumamente complicado.

Nuestra propuesta parte si las entidades del Estado son conscientes que la familia y su contexto social resultan permisibles para que continúe una "línea de desarrollo delictivo".

Es una medida drástica pero que implica una acción positiva por parte del Estado, de lo contrario se mantendría el actual sistema punitivo contra la delincuencia que prácticamente no se desarrolla de forma eficaz. Desarrollar

un cuadro de criminalidad y de este modo el Estado y todas sus entidades podría tener información sobre:

- 1) El número de denuncias y la identificación de los delincuentes denunciados por robo, con la consiguiente información de la "reiteración" en este delito.
- 2) Evaluación de los "hechos" materia de investigación para así determinar el núcleo geográfico en el cual se ejecutan los mismos y también el nivel de "control" represivo del estado, sea en la participación de la policía o del poder judicial y ministerio público.
- 3) La evaluación del número de procesos y procedimientos seguidos contra los delincuentes, para así limitar la "cifra negra" en cuanto a la generación de este problema social, por cuanto consideramos que es nula la información en este punto negativo en la función del Estado, en su obligación de luchar contra dicha modalidad delictiva.

La gravedad de nuestra posición crítica, parte del hecho de que sin información se está legislando y por ello el Derecho penal finalmente resulta ineficaz en el control social de la delincuencia.

Estadística de control y rehabilitación en los centros penitenciarios principalmente para reorganizar los mismos y adaptarlos a nuestro enfoque que tutelen los derechos del menor en cuanto a la posibilidad de reinserción social o eventualmente al mejor control de sus actos criminológicos en función a su perfil delictivo.

La acumulación de toda la información precedente para generar un diagnóstico y así poder perfilar las acciones legislativas, a nivel del poder ejecutivo y también las que involucran al Poder Judicial y Ministerio Público.

Inclusive en las actuales circunstancias, la reducción de la edad para la imposición de condenas, no es una alternativa positiva por cuanto solo atiende el efecto "post delito" y no lo previene y genera la condición simbólica



del derecho penal a un contexto de intervención inmediata sin tener un carácter preventivo general.

## **8. Desarrollo de Nuestra Hipótesis**

En el presente capítulo de nuestra investigación parte del análisis de:

- a) La información bibliográfica que hemos recopilado, la cual si se toma en cuenta es actual, debido a nuestro acopio de datos en bibliotecas de diferentes universidades de la región.
- b) La información proveniente de medios de prensa, principalmente para “explicar” el contexto de la presión social sobre el problema social existente: La sobre el endurecimiento punitivo como alternativa de solución para enfrentar la incidencia delictiva.
- c) La información estadística generada por la lectura de las informaciones del INEI, principalmente las cuales las hemos desarrollado para enfatizar nuestro punto de vista.

Dicha realidad y también evaluación de algunos factores, conforme lo hemos señalado, nos ha permitido materializar la presente investigación y ha generado nuestra posición crítica en el manejo estatal del control punitivo de la delincuencia en nuestro país.

Consideramos en este punto, la necesidad entonces de plantear una alternativa desde el punto de vista académico con lo cual generaremos:

Nuestra posición final sobre el problema de la delincuencia y la necesidad de materializar una política criminal basada en la participación ciudadana y la necesidad de implementar una política criminógena basada en analizar las causas del delito.

## **9. Descripción de la hipótesis**

Ante la formulación de nuestra pregunta problematizadora, consideramos que una eventual respuesta positiva, explicativa y referencial, nos permitirá desarrollar la siguiente posición:

Los objetivos que persigue el modelo de la participación de la comunidad en la prevención del delito, tienen su fundamento en que la población de cada barrio o sector, conoce los medios de producción delictiva que se dan en su barrio, así como las personas que los cometen, lo cual facilitaría a la policía tener mayor eficacia en la vigilancia y control de dicha actividad delictiva; en este sentido, la participación comunitaria se convierte en un espacio propicio para afianzar los vínculos entre la población y el Estado con sus instituciones.

Asimismo en la reducción de los riesgos, la población local juega un papel importante, como es tomar medidas preventivas tales como la responsabilidad individual de cada ciudadano, ya que la policía, solamente puede combatir el crimen con mayor eficiencia si existe una cooperación estrecha y abierta con la población, esta división de las responsabilidades entre los individuos, la población y la policía, permite estrechar el riesgo y la fiabilidad en la población, lo que lleva a determinar que el riesgo puede reducirse, en la medida en que se alcanza una fiabilidad de la población en su institución policial; pues la policía, constituye el pilar fundamental para la represión de la delincuencia, en la manera, en que mantenga una relación estrecha entre el Estado, las instituciones públicas y las personas que conforman la sociedad.

Por otro lado desde un enfoque social el Estado debe ejecutar política en acciones de prevención social centradas en el potencial actual del infractor y debe tender a ayudarle a satisfacer sus necesidades esenciales y aspiraciones legítimas; facilitar su inserción familiar, escolar y profesional; reforzar los controles sociales informales en la familia y la escuela, desalentar

los agrupamientos criminales y esforzarse en dismantelar las bandas de delincuentes y luchar contra el abuso de alcohol y drogas.

La conjugación de estos elementos a nuestro criterio, permitirá reducir en primer lugar la delincuencia

Como se podrá observar, nuestra propuesta incide más en las acciones del Estado que en las propias reformas normativas aplicables a la delincuencia y por ello validamos nuestra propuesta en el ámbito de la materialización de una política criminal basada en la participación ciudadana y en una política criminológica enfocada a determinar las causas del delito, nos permite concluir que el endurecimiento punitivo para enfrentar la delincuencia es ineficaz.

## **CAPITULO VII: EVALUACIÓN METODOLÓGICA DE LA TESIS**

### **1. Diseño de Contrastación de la Hipótesis**

Nuestra hipótesis de trabajo conforme se desarrolla en el punto inmediato anterior será demostrado sobre el hecho particular de que el actual panorama criminológico en el ámbito Legislativo es ineficaz, al nivel de desarrollar un contexto sumamente perjudicial para el desarrollo de una política criminal en nuestro país.

Ante esta circunstancia, resultaría viable sostener un esquema de trabajo basado en la participación ciudadana y en una política criminológica basado en determinar las causas que originan el delito.

Con la materialización de nuestra propuesta (hipótesis) se trataría de solucionar un problema material que actualmente existe en nuestro país y que a la fecha lamentablemente no se ha observado una acción positiva de parte del Estado frente al problema social de la incidencia delictiva en nuestro país, con lo cual el incremento de exigencia social por parte de la población hace viable la formulación de acciones simbólicas por parte del Estado como es incrementando la pena respecto al delito de robo agravado, que en esencia no van a generar una consecuencia positiva, en la disminución del delito de robo agravado, nos permite señalar que las propuestas de incrementar las penas resulta ser puro populismo político, es decir no tienen un elemento objetivo que los respalde y por ello la importancia de nuestra propuesta en términos programáticos.

### **2. Universo de Estudio: Población y Muestra**

Estudiaremos el problema social de los delincuentes en la realidad nacional y siendo dicho ámbito de estudio, identificamos como “población”, los expedientes judicializados donde se haya obtenido Sentencia Condenatoria a Pena Privativa de la Libertad efectiva por parte del Primer y Segundo Colegiado Penal de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque durante los años 2014-2016 en la provincia de Chiclayo.

En función a ello evaluaremos teóricamente muchos de los elementos dogmáticos, conceptuales y referenciales vertidos sobre la problemática del endurecimiento punitivo para enfrentar la incidencia delictiva, para así construir una política criminal integral basada en la participación ciudadana y la implementación de una política criminológica basada en determinar las causas que originan el delito a fin de atender dicho problema social.

En este esquema de trabajo, nuestra “muestra” de trabajo será realizar un análisis de 102 expedientes donde se haya obtenido sentencia condenatoria a Pena Privativa de la libertad con carácter de efectiva por parte del Primer y Segundo Colegiado Penal de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque durante los años 2014-2016, por cuanto hemos observado que dicha realidad es similar a la que se presenta en otras realidades geográficas del país.

### **3. Análisis de las Variables e Indicadores Utilizados en la Investigación**

En la ejecución de nuestra investigación los elementos de estudio que hemos empleado son los siguientes.

#### **Variables independientes:**

- La legislación internacional sobre la Política Criminal.
- En el marco normativo nacional: el análisis de la constitución, el Código Penal, Código Procesal Penal (en cuanto a las referencias puntuales sobre el tema).
- Las políticas públicas aplicables por el Estado en la atención de problemas de carácter social, principalmente en el ámbito punitivo penitenciario y resocializador.
- El marco normativo de las políticas criminales de represión de actos delincuenciales, tanto en forma general como en forma especial y específica para algunos niveles de atención criminológica.

### **4. Nivel de Valoración del Maestrante en la Acreditación de la Información Administrada**

En la determinación de nuestro tema de tesis hemos considerado evaluar un aspecto basado los Expediente Judicializados donde se haya

obtenido sentencia condenatoria con carácter de efectiva por parte del Primer y Segundo Colegiado Penal de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque durante los años 2014-2016, ante la situación que atraviesa nuestro país, la misma que nos permite evaluar una “realidad localizada” en un ámbito limitado en lo geográfico y espacial que fácilmente puede ser extensible a la realidad nacional toda vez que este flagelo social se ha incrementado en los últimos años en el país de forma notoria.

De este modo, lo que hemos evaluado en la provincia de Chiclayo de modo directo, lo podemos observar en el ámbito de las noticias locales y prácticamente la situación es la misma.

Así podemos observar un nivel de relación existente entre una “realidad local” y “una realidad nacional” en los siguientes términos:

- Incremento de la incidencia delictiva.
- Elevado nivel de violencia que utilizan los delincuentes.
- Reducido alcance estatal en la lucha contra la delincuencia.
- Reducido impacto o limitado impacto en la función preventiva de la “pena” en un contexto normativo.
- Ausencia de medidas paralelas y complementarias en la lucha contra la delincuencia.

Con dicho panorama, consideramos que existe una debilidad institucional del Estado para afrontar dicho problema social y con ello también la desazón de la población.

## **5. Localidad e Institución Donde se Desarrolla el Proyecto.**

La investigación que planteamos en la presente tesis se basa en los expedientes judicializados donde se ha obtenido sentencias condenatorias a pena privativa efectiva por parte del Primer y Segundo Colegiado Penal de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque durante los años 2014-2016.

## **6. Materiales, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos.**

Toda vez que nuestra investigación tiene como principales elementos

de evaluación el de ser analítica y exploratoria consideramos que para la generación de los elemento de evaluación (variables) hemos utilizado.

#### **a) Información bibliográfica**

Utilizaremos libros vinculados a las especialidades del Derecho Constitucional, Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología que se relacionen con la temática propuesta a nuestro tema de estudio.

Por el análisis de la información teórica en la presente investigación, debemos incluir elementos de otras disciplinas a la especialidad penal, pero ello se hace solo a efectos de poder justificar nuestra investigación y se considerará como información referencial.

Igualmente haremos uso de las revistas especializadas que circulan en nuestro país, citándose en forma expresa el empleo de revistas jurídicas publicadas por las editoriales de Gaceta Jurídica del país.

#### **b) Información periodística y referencial en internet.**

- La información extraída, se desarrolla en dos niveles: Centro de investigaciones judiciales del Poder Judicial, por cuanto es ahí donde figuran elementos jurisdiccionales estadísticos que nos permitan obtener elementos de evaluación.
- En este punto debemos señalar que a pesar de haber ejecutado una labor de investigación pormenorizada, el tema de “endurecimiento punitivo para enfrentar la incidencia delictiva en nuestro país”, no es un factor evaluado en forma objetiva en la sistematización que ejecuta el propio Poder Judicial, debido a que lo afronta como un problema cotidiano.
- Datos periodísticos de los medios de prensa en donde evaluaremos los hechos que han provocado el impacto notorio de la población en la exigencia de medidas radicales para afrontar este problema social.

## **7. Métodos y Procedimientos para la Interpretación de datos.**

### **Métodos Jurídicos:**

- **Método Exegético.**-Por cuanto se efectuará una visión de las normas constitucionales, penales, procesal penal vinculado al análisis de los casos en los cuales se desarrolla el problema social de la delincuencia.

En este punto, analizaremos los alcances que contienen en el cuerpo normativo aplicable a nuestro estudio pero no lo limitaremos a una evaluación decimonónica por cuanto consideramos que sus alcances resultan limitados y no permiten el desarrollo de nuestro punto de evaluación: la generación de una verdadera política contra el problema de la delincuencia.

### **Métodos Científicos:**

- **Método Inductivo.**- sobre la base de la información obtenida, principalmente de contenido dogmática, evaluaremos el comportamiento procesal de los delincuentes en el seguimiento de un proceso penal, donde utilizan sobre todo la justificación de aplicar un procedimiento particular y especial que sancione los actos cometidos por los delincuentes.

La descripción de este elemento nos permitirá analizar puntualmente nuestro tema de investigación y por ello se hace la expresa mención de que nuestra intención no estará dirigida a desarrollar otro punto que no fuese el de una evaluación de la “delincuencia”.

- **Método Sociológico:** Principalmente para analizar el contexto social, cultural y material que rodea la actuación de los delincuentes y las diferentes causas que originan al delito.

- **Método histórico.**

En función a la evaluación de los expedientes judiciales en los cuales hemos participado profesionalmente y que nos permite desarrollar algunas hipótesis que resultan aplicables y extensibles a una realidad nacional.

En este punto, un factor secundario que ha motivado nuestro interés es el incremento de la delincuencia, que a nuestro criterio resulta ser una política



estatal de carácter populista toda vez que el incremento de las penas y la creación de nuevos tipos penales no ha traído una respuesta positiva frente la incidencia delictiva y lo que propondremos es desarrollar una política criminal basada en la participación ciudadana y en la combatir las cusas que originan el delito.

## **8. Análisis e Interpretación de Datos**

Todos los datos que se obtengan mediante la aplicación de las técnicas de recolección de datos que han sido aplicados a los informantes ya indicados, serán analizados e incorporados al trabajo de investigación como información relevante, que nos va a permitir contrastar nuestra hipótesis con la realidad.

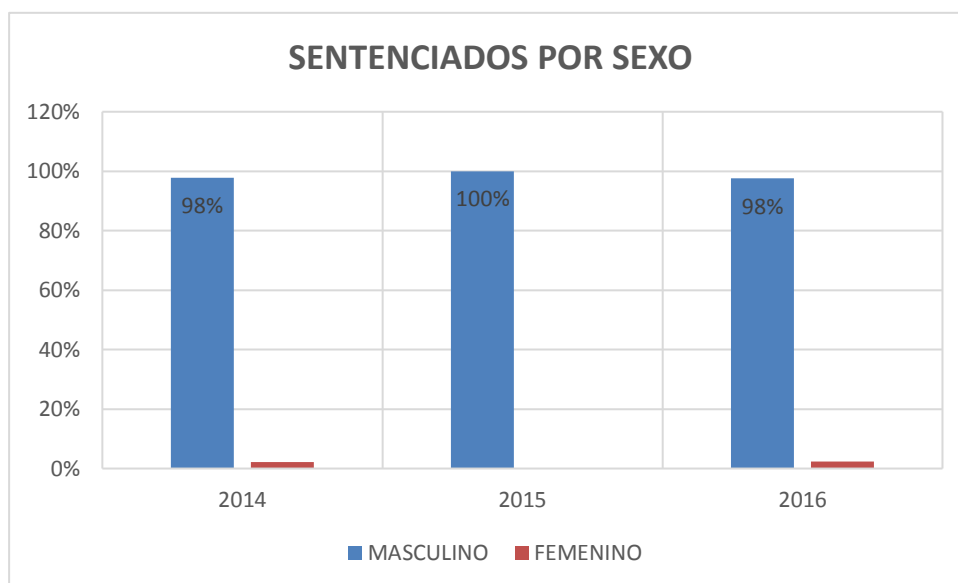
### **8.1. Resultados de los Expedientes Analizados sobre Robo Agravado.**

Se analizado 102 Expedientes del Primer y Segundo Colegiado Penal de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque donde se ha obtenido sentencia condenatoria a pena privativa de la libertad efectiva por robo agravado durante los años 2014,2015 y 2016.

<b>N°</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>1</b>	Exped.1946-2014	Exped.2535-2014	Exped.7751-2015-9
<b>2</b>	Exped.1888-2014	Exped.3393-2014	Exped.4506-2015-88
<b>3</b>	Exped.1043-2014	Exped.1989-2014-64	Exped.3640-2015-90
<b>4</b>	Exped.1488-2014	Exped.1299-2013	Exped.742-2015-45
<b>5</b>	Exped.1646-2014	Exped.294-2013-79	Exped.4920-2015-80
<b>6</b>	Exped.6331-2009	Exped.2017-2014-7	Exped.8262-2015-86
<b>7</b>	Exped.565-2014-6	Exped.7028-2012	Exped.2855-2010-10
<b>8</b>	Exped.2711-2013-15	Exped.3747-2014-70	Exped.5124-2015
<b>9</b>	Exped.3416-2012	Exped.4535-2014-40	Exped.449-2015
<b>10</b>	Exped.4740-2013	Exped.3368-2014-45	Exped.4299-2016
<b>11</b>	Exped.1954-2014-91	Exped.3538-2014-52	Exped.8509-2015-46
<b>12</b>	Exped.878-2014	Exped.3561-2014-10	Exped.3296-2014
<b>13</b>	Exped.7-2014-16	Exped.3390-2014-77	Exped.5919-2016

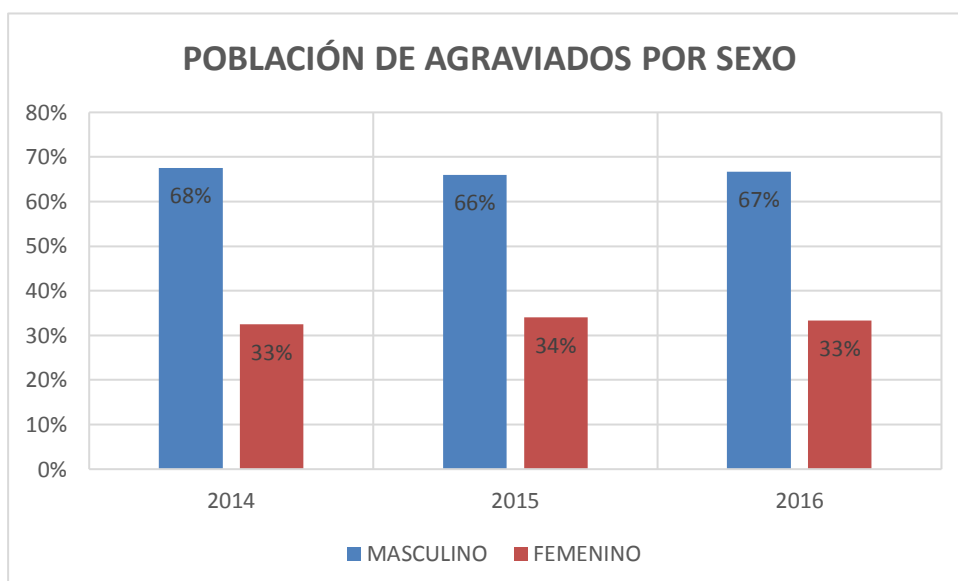
14	Exped.6538-2012	Exped.3877-2014-82	Exped.7749-2015-42
15	Exped.7329-2013-45	Exped.2006-2014-15	Exped.6982-2015
16	Exped.658 -2014	Exped.1986-2014-90	Exped.5813-2016-46
17	Exped.986-2014	Exped.2689-2011	Exped.507-2014-91
18	Exped.7271-2013-22	Exped.2021-2014-39	Exped.3078-2013-94
19	Exped.179-2014	Exped.5414-2013-53	Exped.1491-2013
20	Exped.6703-2013	Exped.3709-2014-48	Exped.2928-2013
21	Exped.232-2014	Exped.4456-2014-17	Exped.5516-2015-76
22	Exped.7290-2013	Exped.3905-2014-95	Exped.3824-2015-76
23	Exped.864-2014	Exped.5805-2014-24	Exped.3213-2011
24	Exped.659-2014	Exped.252-2014-28	Exped.6663-2013
25	Exped.311-2012	Exped.4398-2014-62	Exped.8339-2016
26	Exped.6537-2013-12	Exped.5845-2014-52	Exped.7614-2015-76
27	Exped.6876-2013	Exped.4454-2014-89	Exped.2510-2013-41
28	Exped.6813-2012-30	Exped.6041-2014-21	Exped.7547-2012-79
29	Exped.6690-2014	Exped.5621-2014-7	Exped.2781-2016
30	Exped.1662-2014	Exped.3837-2012-69	Exped.8261-2015-86
31	Exped. 4489-2013	Exped.2975-2011-32	Exped.4651-2015-11
32	Exped.4814-2014-56	Exped.6594-2014-7	Exped.7278-2015-87
33	Exped.5127-2013-86	Exped.2653-2013-65	Exped.4054-2016
34	Exped.3424-2013-63	Exped.1979-2014-35	Exped.743-2015-38

## 8.2. GRÁFICO N° 1



En el **gráfico N°1** se aprecia que en el año 2015 los sentenciados por el delito de robo agravado son de sexo masculino el 100%; asimismo en el año 2014 y 2016 los sentenciados por robo agravado el 98% son de sexo masculino y sólo el 2% son de sexo femenino, Estos datos reflejan que son las personas de sexo masculino con mayor potencial de incurrir en el delito materia de análisis.

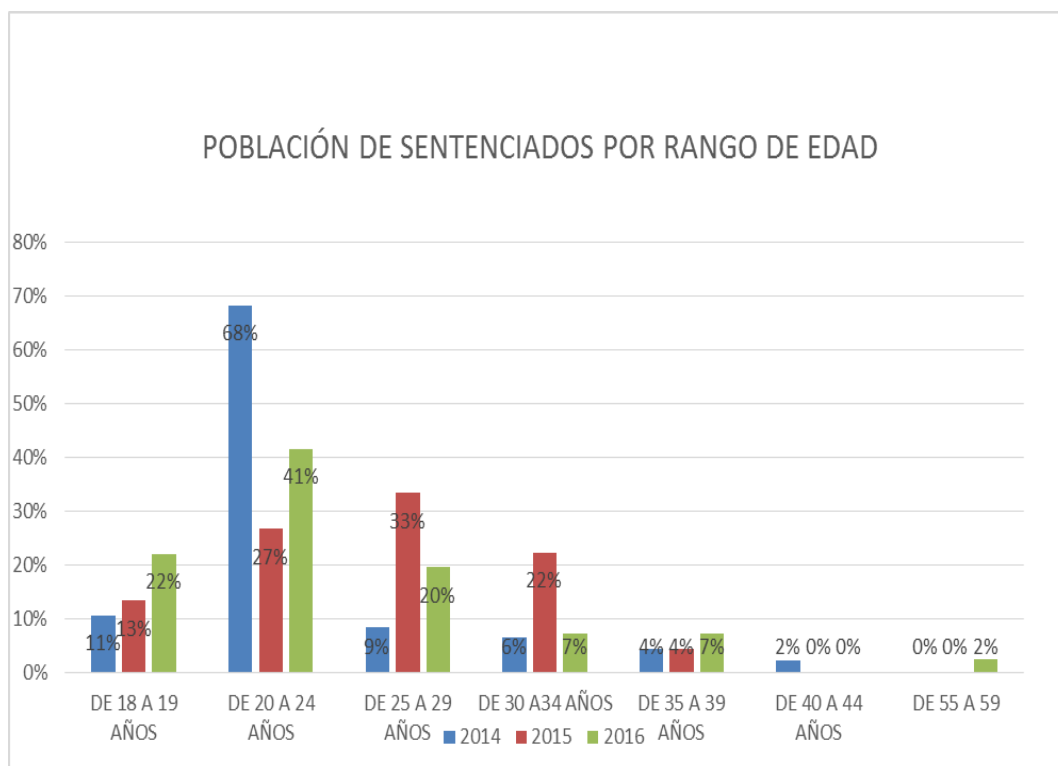
### 8.3. GRÁFICO N° 2



Del **gráfico N° 2** se advierte que en los años 2014,2016 y 2015 el 68%,67% y 66% de los agraviados de robo agravado son de sexo masculino; asimismo se

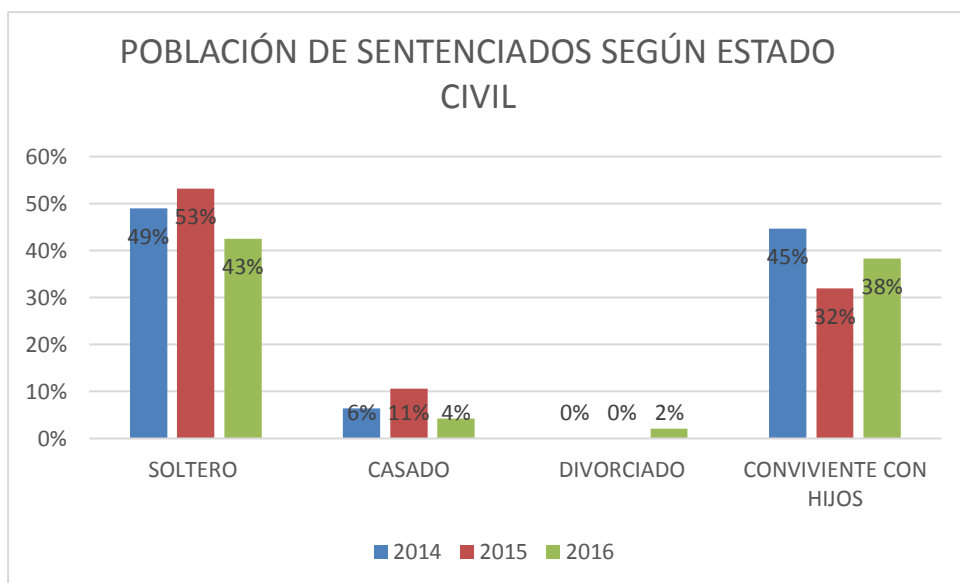
aprecia que el 34%,33% y 33% en el 2015, 2014 y 2016 respectivamente de los agraviados son de sexo femenino. Estos datos reflejan que son las personas de sexo masculino con mayor porcentaje de vulnerabilidad de ser víctimas de delito de robo agravado.

#### 8.4. GRÁFICO N°3



Otra característica importante son los rangos por edad; la mayoría de los sentenciados tienen las edades de 20 a 24 años, rango que constituye el 68% y 41% de los sentenciados en el 2014 y 2016 respectivamente; finalmente del gráfico se aprecia que en el 2015 la mayoría de los sentenciados tienen las edades entre 25 a 29 años de edad lo que constituye el 33% de la población de sentenciados. Estos datos reflejan un perfil joven del sentenciado lo cual representa una significativa cantidad de personas en edad productiva imposibilitadas de ejercer actividad económica.

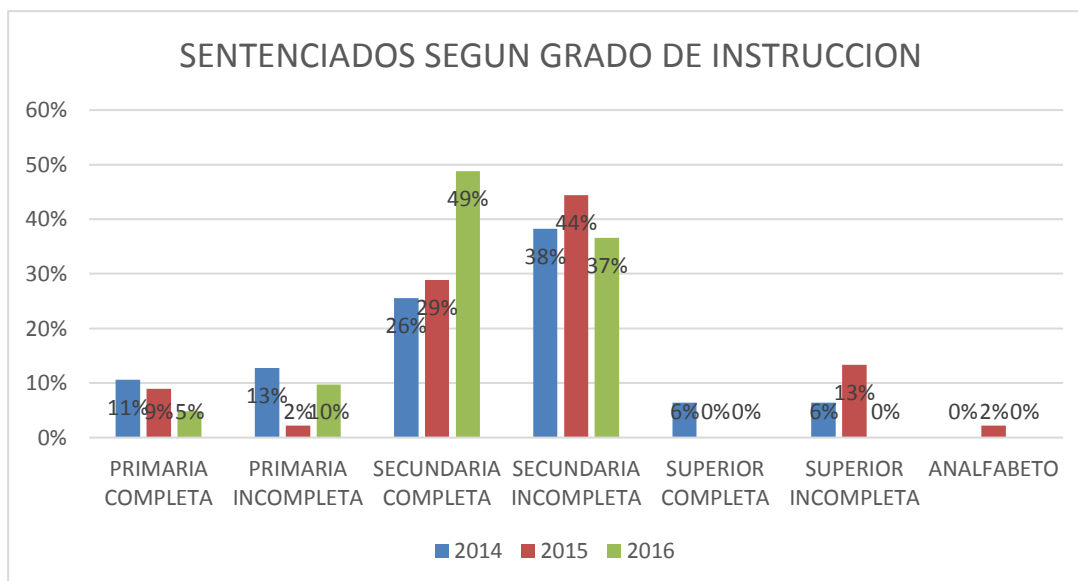
### 8.5. GRÁFICO N° 4



En el gráfico N° 4 se aprecia que los sentenciados por robo agravado según estado Civil:

- **Solteros** constituyen el 53%,49% y 43% en el año 2015, 2014 y 2016 respectivamente.
- **Conviviente con hijos** se advierte que el 45%,38% y 32% en el año 2014,2016 y 2015 respectivamente; asimismo se aprecia que los sentenciados de estado civil casado y divorciado representan un bajo porcentaje dentro del gráfico de las cifras de los sentenciados por delito de robo agravado según estado civil; estos datos demuestran que son las personas solteras con mayor porcentaje del total de los sentenciados por robo agravado que ingresan al Establecimientos Penitenciario.

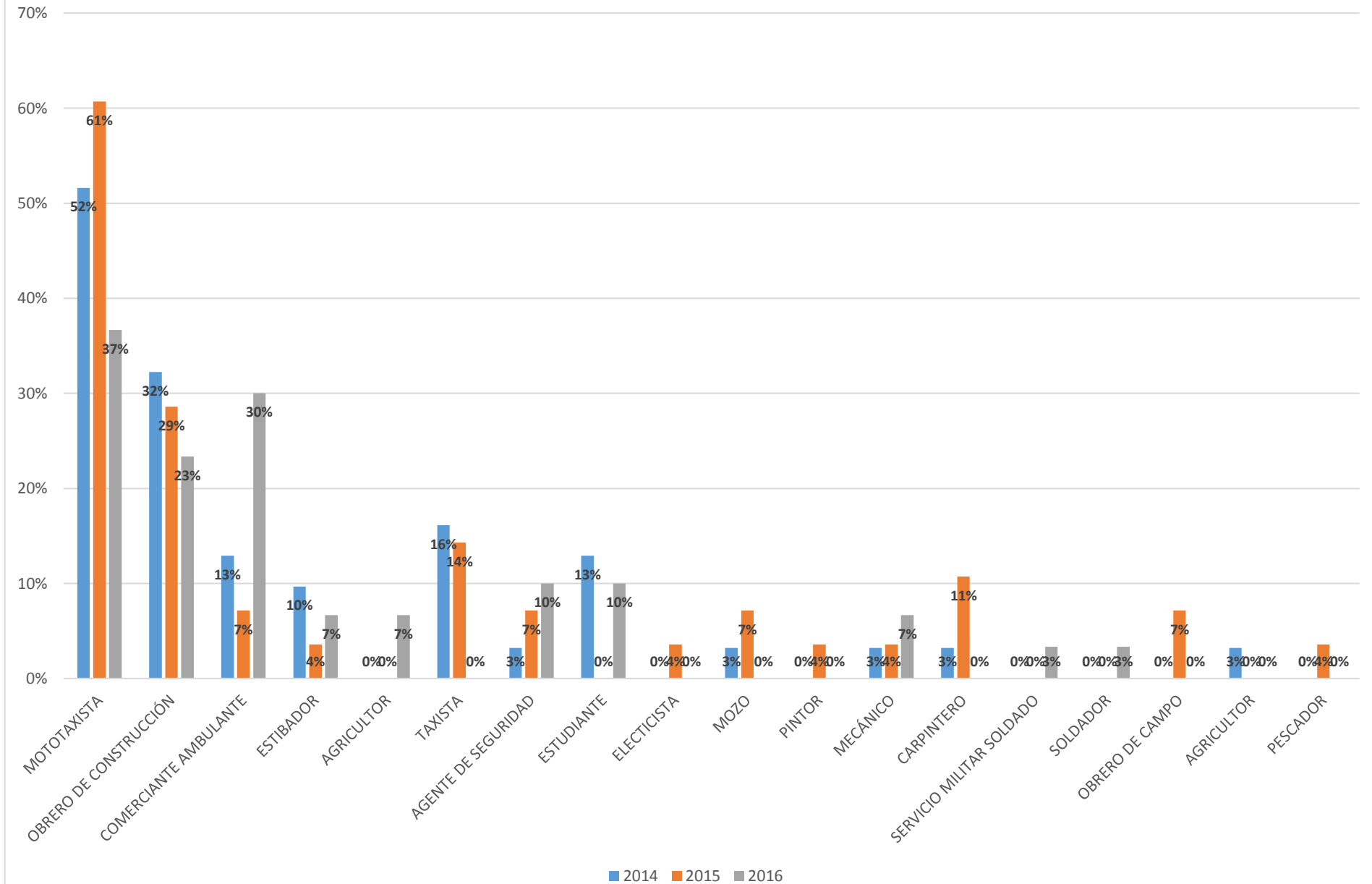
## 8.6. GRÁFICO N° 5



Los sentenciados por delito de robo agravado por grado de instrucción, releva que el 49% de los sentenciados se agrupan en aquellos con secundaria completa en el año 2016 y el 44% y 38% en los años 2015 y 2016 respectivamente, con grado de instrucción secundaria incompleta; Estos datos evidencian que la gran mayoría de internos no supera el nivel de instrucción secundario, situación que describe como una de las causales la deserción escolar; asimismo esta Información nos muestra la relación entre nivel educativo y la población que ingresa al establecimiento penitenciario.

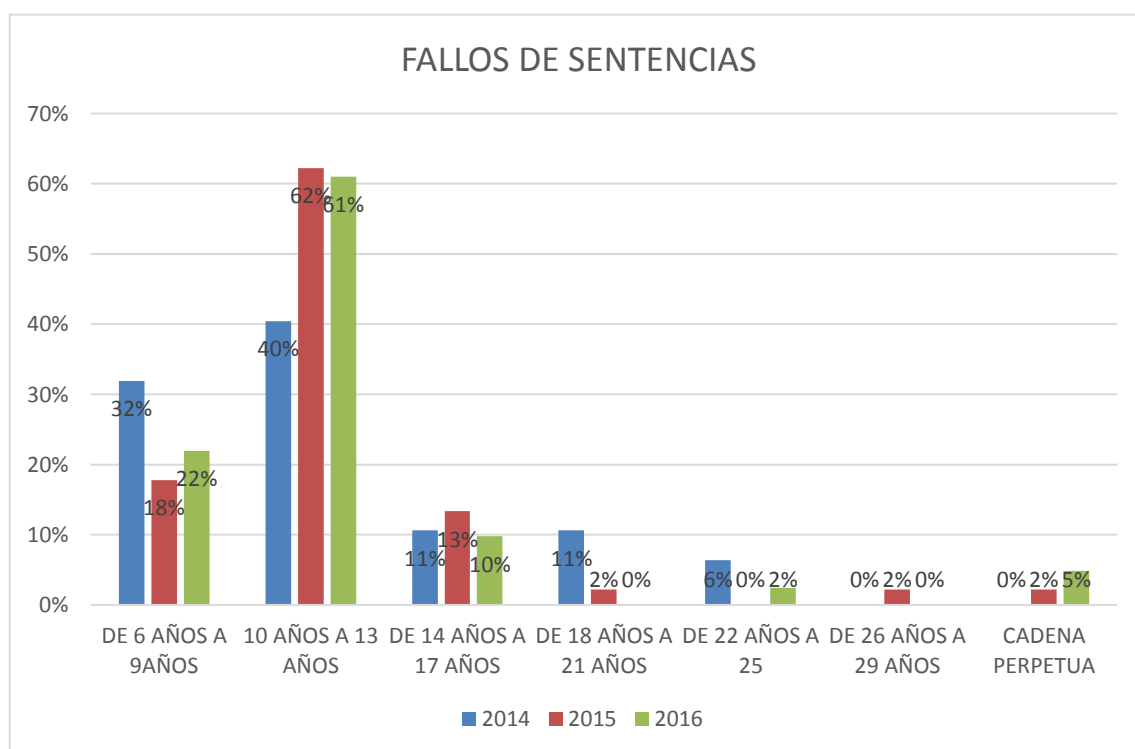
## 8.7. GRÁFICO N° 6

## SENTENCIADOS POR ROBO AGRAVADO SEGÚN OCUPACIÓN



Los sentenciados por robo agravado según ocupación se advierte que el 61%,52% y 37% en los años 2015,2014 y 2016 se dedicaba al momento de ser sentenciados como mototaxistas y seguido de los obreros de construcción civil y comerciante ambulante. Se colige que las ocupaciones y/o oficios más palpables se encubren dentro de las ocupaciones y/o oficios antes precisados es decir son las más fáciles para poder cometer el ilícito penal analizado; esta Información nos muestra la relación entre nivel educativo y las ocupaciones que desempeñaban los procesados antes de ser sentenciados.

### 8.8. GRÁFICO N° 7

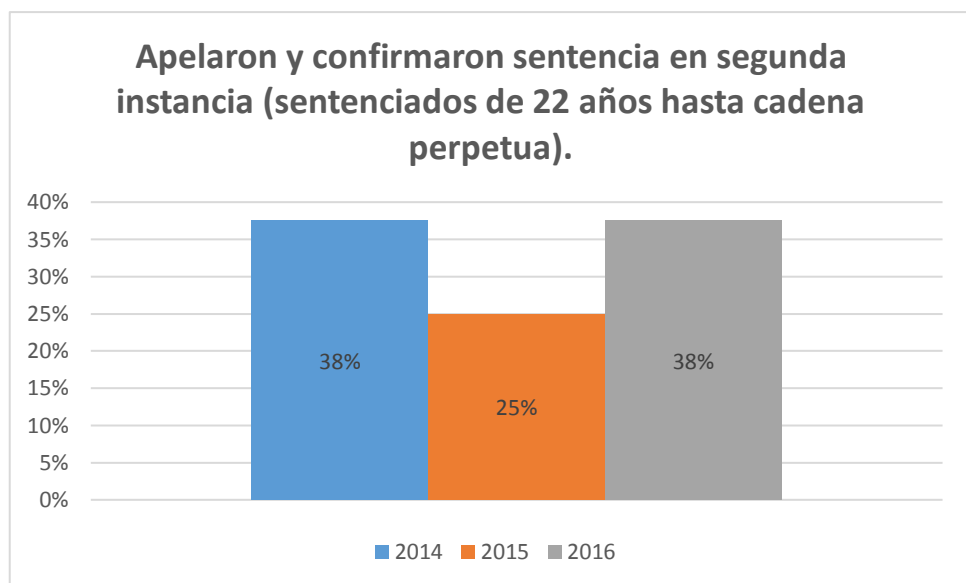


En el Gráfico N°7 se aprecia que los fallos emitidos por Primer y Segundo Colegiado Penal de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque por robo agravado y se advierte que la mayoría de las penas fijadas son entre 10 a 13 años de pena privativa de la libertad efectiva, representando un 62%,61%y 40% de los años 2015,2016 y 2014 respectivamente, del cual se aprecia que en la mayoría de los sentencias durante los años analizados han sido fijadas dentro del primer tercio de acuerdo al Sistema Sustantivo Penal es decir que los

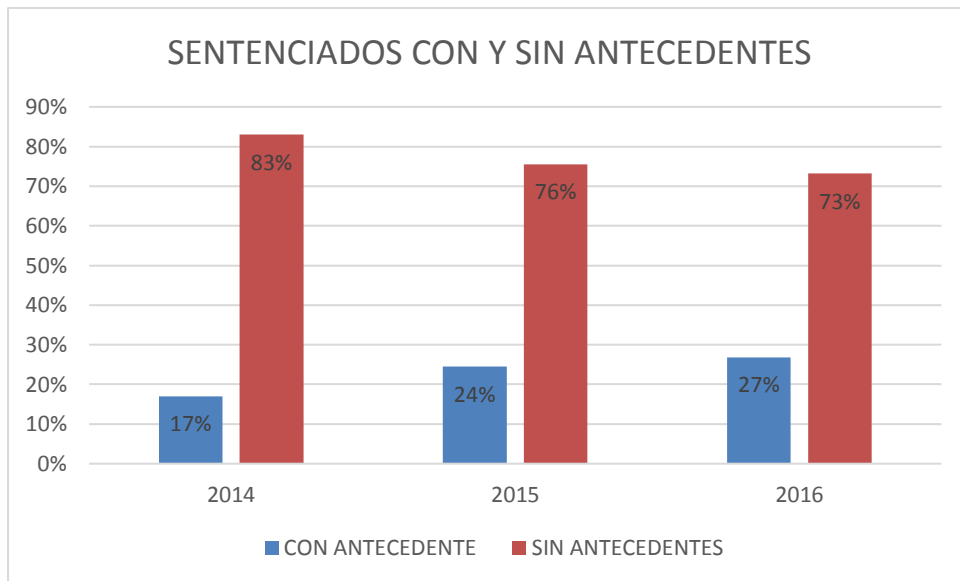


sentenciados constituyen en mayor porcentaje sentenciados contaban sólo con atenuantes genéricas, formando el mayor porcentaje del grupo de reos primarios en el Establecimiento Penitenciario.

Asimismo en el presente gráfico que a continuación mostramos podemos advertir que todos los sentenciados a 22 años hasta cadena perpetua por delito de robo agravado en los años analizados; de los 8 sentenciados durante los años 2014 -2016 a dichos años haciendo un 38% en el 2014, un 25% en el 2015 y un 38% en el 2016, siendo que el 100% de los sentenciados que han apelado a los fallos emitidos en primera instancia, los mismos que han sido confirmados en segunda instancia.

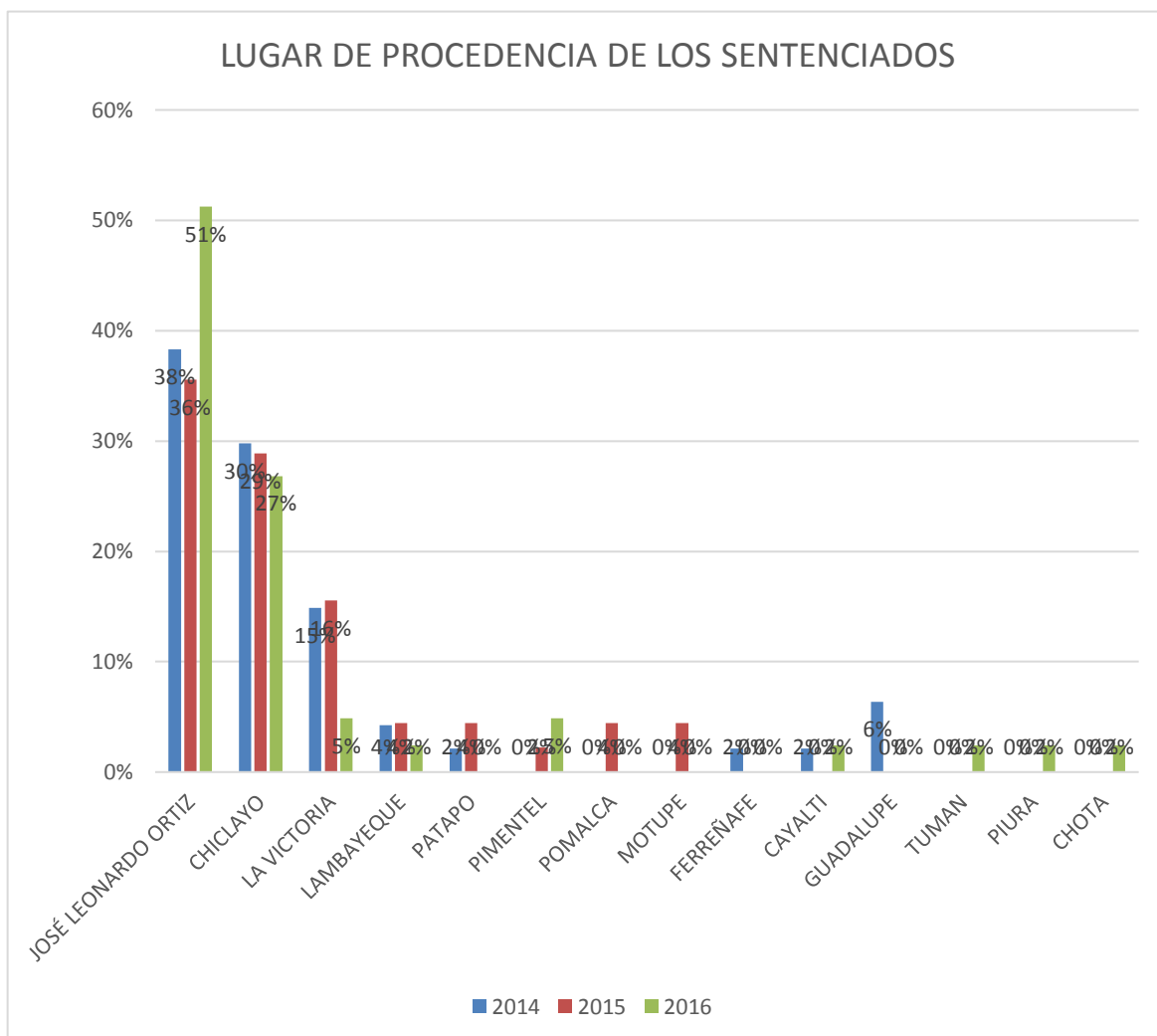


### 8.9. GRÁFICO N° 8



En gráfico N° 8 se advierte que los sentenciados por robo agravado el 83%,76%,73% durante los años 2014,2015 y 2016 respectivamente lo constituye los sentenciados que no cuentan con antecedentes penales y finalmente el 17%, 24%,y 27% durante los años 2014,2015,y 2016 respectivamente representan los sentenciados con Antecedentes Penales, este gráfico se corrobora con el gráfico N° 8, en el cual se advierte que los fallos emitidos por los colegiados se encuentran dentro del primer tercio es decir aquellos que al momento de ser sentenciados solo contaban con atenuantes genéricas.

## 8.10. GRÁFICO N° 9



En el gráfico N° 9 se aprecia el lugar de procedencia de los sentenciados por robo agravado siendo el distrito de José Leonardo Ortiz con el 51%, 38% y 36% durante los años 2016, 2014 y 2015 respectivamente, y muy seguido de los distritos de Chiclayo y la Victoria, esto demuestra la ineficacia de una Política Criminal, implantada por el Estado, y las deficiencias de las autoridades para combatir la inseguridad ciudadana en el distrito de José Leonardo Ortiz.

## **CONCLUSIONES**

### **Principal:**

Se ha demostrado que la Política Criminal hasta hoy implementada para combatir la incidencia delictiva del delito de Robo Agravado versa especialmente sobre la Punición, la misma que ha fracasado de tal forma que las medidas represivas principalmente el Derecho Penal concebido como la medida más rígida del control social, debe ser la última opción dentro de una Política Criminal, y no la única para enfrentar dicho delito, toda vez que se transgrede el principio de intervención mínima, debiendo buscar otras alternativas de prevención basado en todo un conjunto de acciones y estrategias no penales que involucran al sector educativo, cultural, social, sanitario, económico, y político a cargo de las diferentes dependencias gubernamentales, así como la participación ciudadana, que forma parte del control social institucionalizado no punitivo o de una política criminológica de medidas no penales, que atienden a las causas de la incidencia delictiva del delito de Robo Agravado y no a los efectos.

### **Específicas:**

1. Del estudio realizado a La Política Criminal, se advierte que cumple un rol fundamental en el proceso de criminalización, especialmente en el diseño y formulación de las leyes penales que tienen como objeto la prevención y el control de la criminalidad; sin embargo, en nuestro país dicha intervención estatal es exclusivamente punitiva, y no reúne aspectos de prevención, contención, resolución, tratamiento, de fenómeno delictivo, que en un Estado de Derecho deben corresponder con los principios Constitucionales como: la legalidad, igualdad y respeto de la dignidad humana de las personas, así como el respeto de los derechos fundamentales y las normas internacionales.
2. Del análisis realizado a las teorías de la pena se concluye que la teoría de la unión busca una síntesis entre la teoría absoluta y la teoría relativa, y sostiene que en la realidad la pena cumple fines preventivos generales y fines especiales y en su concepción estos dos fines son interdependientes es decir que la

prevención especial no puede llevarse a cabo sin la prevención general, ni la prevención general sin la prevención especial; y no toma en cuenta la prevención general intimidatoria ni la prevención especial inoculizadora; sin embargo, nuestro ordenamiento jurídico penal no se evidencia que la pena cumpla fines preventivos generales toda vez que el Estado no da prioridad a la prevención general del delito es decir no busca las causas que generan el delito, solo prioriza los efectos del delito; por el contrario se busca establecer penas severas como la posibilidad de cadena perpetua para el delito de robo agravado lo cual imposibilita a los sentenciados puedan cumplir con los fines de la pena.

3. Se ha analizado que la medición del crimen tiene por función dar a conocer la extensión del fenómeno criminal. Lo cual constituye un insumo principal para la elaboración de políticas públicas, especialmente de aquellos concernientes a la política criminal; sin embargo, en el Perú los sistemas estadísticos se concentran en los registros administrativos, los mismos que siguen diseños metodológicos propios, y evidencian una falta de coordinación entre ellos, por otro lado existe una ausencia de información de fuente directa es decir nos brindan una visión parcial del fenómeno delictivo. En tal sentido, resulta indispensable que iniciativas como las del Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad o el Sistema de Estadísticas Integradas para la Criminalidad, adquieran un rol activo en la producción y análisis prospectivo de información cualitativa y cuantitativa que permitan una mejor toma de decisiones para los encargados de diseñar la Política Criminal en el País.

4. Se analizado que la política criminal del Estado peruano aplicada al delito de robo agravado influye de manera decisiva en la percepción de inseguridad que experimentamos los ciudadanos. En tal sentido, con el objetivo declarado de desincentivar la comisión de dicho delito, se incrementó las penas, se incorporaron circunstancias agravantes específicas y se suprimieron beneficios penitenciarios; y cuyos proyectos de ley revisados no cuentan con información empírica criminológica entorno a sus causas y/o descripción de la dinámica del Fenómeno Criminal que se plantea modificar; sin embargo, a pesar del

endurecimiento punitivo, ha fracasado en el objetivo de controlar la prevalencia de dicho delito y de la inseguridad ciudadana, la idea de que el criminal sienta algún “temor” proveniente de la ley penal sea en la forma de tipo o del quantum de la pena, produce un contexto social de neo criminalización en el que se asientan fenómenos expansivos como el llamado “Derecho Penal Simbólico” y el “resurgimiento del puro punitivismo” al estilo medieval.

5. Se ha demostrado que la participación ciudadana es el eje central de todo programa de prevención del delito, pues mediante ésta se diseñan y ejecutan soluciones más eficaces en el problema de inseguridad pública; sin embargo no quiere decir que ampliando estrategias de prevención del delito como el enfoque situacional, social y prevención comunitaria sea la solución al problema pues únicamente constituye parte de un conglomerado de estrategias tanto preventivas como represivas de una política criminal Integral, a fin de lograr una exitosa participación ciudadana en la prevención del delito, por otro lado se tiene que en nuestro país no se evidencia una cultura jurídica, es decir tenemos una sociedad que no colabora en la comunidad a fin de poder identificar los problemas sociales que aquejan a nuestra sociedad.

6. Se ha determinado de la estadística como resultado que las personas que delinquen provienen de pueblos jóvenes es decir de los lugares marginales y los sentenciados por robo agravado durante los años 2014-2016 lo constituye los que tienen ocupación de mototaxistas con el 61%,52% y 37% y muy seguido de los obreros de construcción civil con 32%,29% y 23%; situación que evidencia que dichas ocupaciones en el cual se desempeñaban antes de ser sentenciados, constituían las formas más frecuentes de cometer actos delictivos como el delito de robo agravado. El 44%,38% y 37% de los años analizados cuentan con secundaria incompleta, cuya información nos muestra que la mayoría de los sentenciados respecto al nivel educativo no supera el nivel de instrucción secundaria, situación que describe como una de las

causales la Deserción escolar de los sentenciados que ingresan a los Establecimientos Penitenciarios.

## **RECOMENDACIONES**

1.Considero necesario la transición de una política penal meramente sancionadora a una política criminológica, que busque solucionar la raíz del problema, es decir, las causas que inducen a la persona a delinquir, a través de medidas preventivas; es decir incentivar la participación ciudadana, dirigida a la comprensión de las causas de la delincuencia y la reducción de los factores de riesgo, a través del control social de las organizaciones encargadas de administrar la violencia legítima; por otro lado profundizar en el tema de las penas alternativas a la prisión preventiva, atender el sistema penitenciario diferenciándolo de la función policial y dedicando más recursos al tratamiento y reinserción de los internos; asimismo, se debería implementar una política criminal integral, basada en la prevención y tratamiento del fenómeno delictivo, y exigir el respeto al principio de legalidad, que tiene su origen en el estado de derecho.

2.Es imprescindible el replanteamiento de una Política Criminal en nuestro país, ya que cumple un rol fundamental en el proceso de criminalización, especialmente en el diseño y formulación de las leyes penales que tengan como objeto la prevención y tratamiento, del fenómeno delictivo, y considero que debería haber una relación con la criminología moderna ya que a través de esta disciplina se tendrá conocimiento de las causas que originan la criminalidad y a través de la política criminal puede establecerse el campo para atacar la problemática a través de un tratamiento adecuado.

3. El Estado debería dar prioridad a la prevención general del delito es decir buscar las causas que generan el delito, dejando de lado las finalidades preventivas intimidatorias y preventivo especiales inoculadoras, pese a estar prohibidas en nuestro sistema, estas se dan en nuestra realidad, las mismas que hacen que los sentenciados no puedan cumplir con los fines de la pena.



4. Se debería implementar un sistema integral de información sobre la criminalidad el mismo que permita el diseño de una adecuada política criminal y así poder medir el crimen en un espacio tiempo espacial concreto que permita cuantificar el fenómeno criminal que afecta a nuestra sociedad y sobre todo permitiría para un adecuado diseño de políticas públicas coherentes y eficaces orientadas a la prevención y control del delito en materia de seguridad.

5. Recomiendo que para la elaboración de leyes respecto al delito de robo agravado dichos proyectos de leyes deben realizarse cumpliendo la fase pre legislativa es decir se debe contar con un diagnóstico que identifique las causas que generan esta falta de correspondencia entre la legislación vigente y la realidad actual y que justifique su modificación las mismas que no aparecen en la mayoría de los proyectos de ley que dieron origen a las modificaciones a las modalidades simples y agravadas del delito de robo.

6. Se debe mejorar la relación entre la comunidad y la autoridad, específicamente con la policía, quien es el representante más cercano de dicha autoridad, con el fin de crear lazos de respeto y cooperación entre ambos, principalmente en el diseño de las estrategias para prevenir el delito que deben responder a las necesidades de la sociedad, pues muchas veces las prioridades del Estado no son las de la sociedad, lo que evidencia su fracaso; asimismo, ejercer mayor control sobre la autoridad vigilando su actuar a así permitir una prevención del delito más eficaz, Es conveniente fomentar la creación de espacios de diálogo entre los diversos niveles de gobierno (local, regional y central) a fin de identificar las reales necesidades que aquejan nuestro país, y establecer políticas de prevención efectivas contra la criminalidad, tales como elaborar políticas transversales y participativas abarcando diferentes ámbitos sociales con énfasis en la igualdad de oportunidades.

7. Un cambio a los resultados estadísticos realizados estaría albergada en el ámbito educativo (transformar la educación en un espacio propicio para el desarrollo de los jóvenes en donde estos puedan ser partícipes de su proceso

de desarrollo o proyecto de vida, enfocar esfuerzos en disminuir el ausentismo y deserción escolar así como desarrollar políticas agresivas de empleo para los y las jóvenes que incursionan en el sector laboral y finalmente ahondar en la construcción de valores tales como la tolerancia y respeto a la diversidad), tal y como lo concibe los sustitutivos penales de Enrico Ferri, la inversión, el planeamiento. De este modo, se difundirían mayores programas de inculcación de valores y principios a personas de menor a mediana edad, comprendiendo entre ellos, a potenciales criminales deseosos de iniciarse en la carrera criminal.

## BIBLIOGRAFÍA

- ACUERDO NACIONAL. (2014). *"Consensos para enrumbar al Perú"* (Primera ed.). Lima.
- AMAYA COBAR, E. (2003). *"Bases para la discusión sobre Política Criminal Democrática"* (1° ed.). San Salvador: FESPAD.
- ANIYAR CASTRO, L. (5 de Abril de 2005). "Participación Ciudadana prevención y sentimiento de inseguridad. los comitesvecinales de seguridad publica: una experiencia exitosa".
- ANUARIO DE DERECHO PENAL. (2010). "Sistemas de Control Penal y Diferencias Culturales". *"Anuario de Derecho Penal"*.
- BERMÚDEZ TAPIA, M. (Mayo de 2007). "La Fragilidad de la Política Criminal y los derechos fundamentales en el Sistema Penitenciario peruano". *REVISTA LATINOAMERICANA DE SEGURIDAD CIUDADANA*(1), 31-37.
- BINDER, A. (2010). "La Política Criminal en el Marco de las Políticas Públicas: Bases para el analisis Político Criminal". *REJ- Revista de Estudios para la Justicia*, 213-229. Recuperado el 2 de Junio de 2017, de <http://www.rej.uchile.cl/index.php/RECEJ/article/viewFile/15236/15649>
- BONILLA, D. (2015). *"Percepción de Inseguridad en un barrio enrejado del Distrito del Rímac, Lima. Miedo al Crimen y Desorden Social"*. Lima: PUCP.
- BORJA JIMÉNEZ, E., BINDER, A., & ZUÑIGA RODRÍGUEZ, L. (2010,2003,2001).
- BRANDARIZ GARCÍA, J. Á. (2014). *"El Gobierno de la Penalidad. La Complejidad de la Política Criminal Contemporánea"* (1° ed.). Madrid, España: DYKINSON.
- BRAVO ALARCÓN , F. (2015). "La evaluación de la ley en el Perú: ¿Pueden las leyes dejadas a su suerte contribuir a una cultura de la legalidad? VIII Congreso Virtual de la Red de Investigadores Parlamentarios en línea". (págs. 1-11). México: REDIPAL. Recuperado el 03 de Mayo de 2017, de <http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/redipal/CRV-VIII-30-%2015.pdf>
- BRICEÑO, A. (14 de Agosto de 2016). "Confirman actos ilegales de supuesto "Escuadrón de la Muerte". pág. 1. Recuperado el 17 de Julio de 2017, de <http://elcomercio.pe/lima/confirman-actos-ilegales-supuesto-escuadron-muerte-247208>
- BUSTOS RAMÍREZ, J. (1986). "Las Funciones de la Policía y la Libertad y Seguridad de los Ciudadanos. *NUEVO FORO PENAL*(32). Recuperado

el 15 de Marzo de 2017, de  
[https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/articulos/a\\_20080521\\_40.pdf](https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/articulos/a_20080521_40.pdf)

BUSTOS RAMÍREZ, J. (1987). *"Control Social y Derecho Penal"* (2° ed.). Barcelona.

BUSTOS RAMÍREZ, J. (1989). *"Derecho Penal Parte General"* (3° ed.). Barcelona: ARIEL S.A.

BUSTOS RAMÍREZ, J. (1997). *"Lecciones de Derecho Penal"* (Vol. I). Madrid, España: TROTТА.

BUSTOS RAMÍREZ, J. (2005). *"Obras Completas"*. Lima: ARA Editores.

CAMARGO HERNÁNDEZ, C. (1964). *"Introducción al Estudio del Derecho Penal"*. Madrid, España: BOSCH.

CASTILLO CÓRDOVA, L. (2007). *"Los Derechos Constitucionales (Elementos para una teoría General)"*. Lima: PALESTRA.

CORBACHO, A., PHILIPP, J., & RUIZ VEGA, M. (Junio de 2015). "Crime and Erosion of Trust: Evidence for Latin América". *World Development*, 70, (400-415). Recuperado el 4 de Mayo de 2017, de <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X14001211>

CUELLO CONTRERAS, J. (2002). *"El Derecho Penal Español Parte General"*. Madrid, España: DYKINSON.

CHINCHILLA MIRANDA, L. (2008). *"La Prevección comunitaria del delito: perspectivas para América Latina"*. México.

DAMMERT, L., SALAZAR, F., MONTT, C., & GONZALES, P. A. (2010). *"Crimen e Inseguridad: Indicadores para las Américas"*. Banco Interamericano de Desarrollo. Santiago de Chile: FLACSO. Recuperado el 12 de Diciembre de 2016, de [https://www.vanderbilt.edu/lapop/news/FLACSO\\_on\\_crime.pdf](https://www.vanderbilt.edu/lapop/news/FLACSO_on_crime.pdf)

DE BELAUNDE DE CÁRDENAS, A. (2015). "Seguridad Ciudadana y Gobiernos Locales: El Caso de la Municipalidad". *Revista de Gobierno y Gestión Pública*, 2, (1-18). Recuperado el 28 de Octubre de 2016, de <http://www.revistagobiernoydegestionpublica.com/index.php/REVIGGP/article/view/17/34>

DEL VALLE MARTINEZ, A. (2004). *"La transición democrática en los cuerpos de seguridad Pública: Participación Ciudadana y Derechos Humanos"*. México: Gernika.

DELMAS MARTY, M. (1986). *"Modelos Actuales de Política Criminal"*. Madrid, España: Ministerio de Justicia.

- DÍEZ RIPOLLÉS, J. (19 de Mayo de 2004). "El Nuevo Modelo Penal de Seguridad Ciudadana". *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, 34. Recuperado el 23 de Febrero de 2017, de <http://criminet.ugr.es/recpc/06/recpc06-03.pdf>
- DÍEZ RIPOLLÉS, J. (2007). *"La Política Criminal en la Encrucijada"* (Primera ed.). Valencia, España.
- DÍEZ RIPOLLÉS, J. (22 de Junio de 2008). "La Política Legislativa Penal iberoamericana en el cambio de siglo: una perspectiva comparada(200-206)". *Política Criminal*, 37. Recuperado el 22 de Julio de 2017, de [http://www.politicacriminal.cl/n\\_06/a\\_7\\_5.pdf](http://www.politicacriminal.cl/n_06/a_7_5.pdf)
- DÍEZ RIPOLLÉS, J. (29 de Noviembre de 2011). "La Dimensión inclusión/exclusión social como guía de la Política Criminal Comparada". *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*"(13-12), 36. Recuperado el 14 de Diciembre de 2016, de <http://criminet.ugr.es/recpc/13/recpc13-12.pdf>
- DÍEZ RIPOLLÉS, J. L. (2013). *La Racionalidad de las leyes penales. Teoría y Práctica*. Madrid: TROTTA.
- El Comercio. (15 de Abril de 2016). "Callao:Amplian por tercera vez el Estado de Emergencia". Recuperado el 14 de Julio de 2017, de <http://elcomercio.pe/lima/callao-amplian-tercera-vez-emergencia-188006>
- FEIJÓO SÁNCHEZ, J. B. (s.f.). "Las teorías clásicas de la Pena". *Revista Peruana de Ciencias Penales, "Edición especial sobre el Código Penal Peruano"*(11).
- FOMENTO, C. A. (2014). "Por una América Latina más segura: Una nueva perspectiva para prevenir y controlar el Delito". (CAF, Ed.) *RED Reporte de Economía y Desarrollo*, 1-272. Recuperado el 19 de Marzo de 2016, de <http://publicaciones.caf.com/media/40777/reporte-economia-desarrollo-seguridad-control-delito.pdf>
- GARCIA PABLOS DE MOLINA, A. (2008). *"Criminología Fundamentos y Principios para el Estudio Científico del delito, la Prevención de la Criminalidad y el Tratamiento del Delincuente"*. Lima: Fondo Editorial Instituto Peruano de Criminología y Ciencias Penales".
- GARLAND, D. (2009). *"La Cultura del Control: Crimen y Orden Social en la sociedad Continental Contemporánea"*. (M. SOZZO, Trad.) Barcelona, España: GEDISA.
- HARO CARRANZA , J. (2012). "Análisis Costo Beneficio: Sincerando las propuestas Legislativas en el Perú". *Cuadernos Parlamentarios*, 1-17.

Recuperado el 01 de Junio de 2017, de [http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4\\_uibd.nsf/C4CFBCAF C63077AD05257ED5006EB981/\\$FILE/15\\_pdfsam\\_1ra.Edicion\\_Cuadernos\\_Parlam\\_Final.pdf](http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/C4CFBCAF C63077AD05257ED5006EB981/$FILE/15_pdfsam_1ra.Edicion_Cuadernos_Parlam_Final.pdf)

HASSEMER, W., & MUÑOZ CONDE, F. (2012). *Introducción a la Criminología y a la Política Criminal*. Valencia, España: TIRANT LO BLANCH.

HEGEL, G. W. (1975). *"Principios de la Filosofía del Derecho"*. (J. L. VERNAL, Trad.) Buenos Aires, Argentina: SUDAMERICANA.

HURTADO POZO, J., & PRADO SALDARRIAGA, V. (2011). *"Manual de Derecho Penal-Parte General"* (4° Edición ed., Vol. I). Lima: IDEMSA.

INFORMÁTICA, I. N. (2015). *Compendio Estadístico Perú 2015*. Lima: INEI.

INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL. (Diciembre de 2015). [http://www.seguridadidl.org.pe/sites/default/files/INFORME%20ANUAL%202015\\_%20IDL-SC.pdf](http://www.seguridadidl.org.pe/sites/default/files/INFORME%20ANUAL%202015_%20IDL-SC.pdf). Recuperado el 15 de MAYO de 2017, de [http://www.seguridadidl.org.pe/sites/default/files/INFORME%20ANUAL%202015\\_%20IDL-SC.pdf](http://www.seguridadidl.org.pe/sites/default/files/INFORME%20ANUAL%202015_%20IDL-SC.pdf)

INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL. (2015). *Seguridad Ciudadana*. Lima: IDL.

INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL. (02 de Febrero de 2016). Elecciones 2016. Recuperado el 04 de 22 de 2017, de <http://idl.org.pe/file/835>

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA. (Julio de 2000). "Metodología para el Cálculo de Indicadores de mortalidad". *Colección "Metodología Estadísticas"*, 1-9. Recuperado el 19 de Mayo de 2017, de <https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/metodologias/mortalidad01.pdf>

JAITMAN, L. (2015). "Los Costos del Crimen y la Violencia en el bienestar en América Latina y el Caribe". *DC: Banco Interamericano de Desarrollo*, 1-111. Recuperado el 01 de Agosto de 2017, de [https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/7246/ICS\\_MON\\_Los\\_costos\\_del\\_crimen\\_y\\_la\\_violencia\\_en\\_el\\_bienestar\\_en\\_Am%C3%A9rica\\_Latina\\_y\\_el\\_Caribe.pdf?sequence=1](https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/7246/ICS_MON_Los_costos_del_crimen_y_la_violencia_en_el_bienestar_en_Am%C3%A9rica_Latina_y_el_Caribe.pdf?sequence=1)

JAKOBS, G., & CANCIO MELIÁ, M. (2003). *"Derecho Penal del Enemigo"*. España: THOMSON CIVITAS.

JAKOBS, G., & SERRANO GONZÁLES DE MURILLO, J. L. (1997). *"Derecho Penal Parte General"*. Madrid, España: CIVITAS.

JESCHECK, H. H. (2002). *"Tratado de Derecho Penal/Parte General"* (5° Edición ed.). (M. OLMEDO CARDENETE, Trad.) Granada: COMARES.

- JESCHECK, H. H. (2014). *"Tratado de Derecho Penal Parte General"* (Vol. I). (M. OLMEDO CARDENETE, Trad.) Lima, Perú: INSTITUTO PACÍFICO.
- JIMÉNEZ DE ASÚA, L. (1964). *"Tratado de Derecho Penal"* (4ª Edición ed., Vol. TOMO I). Buenos Aires: LOSADA.
- KANT, I. (2005). *"La Metafísica de las Costumbres"* (4ª Edición ed.). (A. CORTINA ORTS, & J. CONILL SANCHO, Trads.) Madrid, España: TECNOS.
- LA REPÚBLICA. (21 de agosto de 2016). Aertan que el fujimorismo muestra dureza para privilegiar su agenda. Lima. Recuperado el 29 de Abril de 2017
- LANDA ARROYO, C. (2006). *"Constitución y Fuentes del Derecho"*. Lima: PALESTRA.
- MARTINEZ CASTRO, E. (2014). *"El control Social Peruano"*. Lima: Grijley.
- MEDINA ARIZA, J. J. (2011). *"Políticas y Estrategias de Prevención del delito y seguridad ciudadana"*. Madrid: EDISOFER S.R.L.
- MESTRE DELGADO, E. (2004). *"Revista de Derecho Penal, Procesal y Penitenciario"*, 7-17. Recuperado el 17 de Mayo de 2017, de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=787517>
- MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. (2013). *"La Delincuencia en el Perú: Propuesta de intervención articulada"*. Lima: MINJUS.
- MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. (2016). *"Código Penal"* (Vol. 12ª Edición). Lima.
- MIR PUIG, S. (2008). *"Derecho Penal parte General"* (8ª Edición ed.). Barcelona, España: Lid. Reperttor.
- MONTOYA VIVANCO, Y. (2005). "Reeducación, Rehabilitación y Reincorporación Social del Penado. *Gaceta Jurídica*, II .
- MUJICA, J. (2013). "Problemas y Consideraciones Básicas sobre la medición del Delito en el Perú". *Perú Hoy: El Perú Subterráneo*.
- MUJICA, J., LÓPEZ, N., & PRADO, B. (2015). "El Impacto del robo y el Hurto en la Economía domestica: Un estudios Exploratory sobre los datos de Lima Metropolitana". *Debates en Sociología*(40), 127-147. Recuperado el 19 de Febrero de 2017, de file:///C:/Users/hello/Desktop/13861-55194-1-PB.pdf
- NAVARRO CORBACHO, F. (2016). "Evaluación ex post de la Ley: el parlamento de Evaluación de la Ley en la Cámara de Diputados de

- Chile". *Cuadernos Parlamentarios*(17), 95-112. Recuperado el 18 de Noviembre de 2016, de <https://www.oecd.org/about/50194073.pdf>
- OLIVARRIA GAMBI, M. (2015). "Los Costos del Crimen y la Violencia en el Bienestar en América Latina y el Caribe". *DC: Banco Interamericano de Desarrollo*, 1-111. Recuperado el 2017 de Agosto de 2017, de [https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/7246/ICS\\_MON\\_Los\\_costos\\_del\\_crimen\\_y\\_la\\_violencia\\_en\\_el\\_bienestar\\_en\\_Am%C3%A9rica\\_Latina\\_y\\_el\\_Caribe.pdf?sequence=1](https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/7246/ICS_MON_Los_costos_del_crimen_y_la_violencia_en_el_bienestar_en_Am%C3%A9rica_Latina_y_el_Caribe.pdf?sequence=1)
- PEGORARO, J. (2005). *"Las políticas de seguridad y la participación comunitaria en el marco de la violencia"*. Buenos Aires: Clacso. Recuperado el 12 de Octubre de 2017, de <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/gt/20101109032656/2pegoraro.pdf>
- PIGHI, P. P. (16 de Setiembre de 2015). *Google*. Obtenido de [http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/09/150911\\_peru\\_delincuencia\\_chapa\\_choro\\_ilm](http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/09/150911_peru_delincuencia_chapa_choro_ilm)
- Policía Nacional del Perú. (2015). *Anuario Estadístico 2015*. Lima: Ministerio del Interior.
- PORTAL DEL ESTADO PERUANO. (2015). "Consejo de Estado". Recuperado el 26 de Octubre de 2017, de <http://www.peru.gob.pe>
- PRADO SALDARRIAGA, V. R. (1966). *"Todo sobre el Código Penal"* (Vol. I). Lima, Perú: IDEMSA.
- PRADO SALDARRIAGA, V. R. (2016). *"Consecuencias Jurídicas del delito Giro Punitivo y Marco Legal"*. Lima, Perú: IDEMSA.
- PRADO SALDARRIGA, V. (1990). *"Derecho Penal y Política. Política Penal de la Dictadura y la Democracia en el Perú"*. Lima: EDDILI.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, P. (2013). *"Seguridad con rostro humano: Diagnóstico y Propuesta para América Latina"*. Anual, Nueva York.
- QUINTERO OLIVARES, G., & CUELLO CONTRERAS, J. (1996). *"Curso de Derecho Penal Español"*. Barcelona, España: CEDECS.
- RIVERA BEIRAS, I. (2005). *"Política Criminal y Sistema Penal. Viejas y nuevas Racionalidades Punitivas"*. Barcelona: ANTHROPOS.
- ROXIN, C. (1997). *"Derecho Penal Parte General"*. (D. M. LUZÓN PEÑA, M. DIAZ, GARCIA CONLLEDO, & J. DE VICENTE REMESAL, Trads.) Madrid, España: CIVITAS.



- ROXIN, Claus. (1972). *"Política Criminal y Sistema de Derecho Penal"* (2ª Edición ed., Vol. Segundo). (F. MUÑOZ CONDE, Trad.) Barcelona: Hammurabi S.R.L.
- ROY FREYRE, L. (1983). *"Derecho Penal parte Especial"* (Vol. III). Lima: INSTITUTO PERUANO DE CIENCIAS PENALES.
- RPP. (05 de Mayo de 2016). "Seguridad Ciudadana". (. V. debate., Entrevistador) Recuperado el 17 de 04 de 2017, de <http://rpp.pe/politica/elecciones/seguridad-ciudadana-las-propuestas-de-fuerza-popular-y-ppk-en-el-debate-noticia-962451>
- SALINAS SICCHA, R. (2015). *"Derecho Penal Parte Especial"* (Vol. II). Lima: IUSTITIA.
- SEPÚLVEDA SCARPA, M. (Mayo de 2009). "Introducción al Análisis Delictual". *CONCEPTOS*(7), 12. Recuperado el Sábado de Noviembre de 2016, de <http://www.pazciudadana.cl/wp-content/uploads/2009/05/conceptos-7-introduccion.pdf>
- SILVA SERNAQUÉ, S. (2002). *"Control Social, neoliberalismo y Derecho Penal"*. Lima: UNMS.
- TAPIAS FLORES, F. (2002). *"Los Derechos humanos en las Democracias Modernas"* (Trujillo Flores Tomás ed.). México.
- TERRADILLOS BASOCO, J. M. (2014). *"La investigación en el Derecho Penal"*. Lima: Centro de Investigación, capacitación y Asesoría Jurídica-CICAJ.
- TREJO ESCOBAR, M. (1992). *"Manual de Derecho Penal Parte General"*. El Salvador: Ministerio de Justicia.
- VAN SOOMEREN, P. (2001). "Prevención de la delincuencia mediante el Diseño ambiental(cpted) y mediante el espacio urbano(DOC)". *"Catalana de Seguretat Pública"*(9). Recuperado el 12 de Octubre de 2017, de <https://www.portlandoregon.gov/oni/article/320588>
- VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, F. (1980). *"Derecho Penal Parte General"* (3ª Edición ed.). Bogotá: TEMIS.
- VIDAURRI ARÉCHIGA, M. (Marzo de 2015). "Política Criminal: Concepto, finalidades, función y método". *Letras Jurídicas*(20), 22. Recuperado el 10 de Noviembre de 2016, de [file:///C:/Users/hello/Downloads/politica%20criminal%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/hello/Downloads/politica%20criminal%20(1).pdf)
- VILLAVICENCIO TERREROS, F. (2013). *"Derecho Penal parte General"*. Lima: Grijley.

- VON LISZT, F. (1914). *"Tratado de Derecho Penal"* (3ª Edición ed., Vol. II). (Q. SALDAÑA, Trad.) Madrid: REUS.
- ZAFARONI, E. (2000). *"Manual de Derecho Penal Parte General"* (2ª Edición ed.). Buenos Aires, Argentina: EDIAR.
- ZAZUETA VILLEGAS, R. (2003). *"Participación Ciudadana"*. Mexico: PARRUA.
- ZIPH, H. (1979). *"Introducción a la Política Criminal"*. (M. IZQUIERDO MACIAS, Trad.) EDESA.
- ZUGALDÍA ESPINAR, J. M. (2002). *"La Legitimación del Derecho Penal (Las teorías de la Pena)"* (3ª Edición ed.). Alicante, España: TIRANT LO BLANCH.
- ZUÑIGA RODRÍGUEZ, L. (2001). *"Política Criminal"*. Madrid: COLEX.